

Economía verde

El asalto final a los bienes comunes



Compendio especial:
BIODIVERSIDAD
SUSTENTO Y CULTURAS

Este compendio es una publicación especial de *Biodiversidad, sustento y culturas* con el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales y Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe

Biodiversidad, sustento y culturas es una publicación trimestral de información y debate sobre la diversidad biológica y cultural para el sustento de las comunidades y culturas locales. El uso y conservación de la biodiversidad, el impacto de las nuevas biotecnologías, patentes y políticas públicas son parte de nuestra cobertura. Incluye experiencias y propuestas en América Latina, y busca ser un vínculo entre quienes trabajan por la gestión popular de la biodiversidad, la diversidad cultural y el autogobierno, especialmente las comunidades locales: mujeres y hombres indígenas y afroamericanos, campesinos, pescadores y pequeños productores.

Organizaciones coeditoras

Acción Ecológica
notransgenicos@accionecologica.org
Acción por la Biodiversidad
agenciabiodla@gmail.com
Campana de la Semilla
de la Vía Campesina – Anamuri
internacional@anamuri.cl
Centro Ecológico
revbiodiversidade@centroecologico.org.br
GRAIN
carlos@grain.org
Grupo ETC
etcmexico@etcgroup.org
Grupo Semillas
semillas@semillas.org.co
Red de Coordinación en Biodiversidad
rcbcostarica@gmail.com
REDES-AT Uruguay
biodiv@redes.org.uy
Sobrevivencia
biodiversi@sobrevivencia.org.py

Comité Editorial

Carlos Vicente, Argentina
Ma. Eugenia Jeria, Argentina
Maria José Guazzelli, Brasil
Germán Vélez, Colombia
Silvia Rodríguez Cervantes, Costa Rica
Henry Picado, Costa Rica
Camila Montecinos, Chile
Francisca Rodríguez, Chile
Elizabeth Bravo, Ecuador
Ma. Fernanda Vallejo, Ecuador
Silvia Ribeiro, México
Verónica Villa, México
David Cardozo, Paraguay
Norma Giménez, Paraguay
Martin Drago, Uruguay

Administración

Lucía Vicente
sitiobiodla@gmail.com

Edición

Ramón Vera Herrera
constelacion@laneta.apc.org
ramon@grain.org

Diseño y formación

Daniel Passarge
danielpassarge@gmail.com

Depósito Legal núm. 340.492/07
Edición amparada en el decreto 218/996
(Comisión del Papel)
ISSN: 07977-888X

El trasfondo de la economía verde <i>GRAIN-WRM-ATLALC</i>	3
La doble cara de la destrucción de los bosques tropicales en Latinoamérica y el Caribe: las revelaciones de la economía verde en Acre <i>Elder Andrade de Paula</i>	13
La privatización de la Mata Atlántica: impactos de proyectos de REDD y reservas naturales sobre mujeres y hombres en comunidades tradicionales <i>Winfriedus Overbeek</i>	30
REDD en América Latina	45
México: ¿Cómo va el enREDDo en Chiapas? <i>Gustavo Castro Soto</i>	45
El Salvador: Mercantilizando nuestro último bosques <i>Silvia Quroa</i>	52
REDD en Costa Rica: un paso más en la mercantilización de los bosques <i>Isaac Rojas, Mariana Porras, Henry Picado</i>	57
REDD en Colombia <i>Diego Rodríguez Panqueva</i>	65
REDD en Argentina <i>Eduardo Sánchez</i>	69
REDD no Brasil y el Carbono falsificado <i>Lucia Ortiz y Clarissa Trois Abreu</i>	76
Proyecto REDD en Madre de Dios, Perú <i>Sebastián Valdomir</i>	81
La economía verde y los mosquitos transgénicos <i>Elizabeth Bravo</i>	89
La agricultura en la economía verde, ¿el futuro que queremos? <i>Soledad Vogliano</i>	94
Agricultura climáticamente inteligente: ¿qué hay detrás? <i>Maureen Santos</i>	101
Las corporaciones asaltan la naturaleza y a los pueblos (nuevamente) <i>Grupo ETC</i>	105
Por la unidad y la movilización de los pueblos en defensa de la vida y los bienes comunes, la justicia social y ambiental, contra la mercantilización de la naturaleza y la "economía verde" <i>Grupo de Articulación Internacional de la Cumbre de los Pueblos por Justicia Social y Ambiental</i>	112

Las fotos de este libro fueron tomadas por Prometeo Lucero, Jerónimo Palomares y Antonio Herrera. Son fotos que muestran la erosión de los bosques por incendios y deforestación. También quisimos mostrar parte de la cubierta vegetal ambicionada hoy en día por las grandes corporaciones. Fueron tomadas en las inmediaciones del Distrito Federal y el poblado de Huitzilac en el estado de Morelos, en México. Las pocas fotos de otros autores tienen su crédito en el sitio correspondiente.

Las ilustraciones de bosques y selvas son dibujos de Atziri Carranza (ya publicados previamente en Biodiversidad 61, y muestras del intenso y lúcido diseño gráfico de varias comunidades nahuas de Tlaxcala y Puebla en México, recogidos en la serie *Geometrías de la imaginación*, Conaculta, Sedeco, Instituto de Artesanías e Industrias Populares del Estado de Puebla e Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, 2009.

Esta es una publicación especial de la Alianza Biodiversidad con El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) y Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe (ATLALC).

Agradecemos el apoyo de la Fundación Siempenpuu



Economía verde

El asalto final a los bienes comunes

**ALIANZA
BIODIVERSIDAD**



**Amigos de
la Tierra
América Latina
y el Caribe**



Esta publicación es una colaboración de la Alianza Biodiversidad con el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) y Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe (ATALC)

Profundización de la crisis climática y ambiental
como camino a mejores negocios

El trasfondo de la economía verde

GRAIN-WRM-ATALC



Foto: Jerónimo Palomares

Vivimos tiempos difíciles. La humanidad y el planeta estamos sumergidos en una trama de diversas crisis que parecen agravarse o enraizarse cada vez más. La crisis climática se suma a una crisis ambiental más general, y ambas se agravan producto de la crisis económica. Al mismo tiempo, quienes detentan poder para determinar posibles cauces de acción nacional e internacional parecen incapaces de identificar soluciones reales. Las negociaciones internacionales giran en torno a falsas promesas de solución, en medio de un ambiente de complacencia y autoengaño que nos recuerda el traje del emperador: tenemos frente a nosotros la evidencia desnuda que las crisis son graves en extremo, pero sólo escuchamos aplausos para un manto de soluciones que no son tales.

A diferencia de lo que ocurría una década atrás, ya nadie puede esgrimir ausencia de evidencia o de conocimiento acerca de la crisis climática y de la crisis ambiental. Fueron miles y miles de organizaciones, activistas y científicos que se dedicaron a invertir todo tipo de esfuerzos para hacer conciencia en la sociedad y entre las autoridades. La evidencia científica y práctica es tan abrumadora, que los intentos por ignorarlas se batían en retirada. Por momentos, cuesta hoy recordar que no mucho atrás éramos un mundo en que casi todos los gobiernos y empresarios se negaban a reconocer la crisis climática o, en términos más generales, la crisis ambiental. Mientras el calentamiento y el deterioro seguían y seguían,



los gobiernos hacían poco o nada y las empresas querían que se hiciera menos aún. Sin embargo, la conciencia acerca del problema pareció abrirse camino de a poco. Hoy, los llamados a cuidar el planeta surgen de todos los rincones. Desde las bombillas de bajo consumo en cada hogar hasta grandes edificios corporativos que no contaminan un ápice, nos rodean los ejemplos sobre cómo todos y cada uno debemos hacernos responsables por las crisis y ayudar a solucionarlas.

Nuestra apreciación es que el calentamiento global posiblemente resultará ser una de esas fuerzas tectónicas que —como la globalización o el envejecimiento de las poblaciones— cambia gradual pero poderosamente el paisaje económico en el que operan nuestros clientes...

Dr John Llewellyn, Senior Economic Policy Advisor, Lehman Brothers¹

El crecimiento de la población y el desarrollo económico están ejerciendo crecientemente diversas presiones sobre el medio ambiente global. El cambio climático es la mayor de tales presiones..

Informe de Goldman Sachs de 21 de mayo de 2009²

¿Será que finalmente logramos concientizar a pueblos, gobiernos y empresarios? En parte claro que sí y en parte claro que no. La información que hemos socializado y la experiencia cotidiana han logrado que sectores extremadamente amplios sepan hoy que los sistemas climáticos y ecológicos han sido profunda y gravemente alterados. Por lo mismo, sólo una agenda ideológica de corte dogmático extremo permite negar en la actualidad que enfrentamos una crisis climática y ambiental de proporciones incalculables. Todo indica, sin embargo, que gobiernos y empresarios no decidieron reconocer lo obvio porque por fin vieron la luz, sino porque finalmente lograron idear o entrever formas de hacer mucho dinero con las crisis que afectan la sobrevivencia del planeta. Todos los grandes actores de las finanzas globales³, así como un número creciente de fondos de inversión en cambio climático⁴ —tanto públicos como privados— con el apoyo del Banco Mundial, el FMI y los bancos regionales de desarrollo, han elaborado documentos donde resaltan una y otra vez las grandes oportunidades de negocios que se han creado con las alteraciones del clima y los ecosistemas. A ellos se les suma la labor de “cheerleaders” que ejercen, más y más, los gobiernos y los organismos de Naciones Unidas, especialmente el PNUMA, pero también FAO y UNCTAD.

Creemos que hay disponibles excelentes rentabilidades por las inversiones que se hagan en empresas que se beneficiarán de los esfuerzos por mitigar y adaptarse al cambio climático. Enfrentar el cambio climático probablemente será el mayor tema de inversión a nivel global en los próximos 20 años y más

Robin Stoakley, Director de Schroders Climate Change Fund.⁵

Invierta en el futuro —con productos sustentables del Deutsche Bank. Cuando examinamos la economía global, se hace visible la amplitud de las oportunidades de negocios en el sector del cambio climático. Rápidamente las empresas y los inversionistas se están dando cuenta que el cambio climático no es meramente un asunto social, político o moral, sino también un asunto económico y de negocios.

Deutschebank⁶

Creo con pasión que si reformulamos los argumentos a favor de actuar sobre el cambio climático, alejándonos del lenguaje de las amenazas y castigos, y utilizando términos positivos, en términos de obtención de lucro, podemos tener un mucho mayor impacto.

David Cameron, Primer Ministro del Reino Unido⁷

¹ http://www.lehman.com/press/pdf_2007/TheBusinessOfClimateChange.pdf

² Goldman Sachs. Change is coming: A framework for climate change – a defining issue of the 21st century. <http://www.goldmansachs.com/our-thinking/environment-and-energy/change-is-coming.html>

³ Los diez mayores entes financieros a nivel global —Bank of America, Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Nomura Securities, UBS, Wells Fargo Securities— han publicado documentos sobre las potencialidades de la economía verde en sus sitios web.

⁴ Véase, por ejemplo, <http://www.schroders.com/staticfiles/Schroders/MarketStrategyAndNews/PR/PressReleases/Climate-change-launch-May2007.pdf>

⁵ <http://www.schroders.com/staticfiles/Schroders/MarketStrategyAndNews/PR/PressReleases/Climate-change-launch-May2007.pdf>

⁶ <http://www.db.com/italia/en/content/1357.html>

⁷ <http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/nov/28/david-cameron-climate-change-cancun>

A esta nueva posible área de negocios se le ha denominado “economía verde”. De abarcar casi exclusivamente las actividades relacionadas con la generación de energía a partir de fuentes distintas al petróleo, el concepto hoy se usa de manera más amplia para incluir: la comercialización de todos los bienes que nos entrega la Naturaleza (desde el agua, la biodiversidad y la tierra, hasta el aire, la belleza escénica, la recarga de los ríos y lagos y cuanto proceso natural para el cual se invente una forma de venderlo⁸) y todas las actividades económicas que surgen de iniciativas para supuestamente mitigar el cambio climático y el deterioro ambiental, para adaptarse a ellos o para responder a sus efectos, especialmente los efectos nocivos. Agencias como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y muchos gobiernos, utilizan en sus documentos una definición que incluye consideraciones de sustentabilidad, combate a la pobreza, equidad e inclusión. Pero tales definiciones se derrumban al mirar ejemplos concretos de implementación (como los que se discuten en este libro) y en especial al leer documentos destinados a inversionistas del mundo entero. A fin de cuentas son los inversionistas los que están dando forma real a la economía verde.

Las cifras son aún vagas. Los estudios y documentos corporativos y gubernamentales aseguran una y otra vez que existen grandes oportunidades para acumular riquezas (en el orden de los billones de dólares), pero no explican sus cálculos sobre el futuro ni dan cifras generales más precisas. En el mejor de los casos, discuten los casos existentes que actualmente se consideran exitosos. Aun así, las posibilidades de hacer ganancias parecieran ser mayúsculas. Morgan Stanley, que ha sido de las pocas entidades que ha dado cifras concretas, indicó en 2007 que nada más en el sector de las “energías limpias” habría ingresos del orden de billones de dólares para el año 2030⁹. Actualmente, sólo el mercado de carbono mueve globalmente cerca de 180 mil millones de dólares al año¹⁰. El mercado total de bienes y servicios “bajos en carbono” (que incluye sólo parte de los servicios de adaptación) superaría en la actualidad los 5 y medio billones de dólares anuales (más del 7% del producto interno bruto global) y está creciendo de manera acelerada¹¹. Esta cifra queda pequeña frente a lo que significa privatizar la naturaleza en su conjunto. La cifra dada muy al principio por uno de los promotores pioneros de la economía verde es que si todo lo que entrega la naturaleza fuese convertido en mercancía, el negocio que se crearía es equivalente a unas dos veces el producto bruto mundial en su cálculo más conservador^{12,13}.

Sin embargo, no importa cuán brillante se calcule, se vea o se pinte el futuro de las “inversiones verdes”, la economía verde sigue siendo hasta el momento una apuesta especulativa. Nadie sabe exactamente cuánta riqueza se podrá acumular, quién la acumulará, cómo será posible acumularla, ni exactamente en qué campo. Es este carácter especulativo lo que permite entender muchas de las características actuales de los “emprendimientos verdes” y especialmente de lo que está ocurriendo con las negociaciones internacionales en torno al cambio climático y medio ambiente. Lo que vemos hoy es cómo los grandes capitales buscan crear condiciones para mover todas las piezas necesarias, no importa cuán significativas, para así efectivamente garantizar que la economía verde se convierta en un meganegocio. Para ello se necesitan manos libres y cualquier obligación o compromiso vinculante puede ser una molestia. De allí se entiende la aparente paradoja de que justo en el momento en que parecemos estar todos de acuerdo no sólo sobre la existencia del problema, sino además acerca de su gravedad y urgencia, se derrumban (casi podríamos decir por consenso gubernamental-empresarial) los pocos e insuficientes compromisos para hacer algo al respecto.

La economía de la destrucción. ¿Cuáles son las apuestas que hacen hoy las grandes corporaciones con el aplauso de la mayoría de los gobiernos frente a ese futuro incierto, pero prometedor?

⁸ De acuerdo al informe TEEB, *La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad* (informe comisionado por el G8, el grupo que reúne a los ocho países con las economías más grandes del mundo y que será la base de sus posiciones en Río+20), uno de los mayores desafíos que se enfrenta hoy es que “Todos los días la naturaleza nos da muchas cosas y de mucho valor, pero la naturaleza esquiva los mercados, queda al margen en la fijación de precios y se escapa de las tasaciones”. <http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/>

⁹ Clean Energy: Sustainable Opportunities. Octubre 25, 2007. <http://www.morganstanley.com/views/perspectives/print/0fbc1272-41a0-11de-a1b3-c771ef8db296.html>

¹⁰ Point Carbon. Volume of carbon traded in 2011 grew 19%, bucking downturn. 11 Jan 2012 <http://www.pointcarbon.com/aboutus/pressroom/pressreleases/1.1714530>

¹¹ Low carbon environmental goods and services. Report for 2009/2010. Report commissioned by the Department of Business, Innovation and Skills. Julio 2011. <http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/business-sectors/docs/l/11-992x-low-carbon-and-environmental-goods-and-services-2009-10>

¹² Robert Constanza et al. The value of the world's ecosystem services and natural capital. *Nature*, vol. 387, 15 mayo, 1997.

¹³ El producto bruto global se estima hoy entre 60 y 70 billones de dólares. Ver, por ejemplo, datos entregados por Banco Mundial en <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries>

Si todo el que necesitase un pedazo de tierra para cultivar o vivir tuviese acceso a ella, nadie necesitaría comprar o arrendar tierra. La tierra se ha convertido en mercancía cuando pueblos enteros han sido expulsados de ella, ya sea por el cercamiento, las encomiendas y haciendas, los acaparamientos actuales.

La primera, por supuesto, es que no se pueden destruir los negocios actuales si es posible sacarles algo más de jugo y si no surgen otros aún más jugosos. Por tanto, si los negocios actuales necesitan quemar petróleo, destruir el medio ambiente o continuar emitiendo gases con efecto de invernadero a partir de cualquier fuente, no paremos la destrucción, sólo démosle, o pretendamos darle, un cauce controlable. Y si contrarrestar el daño o medicar sus efectos es buen negocio, ¿por qué no destruir un poquito más para que haya más que reparar y medicar? Entramos así a la era de la destrucción programada, la hermana bruta de la obsolescencia programada. Por ello, no es sorprendente que las propuestas de economía verde estén tan íntimamente ligadas a las falsas soluciones a las crisis climática y ambiental. Como tampoco lo es la absurda discusión de si debemos tener como “meta” que el planeta de caliente 2°, 3° o 4°C.

La lógica de la destrucción es parte de la lógica más amplia de la escasez, proceso básico de la economía capitalista, que consiste en convertir los bienes no controlados por el mercado en bienes escasos, para así tornarlos en mercancía. Todo ello bajo el cálculo que mientras más escaso sea un bien, más estaremos dispuestos a pagar por él. Y cuando el despojo es total, ya no hablamos de la disposición a pagar, sino de la obligación de hacerlo. Si todo el que necesitase un pedazo de tierra para cultivar o vivir tuviese acceso a ella, nadie necesitaría comprar o arrendar tierra. La tierra se ha convertido en mercancía cuando pueblos enteros han sido expulsados de ella, ya sea por el cercamiento, las encomiendas y haciendas, los acaparamientos actuales, etcétera. Si todos nosotros pudiésemos producir nuestro propio alimento, nadie pagaría por él. Si todos tuviésemos acceso al agua, nadie se vería obligado a pagar por ella. El cobro se hace posible al concentrarse gente en la ciudad, al deteriorarse y disminuir las fuentes de agua, al contaminarla o hacerla parecer contaminada (para, por ejemplo, vender agua embotellada), o al construir represas por doquier.

La destrucción programada es sólo una forma de producir escasez. No es algo nuevo y va mucho más allá de la economía verde. Para poder lucrar de la mano de obra asalariada, el capitalismo debió destruir los medios de vida que brindaban sistemas sociales distintos a él en el mundo entero, y lo hizo jugando la carta de las promesas de la modernidad, pero también con las balas de las guerras imperiales. Para convertir las semillas en gran negocio, se impulsó la destrucción de los sistemas tradicionales de custodia, mejoramiento, goce, intercambio y producción de las semillas, eliminando así la capacidad de millones de hombres y mujeres del campo para producir su semilla. Esa destrucción se sigue impulsando hasta ahora; no hay otra forma de entender, por ejemplo, por qué algo tan absurdo como la prohibición de vender e intercambiar semillas locales se haya impuesto en Europa y se busque imponer en el mundo entero como parte de leyes de propiedad intelectual.

Pero los ecosistemas y el clima aún se interconectan con todos, y todos aún parecíamos tener acceso a ellos. ¿De qué manera se hacen “escasos” para así convertirlos en fuente de negocios? En primer término, siguiendo la conocida vía de la privatización. El menú es diverso:

No es conspiración, es sentido de la oportunidad

La experiencia histórica nos dice que gobiernos y sectores sociales poderosos pocas veces han planificado o previsto su futuro con certeza. A menudo, los avatares mundanos los han tomado tan de sorpresa como al resto de los mortales. Pero lo que hace distintos a los grandes hombres de la economía capitalista, es su capacidad innegable e inigualable para aprovechar el instante cuando éste se ve prometedor, y expurgar los peligros cuando ellos acechan. ¿Hubo algún cónclave empresarial que decidió 50 años atrás el desarrollo de la ingeniería genética? Ni remotamente. Ella surgió de científicos que posiblemente poco sabían de economía y de política. Pero una vez que su potencial económico y de control se fue desplegando, las grandes corporaciones se han apoderado de ella hasta controlarla y subordinarla a niveles pocas veces vistos. ¿Alguien previó el carácter aparentemente subversivo de internet? Ciertamente no los estrategas militares que la impulsaron. Pero una vez que el peligro se hizo visible, las autoridades civiles y militares, en perfecto concierto con el lobby empresarial, impulsan su represión a extremos que pocos años atrás sólo podíamos ver en películas de ciencia ficción.

Con el cambio climático ocurrió algo similar. Nadie lo planificó, nadie lo previó, nadie lo quiso. Pero ya que está aquí, las oportunidades de hacer negocios no serán desaprovechadas.

acaparamiento de tierras, privatización del agua, privatización de parques nacionales, privatización del mar (bajo el pseudónimo de concesiones), privatización del subsuelo (para la minería, el agua y el petróleo), patentamiento de genes y seres vivos, creación de sistemas de pago por elementos como el aire y la lluvia, etcétera. Cada uno de estos procesos significa que pueblos y comunidades cuyos medios de vida dependen de los ecosistemas afectados no tendrán acceso a elementos fundamentales para la alimentación, la vivienda y la pervivencia de sus formas de convivencia, agricultura, creación cultural, goce estético, etcétera.

En segundo término, ¿por qué no explorar, como ya decíamos, la vía de un poco más de deterioro? Si los bosques se hicieran aún más escasos o frágiles, ¿no estaríamos más dispuestos a pagar caro por que se mantengan los que aún existan o por un programa de remediación que los restaure? Si el deterioro climático y ambiental es tal que el alimento se hace escaso, ¿las grandes corporaciones del agronegocio no multiplicarán sus ganancias, como tan bien lo demostró la crisis del 2008? Pensemos en un planeta donde los paisajes hayan sido devastados ampliamente, y sabremos que los parques nacionales y zonas de reserva serán un negocio redondo, no sólo por las funciones ecológicas que puedan desempeñar, sino por su vinculación al turismo o simplemente el acceso a la belleza. Si aún no nos cobran por respirar, es porque aún hay aire respirable suficiente para poder respirar sin pedirle permiso a nadie. Pero piénsese en una situación de escasez de aire respirable, y no es difícil imaginarnos haciendo cola para comprar contenedores de aire puro.

Imaginémonos entonces un mundo donde las condiciones climáticas sean una amenaza permanente y de inmediato podremos visualizar una industria floreciente comercializando condiciones artificiales para enfrentar los efectos del clima, desde medicamentos contra nuevas enfermedades y espacios en zonas altas contra las inundaciones, hasta refugios contra tormentas, sistemas de estabilización de temperaturas, promotores de lluvias, etcétera. Y no hablamos aquí sólo de condiciones domésticas o locales, sino de espacios tan amplios como los que propone cubrir la geoingeniería. Detrás de cada una de las absurdas propuestas ingenierriles para controlar el clima o enfriar el planeta, encontraremos una empresa buscando convertirse en realidad o expandirse.



Foto: Jerónimo Palomares

Sin embargo, aunque la salud humana puede sufrir por el cambio climático, las empresas médicas pueden mejorar su situación financiera como resultado de un aumento de la demanda por sus productos

Dr John Llewellyn Lehman Brothers¹⁴

Las amenazas físicas, como mayores sequías, tormentas más frecuentes y más intensas y una tendencia general a inviernos más cálidos y veranos más calurosos disparará los ingresos de los abastecedores de agua y de las compañías de seguros, cuyas primas subirán.

Climate Change Corp. Climate News for Business¹⁵

8



Acaparando lo que quede. La destrucción por supuesto, ha de tener un límite. En algún lugar, en algún nivel o condición —que aún no conocemos— habrá un límite en que el mal funcionamiento del clima o del conjunto de los ecosistemas dejará de ser buen negocio y pasará a ser un problema ineludible incluso para los dueños del gran capital y el funcionamiento de los negocios. Por ello se necesitan estrategias complementarias.

Una primera vía, que posiblemente se proyecte entre las más importantes a futuro, es la de controlar, apoderarse y acaparar físicamente espacios de reserva donde, supuestamente, la naturaleza o alguna parte de ella seguirá funcionando de manera adecuada, o en su defecto apoderarse los espacios que contengan los recursos claves que permitan paliar los efectos de la crisis y ganar mucho dinero vendiendo tales paliativos. Éste es el segundo papel que cumple la privatización. Ésta es la lógica, por ejemplo, del acaparamiento de tierras.

En la medida que la agricultura se vaya haciendo más difícil, será cada vez mejor negocio poseer o controlar tierras cultivables en el corto o largo plazo. Razones y lógicas similares yacen detrás de la carrera por nuevas concesiones pesqueras en aguas más frías, de la fiebre de privatización de parques nacionales y reservas naturales, o de la compra de vastas extensiones de tierras bajo vegetación natural, ya sea en zonas de selva tropical, o en el extremo sur de América del Sur.

El control físico de grandes extensiones cumple en esta lógica de expansión de los negocios otro papel importante: impedir que especialmente las poblaciones rurales sigan ejerciendo la vocación de evadir los mecanismos de la dependencia. Ochenta y cinco por ciento de las familias campesinas e indígenas del mundo acceden a menos de dos hectáreas de tierra¹⁶ y, sin embargo, aún se las arreglan para no desaparecer, para mantener en su mayoría la “informalidad” y las formas de evasión de los mercados. A pesar de todos los cercos legales, técnicos, políticos y propagandísticos que se le tienden a la agricultura campesina e indígena, las relaciones con el mercado avanzan de manera irregular y las resistencias surgen y resurgen en distintas circunstancias. La lección aprendida por las grandes empresas y entes financieros pareciera ser que mientras les queden recursos propios, los pueblos del campo pueden siempre reinfectarse con el virus de la autonomía. La respuesta, una vez más es: despojo total.

¹⁴ http://www.lehman.com/press/pdf_2007/TheBusinessOfClimateChange.pdf

¹⁵ <http://www.climatechangecorp.com/content.asp?ContentID=4852>

¹⁶ Oksana Nagayets. *Small farms: current status and key trends* Prepared for the Future of Small Farms Research Workshop, Wye College, June 26–29, 2005. www.smallholdercoalition.org/files/Small-farms-current-status-and-key-trends.pdf

Ya sea como blindaje frente al deterioro ambiental, ya sea como forma de desarmar los mecanismos de evasión y resistencia, ya sea simplemente como gran negocio, el control físico de los espacios ha pasado a identificarse como estratégico por parte de los capitales. Por lo mismo irá ineludiblemente aparejado con procesos de expulsión de familias, comunidades y pueblos desde sus poblados, tierras y territorios, procesos que ya estamos presenciando de manera creciente. Si la expulsión y toma de posesión se hará de manera “tranquila” o exigirá medidas de guerra abierta dependerá en gran medida de la existencia de gobiernos que cooperen con los inversionistas y repriman a las posibles hordas.

Un poquito de azúcar para facilitar las cosas. Desde el punto de vista de los negocios, la guerra o el descontento pueden ser ineludibles, pero también altamente inconvenientes. Por lo tanto, antes de aplicar el garrote, es conveniente mostrar la zanahoria. Para los territorios indígenas y campesinos, que aún cubren una superficie importante y contienen en ellos muchos de los bienes naturales mejor conservados, la zanahoria preferida por el momento es la de la venta de servicios ambientales y sus derivados, especialmente REDD y REDD Plus. Como ya lo han dicho innumerables organizaciones sociales, la estrategia REDD/servicios ambientales es un mecanismo que, por un lado, permite a muchas de las empresas más contaminantes y destructivas del planeta seguir contaminando y obtener ganancias de esa destrucción y, por otro lado, crea condiciones para la expropiación paulatina de espacios y territorios aún en manos campesinas y de pueblos indígenas. En una primera fase, lo que se expropia es la capacidad de familias, comunidades y pueblos a determinar libremente las formas de manejo, goce y protección de sus espacios y sus bienes comunes. Con la excusa de hacer tratos serios, se imponen por contrato —o por simple orden de las autoridades— planes de manejo determinados externamente, que limitan las fuentes de alimentación y sobrevivencia, alteran los sistemas de convivencia, destruyen o debilitan las organizaciones y traen a cambio ingresos monetarios exigüos que no solucionan problemas de fondo e incluso exacerban las tensiones creadas. Los ejemplos que van tornándose conocidos muestran comunidades que se endeudan, dispersan o quiebran, lo que a menudo se traduce en abandono, migración, división de tierras comunales, aceptación de contratos de arriendo a largo plazo, y finalmente venta de tierras o la entrega de ellas porque se les obligó a utilizarlas como prenda hipotecaria. La zanahoria muchas veces no logra impedir el descontento, pero a menudo permite que éste surja sólo una vez que las comunidades involucradas ya no estén en condiciones de reaccionar o resistir.

Manos libres para algunos, grilletes para el resto. La lógica de la escasez y la destrucción mejora las posibilidades de los negocios, pero no aporta claridad a los cálculos sobre el futuro. Por el contrario, los hace más inciertos. ¿Qué se puede destruir y cuánto sin causar una debacle que afecte también los negocios? ¿Hasta dónde es posible asegurar que los sufrimientos que sin duda traerá la crisis climática no lleven a descontentos sociales que alteren todo? ¿Qué ocurre si los procesos de expulsión y exclusión provocan explosiones sociales? La incertidumbre económica, la incertidumbre física, la incertidumbre biológica y la incertidumbre social no sólo se suman, sino que se exacerban unas a otras.

¿Qué se hace frente a la incertidumbre? Lo que no se nos dice pero está en el trasfondo es que los capitales buscan hoy crear una dualidad legal: libertad total para los capitales, restricciones cada vez mayores para los pueblos. Como decir esto sería muy mal visto, desde las entidades empresariales, financieras y gubernamentales se nos habla de libertad, modernización, disciplina, transparencia, responsabilidad social empresarial, autorregulación, apertura de oportunidades,

Globalmente, es posible que el cambio climático lleve al descontento político y posiblemente incluso a la guerra. El agua se convertirá en un recurso cada vez más escaso en algunas partes del mundo, mientras en otras los niveles más altos del mar pueden causar migraciones masivas que provoquen tensiones internacionales.

London Climate Change Partnership: Finance Sub-Group. 2006.¹⁷

¹⁷ *Adapting to climate change: Business as Usual?* Informe publicado por la alcaldía de Londres. <http://www.london.gov.uk/lccp/publications/docs/business-as-usual.pdf>



Foto: Jerónimo Palomares

¹⁸ Sólo como ejemplo, el Grupo Banco Mundial (conformado por el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional y la Agencia Multilateral para las Garantías a la Inversión —MIGA en inglés) desarrollan un área de trabajo denominado “clima empresarial” destinado a facilitar el establecimiento y funcionamiento corporativo en el mundo entero. Han publicado un manual llamado “Cómo reformar los permisos empresariales” (“How to reform business licenses”) y lo describen como un manual para llevar a cabo reformas legales “estilo guillotina”. Entre el tipo de permisos cuyas exigencias hay que “guillotinar” se encuentran los permisos mineros. <https://www.wbginvestmentclimate.org/advisory-services/>. En una segunda publicación, las mismas entidades informan que entre 2008 y 2011 sólo sus programas lograron impulsar en el mundo entero 641 reformas de eliminación de requisitos legales “innecesarios” o “injustificados” para la actividad empresarial. https://www.wbginvestmentclimate.org/uploads/2011%20FIAS%20AR_FINAL.pdf. Luego, a sólo algunas páginas de distancia, el Banco Mundial justifica la instalación de nuevas leyes de propiedad intelectual que “impida que los agricultores guarden semillas de la variedad protegida, compartan la semilla con sus vecinos o lleven a cabo ventas informales de semilla”. http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/IPR_ESW.pdf

combatir la piratería, fomentar la inversión, crear un entorno seguro, pero en concreto se negocian cambios en legislaciones, reglas, normas, estatutos, criterios y estándares que obstruyan lo más posible que los pueblos, las comunidades, las organizaciones y los individuos ejerzan derechos fundamentales, puedan mantener algún grado de independencia frente al capital y persigan la obtención de la justicia, mientras abren el mayor espacio de maniobra para las corporaciones¹⁸.

La ausencia de reglas para las corporaciones es importante, en primer lugar, para seguir acumulando ganancias. También lo es para minimizar los costos y riesgos del capital frente a las crisis climática y ambiental, especialmente lo que han dado en llamar “riesgos legales y regulatorios”, así como los “riesgos de litigación.” Los primeros se refieren centralmente a nuevas exigencias que los obliguen a adoptar tecnologías o procesos más caros que los actualmente en uso y lo segundo a la posibilidad de enfrentar demandas judiciales que los obliguen a pagos millonarios o a hacer los cambios de tecnología antes mencionados.

Pero en el mediano y largo plazo, la ausencia de reglas (o al menos el gran margen de maniobra que les proporcionan los tratados de libre comercio y otros tratados internacionales, así como modificaciones constitucionales y jurídicas diversas) es posiblemente más importante porque entrega plena libertad de acción para explorar, tomar posición y tomar posesión de un campo que se despliega hasta el momento incierto y desconocido. Cuando el campo de juego aún no está claro, lo que los grandes capitales están pidiendo, y muchos gobiernos corren a concederles, es un cheque en blanco que les permita experimentar, especular aquí y allá hasta tener una idea más precisa de dónde está realmente la riqueza extraíble, para posteriormente tomar posesión si los negocios funcionan. Los grandes capitales necesitan, al menos por el momento, un “todo vale”, un *laissez faire* planetario y extremo, y para ello cuentan con la cooperación de la mayor parte de los gobiernos y organismos internacionales.

Papá Estado entra en escena. Pero incluso aplicando las diversas estrategias, el futuro sigue lleno de incertidumbres. ¿Cuál será la mejor forma de adquirir el

control? ¿Qué tal si resulta demasiado cara? ¿Qué pasa si se eligen los espacios equivocados? ¿Y si la inversión necesaria es demasiado alta? ¿O las ganancias se demoran en llegar? ¿Y si la población se vuelve en contra y se pierde la inversión?

Las preguntas son demasiadas para invertir de manera segura. Por lo mismo, la inversión privada en los nuevos mecanismos de mercado (por ejemplo, REDD) ha sido hasta el momento mayoritariamente cauta y muchas veces marginal. Lo que han hecho las entidades privadas de inversión ha sido principalmente utilizar dineros ajenos para experimentar.

Aquí entran en escena las “asociaciones público-privadas”. En ellas se busca la complementación perfecta: los Estados correrán el riesgo y las empresas correrán a recoger las ganancias. Como ya hemos visto en varios otros procesos de concentración de la riqueza, los Estados serán los llamados a invertir mientras haya que correr riesgos grandes, sean necesarios procesos importantes de investigación y desarrollo, o los costos y las necesidades de inversión base sean demasiado altas. Las empresas privadas serán las que ejecutarán el trabajo que las inversiones estatales pagarán, y lo cobrarán a tasas convenientes para ellos. Son cientos los proyectos de investigación, construcción de infraestructura, creación de sistemas de seguros, creación de sistemas de control de los consumidores, etcétera, que ya están en marcha con dineros estatales. Y si algún estado no tiene dinero, el Banco Mundial y otras agencias están disponibles para asegurar el endeudamiento¹⁹. La presencia del Estado, sin embargo, no es de larga duración. Una vez que las condiciones se hacen más claras y propicias, el traspaso al sector privado de las buenas oportunidades de negocios se lleva a cabo. Si tales oportunidades se presentan poco prometedoras, serán los Estados los encargados de pagar los costos.

Acceso a nuevas fuentes de financiamiento: bajo los acuerdos internacionales sobre cambio climático, habrá mayor financiamiento público para los esfuerzos de adaptación en comunidades vulnerables en países en desarrollo, y los gobiernos buscarán a socios del sector empresarial que puedan entregar los necesarios bienes y servicios. Una respuesta efectiva al cambio climático no sólo requiere financiamiento para el desarrollo de tecnologías bajas en carbono, sino también puede resultar en financiamiento para investigación y desarrollo de productos y servicios relacionados con necesidades de adaptación fundamentales. Las empresas locales y globales que actúen de manera temprana para desarrollar capacidades expertas relacionadas con la adaptación al cambio climático y las soluciones de la economía verde, tendrán una ventaja competitiva para aprovechar las oportunidades de ser contratados por socios gubernamentales

Adapting for a Green Economy: Companies, Communities and Climate Change. A Caring for Climate Report²¹

Otra fuente de dinero ajeno para hacer inversiones en beneficio propio es el de los fondos de pensión. Las entidades financieras y los mecanismos de inversión toman el dinero de las pensiones y los invierten con ganancias aseguradas para ellos a través de los cobros de administración. Si las inversiones provocan ganancias, las entidades de inversión ganan; si las inversiones fallan, pierden los trabajadores. Éste es un mecanismo que ya está siendo utilizado de manera significativa en el acaparamiento de tierras, pero es también el que utiliza el que hasta ahora es considerado el más exitoso fondo de inversiones en “empresas verdes”²².

Recuperando el verde esperanza. Enfrentamos tiempos difíciles. Las agresiones de la economía verde ya dejaron de ser amenazas teóricas y van tomando un carácter trágico, especialmente para muchas comunidades rurales. Lo que vemos más y más son formas de presión, desinformación o abierto engaño, chantaje e intimidación utilizadas con el fin de impedir que las familias y comunidades

Otra limitante es que los beneficios esperados, aun cuando sean comercializables (como en el caso de abastecimiento de agua o de tratamiento de basuras), pueden tomar tiempo para materializarse. Junto con los altos costos, esto puede desincentivar la inversión privada, lo que implica que el papel de los gobiernos y de los fondos públicos es crucial

I I

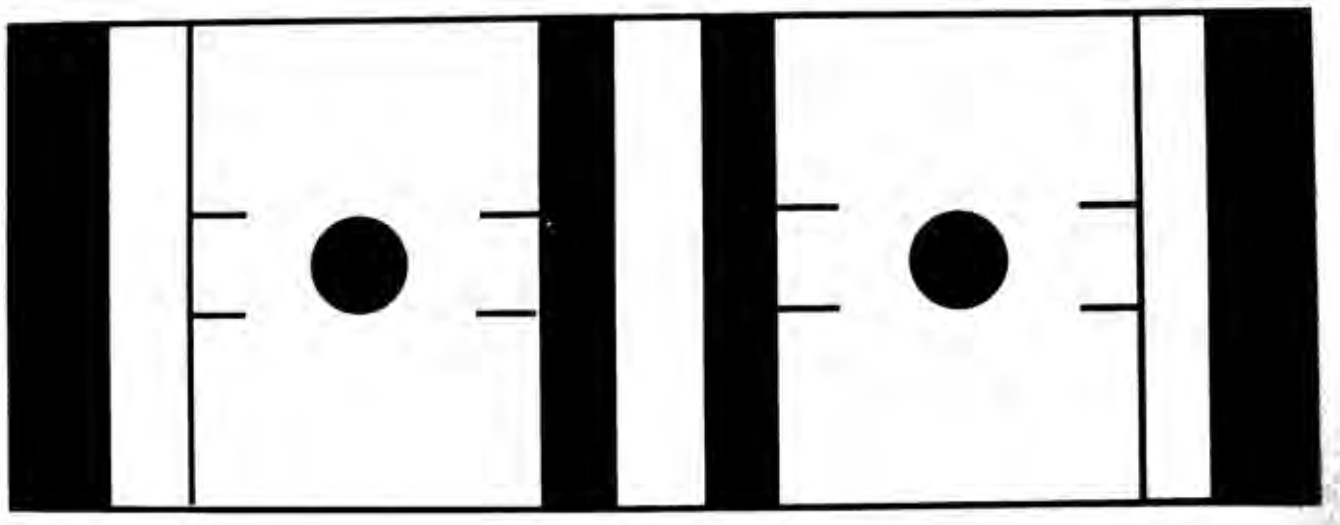
TEEB —The Economics of Ecosystems and Biodiversity for National and International Policy Makers 2009.²⁰

¹⁹ Véase, por ejemplo, el sitio web del Banco Mundial. Al buscar préstamos asociados a cambio climático, <http://www.worldbank.org/projects/search?lang=en&searchTerm=climate%20change>, más del 80% de los últimos 200 préstamos aprobados se han hecho a entidades estatales de distinto nivel. Véase también una lista de diversos fondos <http://www.climatefundsupdate.org/global-trends/global-finance-architecture>

²⁰ http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ClcBEBYwAw&url=http%3A%2F%2Fwww.unep.org%2Fpdf%2FTEEB_D1_Summary.pdf&ei=C_mqT6zkEtTlggeZ94WJCA&usg=AFQjCNFvPqcGhjA4_OOMHdwtnEYqSgH1NA&sig2=qJxJXHzVCyPT4bLThhSFUw

²¹ Informe redactado por el Pacto Mundial y el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, Oxfam y World Resources Institute. www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Environment/climate/C4C_Report_Adapting_for_Green_Economy.pdf

²² Véase como ejemplo http://www.altenergystocks.com/archives/2010/11/alternative_energy_and_climate_change_mutual_funds_part_ii.html y <http://www.iigcc.org/>



*Si comprendemos, al
igual que muchos
pueblos del campo, que
nuestra labor es
emprender una batalla
sin fecha límite por
cuidar y recuperar la
salud de todo el planeta,
el tiempo está a favor
nuestro.*

involucradas tengan la oportunidad de informarse adecuadamente, reflexionar individual o colectivamente, hacer uso de mecanismos colectivos de deliberación, decisión y movilización, o puedan revertir la firma de contratos dañinos y abusivos. Frente a esto, las tareas urgentes son muchas, pero una y otra vez se repite la necesidad de fortalecer la capacidad para ver más allá de la propaganda, la desinformación y las mentiras, para recuperar los mecanismos de reflexión y decisión colectiva que permitan resistir y desmontar las agresiones.

Enfrentamos tiempos difíciles. Pero somos parte de un número creciente de personas, organizaciones, comunidades y pueblos que vamos tomando conciencia que lo que el mercado explotó y destruyó no puede ser reparado por una expansión del mercado. Somos parte de una mayoría que tiene en sus manos la experiencia y la disposición para fortalecer o poner en marcha las soluciones reales, desde formas de vida digna que no dependen del consumo ni las ganancias desenfrenadas, hasta sistemas locales de agricultura y alimentación en base a la soberanía de los pueblos y la permanencia de los pueblos indígenas y campesinos en los espacios rurales. Son muchas las formas de organización y movilización que hoy se proponen y desarrollan para hacer realidad lo anterior y para hacer comprender a las autoridades que la movilización no cesará hasta lograr la implementación de soluciones reales.

Enfrentamos tiempos difíciles, sin lugar a dudas. Pero si comprendemos, al igual que muchos pueblos del campo, que nuestra labor es emprender una batalla sin fecha límite por cuidar y recuperar la salud de todo el planeta, el tiempo está a favor nuestro.

La doble cara de la destrucción de los bosques tropicales en Latinoamérica y el Caribe: las revelaciones de la “economía verde” en Acre

Elder Andrade de Paula¹

13



Foto: Jerônimo Palomares

Introducción. En la víspera de otra conferencia mundial sobre la problemática ambiental, “Río +20” (que hace énfasis en la crisis climática), nos encontramos con grandiosos esfuerzos del centro de poder mundial para promover un debate sin debates. La desgastada receta del “desarrollo sustentable”, ahora reciclada con el nombre “economía verde”, se plantea como única alternativa para “salvar al planeta”.

Los monopolios de los medios de comunicación traducen el debate al “sentido común” como una disputa entre quienes plantean “alternativas viables” (“desarrollo sostenible”) y los “críticos de siempre” que “no tienen qué proponer” y se limitan a “acusar al capitalismo y a las multinacionales” como responsables de todo. En nuestra opinión, una de las posibilidades de escapar a este tipo de dualismo maniqueísta que orienta la formación de ese “sentido común” es investigar lo que se ha señalado como alternativa en el ámbito de la “economía verde”.

¹ **Elder Andrade Paula** es Posdoctor en Sociología del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, profesor e investigador de la Universidad Federal de Acre (Amazonia, Brasil). Coordenação Núcleo de Pesquisa: Estado Sociedade e Desenvolvimento na Amazônia Ocidental y actúa en las luchas de resistencia por tierra/ territorio en la Amazonia desde los “tiempos de Chico Mendes”, más precisamente desde 1984. El presente artículo es el resultado de una investigación encomendada por el Movimiento Mundial por los Bosques (WRM).

Al examinar los datos que demuestran la continuidad de la destrucción de los bosques, queremos darle énfasis a la investigación y al análisis de las “soluciones” de lo que está funcionando según los cánones del “desarrollo sustentable”, como es el caso del “Manejo Forestal Sustentable-MFS²”. De esta forma, tomamos como referencia el caso del estado de Acre, ubicado en la Amazonia brasileña, que es presentado al mundo como “modelo de economía verde”³.

1. El estado de los bosques tropicales en Latinoamérica y el Caribe: causas directas e indirectas de la deforestación. En los últimos cuarenta años se han intensificado las denuncias contra el avance de la destrucción de los bosques tropicales en el mundo. Las imágenes eventualmente divulgadas de vastas áreas devastadas causan conmociones temporales, pero la marcha destructiva continúa. Las causas directas más aparentes —explotación maderera, expansión del agrobusiness y la conversión de bosques primarios en nuevas áreas de producción, los grandes proyectos de infraestructura como carreteras, hidroeléctricas, minería, extracción de petróleo, urbanización, además de los incendios forestales derivados en su mayor parte de las causas citadas— son bastante conocidas e inclusive banalizadas. Por ello, intentaremos situar el problema de la destrucción visible en su dimensión más general.

Nos dedicaremos más exhaustivamente al análisis de los procesos de destrucción de los bosques tropicales que se ocultan bajo los velos de la “economía verde”. La combinación de la explotación maderera a través del “MFS” y la profundización de la mercantilización y la financierización de la naturaleza a través de los “Pagos por Servicios Ambientales-PSA”⁴, está corroyendo de modo acelerado, y como si fuera una nueva especie de “termitas verdes”, a los bosques.

En 2011, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación-FAO, presentó el informe “Situación de los bosques del mundo-2011”, que muestra que en las dos últimas décadas, tanto Latinoamérica y el Caribe como África fueron los que sufrieron mayor reducción de sus bosques, totalizando una cifra de 162 millones 100 mil hectáreas. En porcentajes, África perdió alrededor de 10% de su cubierta forestal y Latinoamérica y Caribe, el 9%.

Por otro lado, Europa tuvo un incremento del 1.57% y América del Norte permaneció con su cubierta forestal prácticamente estable. En las otras macroregiones hubo poca oscilación, según ilustra el Cuadro 1. Como balance final, entre 1990 y 2010, el mundo perdió 135 millones 500 mil hectáreas de bosques. Debe advertirse, sin embargo, que en el citado cuadro, la totalidad de las áreas cubiertas por bosques actualmente, incluyen a los monocultivos de árboles, como los de eucalipto, acacia, caucho y pino destinados a la producción de madera, celulosa, caucho y aceites. Según la FAO (2011;19), los “bosques plantados” ocupan aproximadamente 7% del área total de bosques del mundo y las zonas de monocultivo continúan expandiéndose y causando deforestación⁵.

Los datos de la explotación de madera fueron congruentes con esa oscilación en la cubierta forestal en las macroregiones. Entre 1990 y 2010, África tuvo un incremento del 87.4% y Latinoamérica y el Caribe, del 40%, mientras que Europa, América del Norte, Asia y el Pacífico, tuvieron respectivamente una reducción del 25%, 40% y 10% en el volumen total de madera extraída (FAO, 2011: 7.12, 17.21, 28). La reducción del volumen de madera extraída en Europa se atribuye en este informe de la FAO a los efectos de la recesión iniciada en 2008.

Sin embargo, la devastación de los bosques en Latinoamérica y el Caribe, y en África, está directamente enlazada a un consumo de madera tropical de alto valor en los países del Norte y en algunos centros urbanos de los países del Sur por parte de sus élites más adineradas. Además, el incremento de la demanda por otros productos de consumo masivo, como la carne, también implica un aumento de la deforestación.

² Mientras la FAO, define al MFS como el “manejo y conservación de la base de los recursos naturales y la orientación tecnológica, que proporcionen la realización y la satisfacción continua de las necesidades humanas para la actual y para las futuras generaciones (<http://www.fao.org/docrep/006/ad399s/AD399s08.htm>), la OIMT lo caracteriza como el “proceso de gestión permanente de áreas forestales para alcanzar uno o más objetivos claramente especificados de manejo, buscando la producción de un flujo continuo de productos y de servicios forestales deseables, sin la indebida reducción de sus valores intrínsecos y futura productividad, sin efectos indeseables sobre los medios físico y social (International Timber Organization-ITTO. *Guidelines for the sustainable management of natural tropical forests*. Yokohama: ITTO, 1990. ITTO Technical Series, v.5).

³ Así lo definió Mauro Armelin (Coordinador del Programa Amazonia-wwf/Brasil) en entrevista concedida a la emisora de radio del gobierno de Acre “Aldeia FM 96,9” el día 31/03/2012 a las 20:30h. De acuerdo con Mauro Armelin, el wwf presentará en la “Río+20” a Acre como ejemplo de economía verde a ser seguido en el mundo.

⁴ WRM, boletín núm. 175, febrero de 2012 <http://www.wrm.org.uy>

⁵ El monocultivo de palma africana para fines industriales, no incluido en la categoría de “bosques plantados” pero con las mismas características, está en plena expansión y es una de las principales causas de deforestación en Indonesia y Malasia.

Cuadro1: Situación actual de los bosques en el mundo

Subregión	Área (mil ha)			Cambio anual (mil ha)		Tasa de cambio anual (%)	
	1990	2000	2010	1990-2000	2000-2010	1990-2000	2000-2010
Total de América del Norte		676 760	677 080	678 958	32	188	n.s.
Total de América Latina y el Caribe		978 072	932 735	890 782	-4 534	-4 195	-0,47
Total de Europa		989 471	998 239	1 005 001	877	676	0,09
Total del Cercano Oriente		49 123	46 323	46 348	-280	3	-0,59
Total de Asia y el Pacífico		733 364	726 339	740 383	-703	1 404	-0,10
Total de África		749 238	708 564	674 419	-4 067	-3 414	-0,56
Mundo		4 168 399	4 085 063	4 032 905	-8 334	-5 216	-0,20

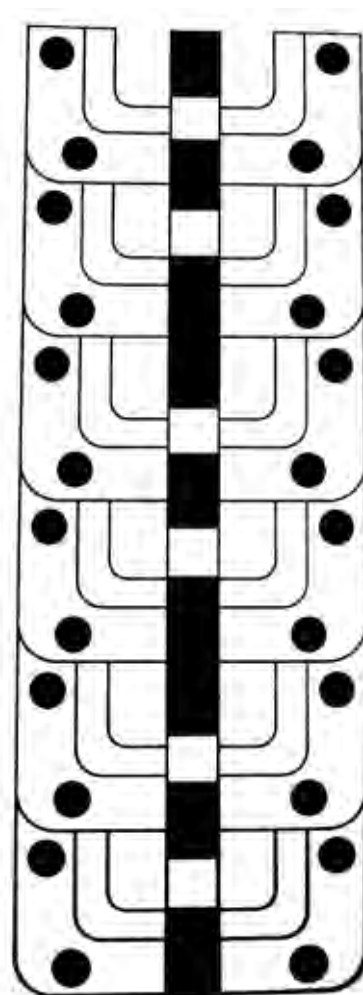
Fuente: FAO, 2011 (datos compilados por nosotros a partir del conjunto de tablas presentadas en el referido Informe).

En cuanto a la relevancia de Latinoamérica y el Caribe en el mundo, el informe de la FAO destaca el hecho de que la región alberga 57% de los bosques primarios existentes en el planeta y que éstos representan el 75% de la cubierta forestal existente en esa macro-región. A pesar de ello, continúa el citado informe, “se produjo una importante pérdida de bosque primario fuera de las áreas protegidas⁶, sobretudo en América del Sur” (FAO, 2011, 19). Las principales causas señaladas fueron las talas realizadas para la conversión de áreas de bosques en agricultura y el incremento de la urbanización.

Para completar este panorama más general, nos valdremos de un mapa presentado por Blaser, J. *et al*, “Estado de la ordenación de los bosques tropicales 2011” de la OIMT⁷, que sitúa a los países productores y consumidores de maderas tropicales en el mundo (para los datos cuantitativos, ver también el Cuadro 2).

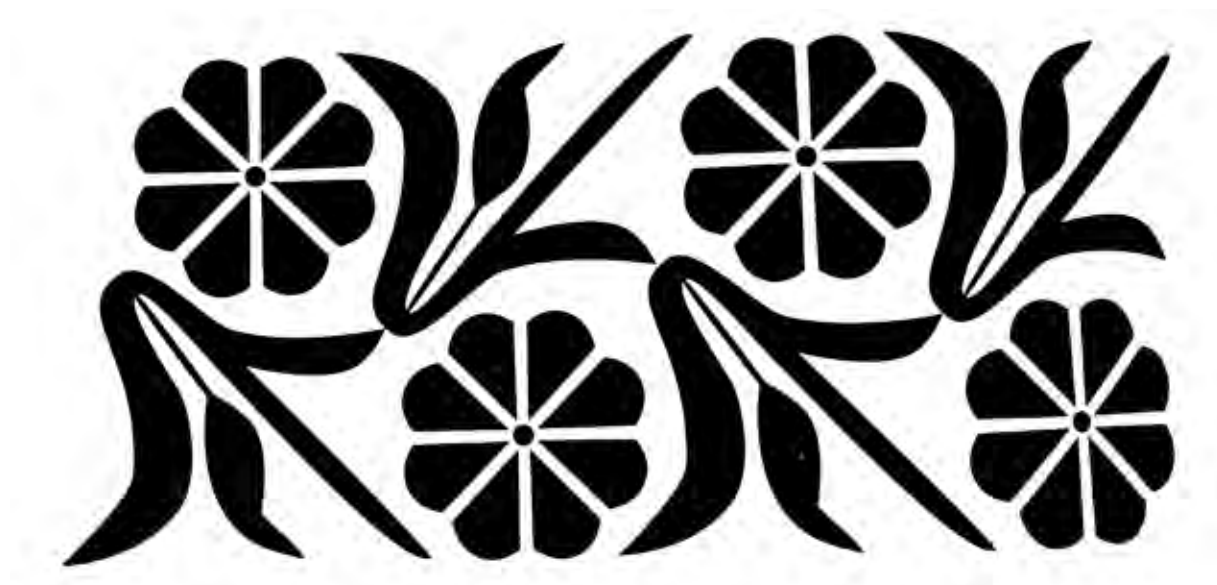
**Figura 1: Países con bosques tropicales y miembros de la OIMT**

Fuente: Blaser, J et al (2011;19)



⁶ Las “áreas protegidas” son las parcelas territoriales de dominio público o privado destinadas a “conservación ambiental”. Pueden ser de uso directo o indirecto. En el primer caso se permiten diversas formas de explotación, como la extracción de maderas a través de “Planes de Manejo Forestal Sustentable”. En el caso de la Amazonia brasileña, cerca del 80% de su territorio se encuadra en esas distintas modalidades de “áreas protegidas”.

⁷ La OIMT, en inglés ITTO (International Tropical Timber Organization) se auto-define como “un organismo intergubernamental que promueve la conservación y la ordenación, utilización y comercio sostenible de los recursos de los bosques tropicales. Sus 60 miembros poseen alrededor del 85 por ciento de los bosques tropicales del mundo y representan más del 90 por ciento del comercio mundial de maderas tropicales”. (Blaser, J., Sarre, A., Poore, D. & Johnson, S. (2011; 3)



Cuadro 2: Superficie mundial de bosques tropicales por región

Región (número de países)	Superficie forestal total (millones de ha)	% de bosques en países productores de la OIMT	Bosque primario (millones de ha)	% de bosques primarios en países productores de la OIMT
África Tropical (26)	440	61	102	98
Miembros OIMT (10)	270		100	
Otros países (16)	170		2	
Asia Tropical y el Pacífico (16)	317	89	108	97
Miembros OIMT (10)	282		104	
Otros países (6)	35		3	
Latinoamérica Tropical y el Caribe (23)	907	96	678	96
Miembros OIMT (13)	868		647	
Otros países (10)	38		30	
TOTAL MUNDIAL (65)	1 664	85	887	96
Total productores OIMT (33)	1 421		851	
Total países no miembros (32)	3		35	

Fuente: OIMT, Actualidad Forestal Vol.18 N.3 /2011 (p. 03). Observación: la regionalización adoptada por la OIMT difiere de la utilizada por la FAO. En el caso de Latinoamérica y el Caribe, la OIMT incluye a México y la FAO lo excluye, localizándolo como integrante de América del Norte. Por esta razón, los datos de los cuantitativos de bosques tropicales existentes en Latinoamérica y el Caribe difieren en los dos cuadros aquí presentados.

Además de la ubicación de países productores y países consumidores de maderas tropicales, buscada por los autores de este documento de la OIMT, nos interesa llamar la atención sobre aspectos de orden geopolítico. Es decir, queda claro el hecho de que las zonas productoras están fuera no sólo de los principales centros de consumo de la madera, pero en estos países consumidores se concentran también los centros de poder financiero, político y militar a nivel mundial, que buscan mantener y aumentar el control sobre los “recursos naturales” en el planeta para asegurar su modo de producción y su consumo excesivo que beneficia sólo a una minoría de la humanidad.

En otras palabras, queremos decir que las oscilaciones en el volumen de producción maderera por macro-regiones no están condicionadas sólo por las crisis económicas como sugiere el informe de la FAO (2011). Están también y, sobre todo, condicionadas por razones de orden estratégico ligadas a la geopolítica de control de los bienes naturales existentes en el planeta. En los bosques existen enormes reservas de minerales, agua, petróleo y otros productos considerados de

alto valor. Este control sobre los “recursos naturales” en el mundo, aún ejercido por el poder imperial liderado por Estados Unidos, viene siendo cada vez más disputado, principalmente al emerger el llamado BRIC (Brasil, Rusia, India y China) como gran potencia planetaria.

Al situar la destrucción de los bosques tropicales en esta perspectiva macro, no pretendemos eximir a los agentes locales que llevan a cabo la producción destructiva. Son ellos, de nacionalidad brasileña o extranjera, los que gobiernan el agronegocio de la producción de proteínas, agroenergía, maderas y celulosa, sector petrolero, minería y metalurgia, energía, construcción civil y los mercados financieros.

Los conglomerados privados cuentan con el Estado como apoyo fundamental —que les garantiza infraestructura, financiación subsidiada, exoneraciones fiscales, control y represión de la fuerza de trabajo— en la realización de sus emprendimientos. Ese “bloque de poder” formado por agentes privados y Estado, amplió y aceleró en los últimos años su actuación en América del Sur y África. La implementación de grandes proyectos a través de la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana-IIRSA⁸, consubstancia de forma más nítida la ampliación potencial de la escala de la producción destructiva en los bosques tropicales y su fuerte integración con la dinámica de acumulación capitalista mundial, como mero proveedor de materia prima. Casos recientes que involucran a empresas de construcción civil con sede en Brasil y al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social-BNDES, en conflictos con pueblos indígenas en Bolivia y Perú, así como al conglomerado minero Vale, en Colombia, ilustran claramente la “exportación de la producción destructiva” por parte de las corporaciones con sede en el territorio brasileño.

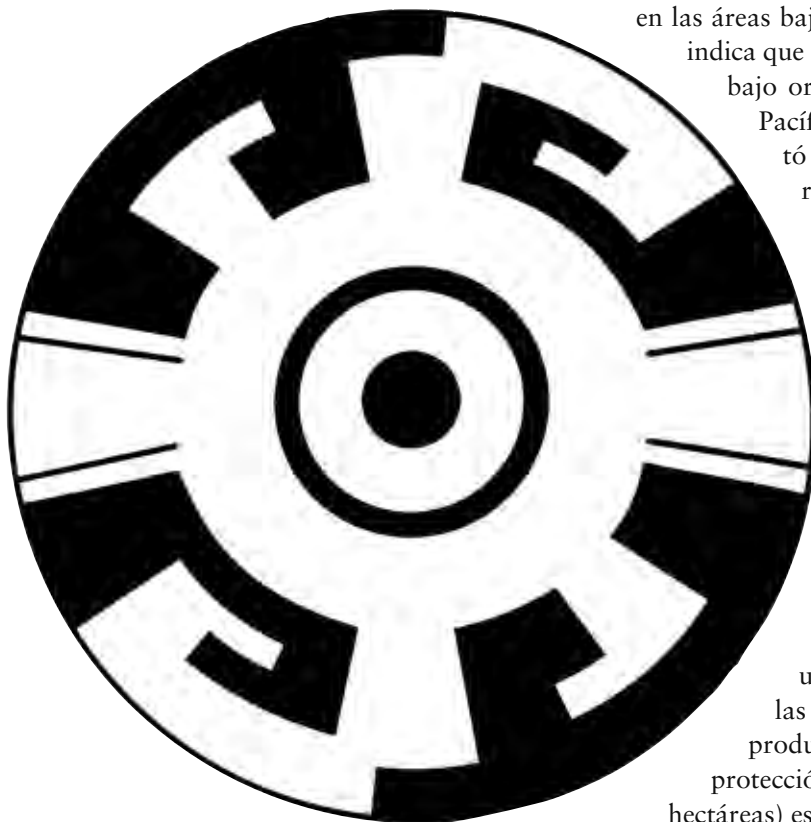
Para “mitigar” los efectos de esa marcha destructiva subyacente al proceso de acumulación incesante del capital, las recomendaciones de la ONU y su Programa para el medio ambiente-PNUMA, en consonancia con la FAO y OIMT, señalan a la “economía verde” como la salvación⁹, en el informe *Rumbo a una Economía Verde*, publicado en 2011. Veremos en la sección siguiente, el núcleo de sus propuestas y cómo se traducen en términos prácticos en la denominada “Ordenación Forestal Sustentable”.

2. La destrucción oculta, justificada por la “economía verde”: los Planes de Manejo Forestal Sustentable-

⁸ Para obtener más información al respecto de la IIRSA, ver Ceceña, Ana Esther (et al). *Territorialidad de la dominación: Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA)* www.geopolitica.ws

⁹ WRM, Boletín No. 175, febrero de 2012. <http://www.wrm.org.uy>





PMFS. En junio de 2011, la OIMT divulgó un resumen de 4 páginas que sintetiza las 420 páginas del “Estado de la ordenación de los bosques tropicales 2011” Serie Técnica núm. 38. Bajo el sugerente titular “Un estudio sobre los asediados bosques tropicales del mundo revela un aumento del 50%

en las áreas bajo ordenación sustentable desde 2005”, indica que “la superficie de bosque tropical natural bajo ordenación sostenible de África, Asia, el Pacífico, Latinoamérica y el Caribe” aumentó de 36 millones a 53 millones de hectáreas, mientras que la superficie de bosques destinados a la producción maderera sujeta a por lo menos algún tipo de plan de manejo¹⁰ —considerado como “paso crucial” en la búsqueda de la sustentabilidad— “aumentó aproximadamente un tercio para ascender a un total de 131 millones de hectáreas” (<http://www.itto.int/>, acceso en febrero de 2012).

Dado que la superficie estimada de “bosques tropicales naturales” permanentes (denominados Zonas Forestales Permanentes-ZFP¹¹) es de unos 761 millones de hectáreas —de las cuales 403 millones son de bosques de producción y 358 millones son de bosques de protección— un 24% del total (183 millones de hectáreas) estarían siendo explotadas bajo planes de manejo. Entre 2005 y 2010, afirman Sarre, A *et al* (2011,

4) “la superficie de bosques tropicales bajo planes de manejo en los países productores miembros de la OIMT registró un aumento de 69 millones de hectáreas para ascender a 183 millones de hectáreas”. O sea, la suma de las áreas explotadas bajo PMFS registradas dentro y fuera de los territorios reglamentados en la forma de Ordenación Forestal Sustentable.

El mismo resumen citado en el párrafo anterior fue secundado por la contundente advertencia: “Pero los nuevos datos obtenidos en los 33 países que poseen la mayor parte de estos bosques sugieren que las fuerzas en pro de su conservación podrían perder la batalla frente a aquéllas que fomentan su destrucción”. Sin embargo, el total de áreas de bosques tropicales naturales explotados bajo el plan de manejo forestal maderero en 2010 tuvo un ascenso vertiginoso y ya superan los 135 millones 500 mil hectáreas de bosques devastados en el mundo para el periodo 1990-2010. Si se mantiene esta tendencia y la estabilización de la devastación en los mismos niveles de 1990-2010, en 20 años más el total de los 625 millones de hectáreas de “bosques tropicales naturales” restantes (se considera la substracción de 136 millones de hectáreas que serían devastados en los próximos 20 años) se incorporarán a la explotación a través del PMFS.

Sin embargo, para que la explotación y la extracción de los bienes naturales en los bosques tropicales puedan continuar, es esencial la idea de la “economía verde”. O sea, para que la destrucción de ciertas áreas de bosques sea compensada por la “protección” de otras áreas manejadas de forma “sustentable”, se instituye la comercialización de “servicios ambientales”. En ese sentido, la “economía verde” no sólo complementa la idea del “manejo forestal sustentable”: también profundiza el proceso de mercantilización de los bosques y aumenta las posibilidades de que los agentes de destrucción obtengan mayores

¹⁰ Los PMFS no están condicionados al OFS, pueden ser implementados en áreas regidas por otras formas de reglamentación.

¹¹ Zona Forestal Permanente es así definida por la OIMT (2011, 20), “Territorio de propiedad pública o privada asegurado por ley y mantenido bajo una cubierta forestal permanente. Incluye las tierras para la producción de madera y otros productos forestales, para la protección de suelos y recursos hídricos y para la conservación de la diversidad biológica, como también las áreas destinadas a cumplir una combinación de estas funciones.

ganancias, una nueva oportunidad para superar la crisis económico-financiera de 2008.

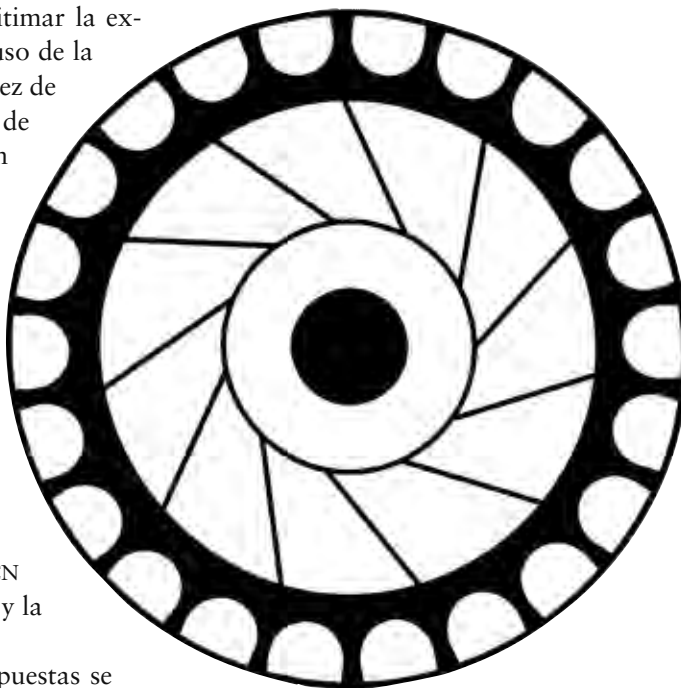
Al encuadrar el problema en esta perspectiva, tenemos la sensación de que la “advertencia” destacada en el resumen de la OIMT —contraponerle las fuerzas en favor de la “conservación” a las que fomentan la “destrucción”— parece un desatino. En realidad no lo es. Tiene un propósito bien definido: convencer a todos y a todas de que podemos continuar destruyendo, pero que la destrucción puede ser “compensada” con los PMFS y sus “servicios ambientales”; ellos serán la garantía de “protección”. A partir de este enfoque maniqueísta se logró una enorme eficacia en la simplificación del problema de la construcción de un sentido común al respecto de las supuestas “virtudes” conservacionistas de los PMFS. La batalla inicial se dio en torno a la legitimación de los PMFS, y en los últimos años se ha intentado imponer la mercantilización total a través de la adopción de los Pagos por Servicios Ambientales-PSA y su comercio, especialmente la “captura de carbono” mediante el mecanismo REDD.

Es en este contexto que debemos situar el nuevo ciclo de explotación de los bosques en particular y de los bienes naturales en general. Como apuntó Schwarz (2008), a partir de ese momento, los bosques dejan de ser planificados como mera extensión pautada de las actividades agropecuarias —esencialmente en la producción de materias primas—, y pasan a ser interpretados como “ecosistemas que precisan protección”, que necesitan ser valorados, atribuyéndoles incluso un precio a los “servicios ambientales” que prestan.

De esta forma, quedan en evidencia 4 aspectos que consideramos esenciales: la lógica productivista que preside a la producción destructiva, lejos de ceder lugar a las críticas ambientalistas y a las preocupaciones con la “complejidad ecosistémica”, se apropió de forma utilitarista de las mismas con el objetivo de profundizar la mercantilización de los bienes naturales; la asimetría de poder entre los países poseedores de bosques y los que detentan el poder mundial se materializó en las políticas destinadas a instituir un marco regulatorio estandarizado, principalmente en lo que se refiere a la explotación maderera a través de los PMFS y PSA; para legitimar la expansión de los PMFS y PSA, se intensificó el uso de la “autoridad científica” para certificar la validez de tales instrumentos como prácticas eficaces de “conservación de los bosques”; se atribuyen simultáneamente al Estado y al “mercado” roles centrales, correspondiendo al primero la institucionalización de un nuevo marco jurídico regulatorio adaptado a la mercantilización total de los bosques y al segundo, la “orientación” de las actividades económicas. Todo ello se concretó con el amplio respaldo de representantes de la sociedad civil internacional y nacional, especialmente las grandes ONG conservacionistas, entre las que se destacan el WWF (Fondo Mundial por la Naturaleza), la UICN (Unión Internacional para la Conservación) y la TNC (The Nature Conservancy).

Para materializar dicho conjunto de propuestas se dieron tres pasos fundamentales: diseminación de los Planes de Manejo Forestal Sustentable-PMFS como “antídoto” contra la devastación; adopción de la “certificación forestal”¹² como medio de “aliviar” la conciencia de los consumidores y al mismo tiempo crear un “mercado de élite

¹² La iniciativa de “certificar”, o sea, de rotular las maderas oriundas de PMFS, partió de grandes ONG conservacionistas internacionales, especialmente del WWF. Como apunta Niro Higushi (*Revista Ciência Hoje* vol 37 n° 218, pg 63- 65). El sello del Forest Stewardship Council (FSC) fue instituido en 1993.



Mapa 01: Localización del estado de Acre

Fuente: Gobierno de Acre (2011; 6)



20

entre las élites” que consumen productos de madera de alto valor, las llamadas “maderas nobles”; incentivo a la creación de unidades de conservación para “uso sustentable” de los “recursos naturales”.

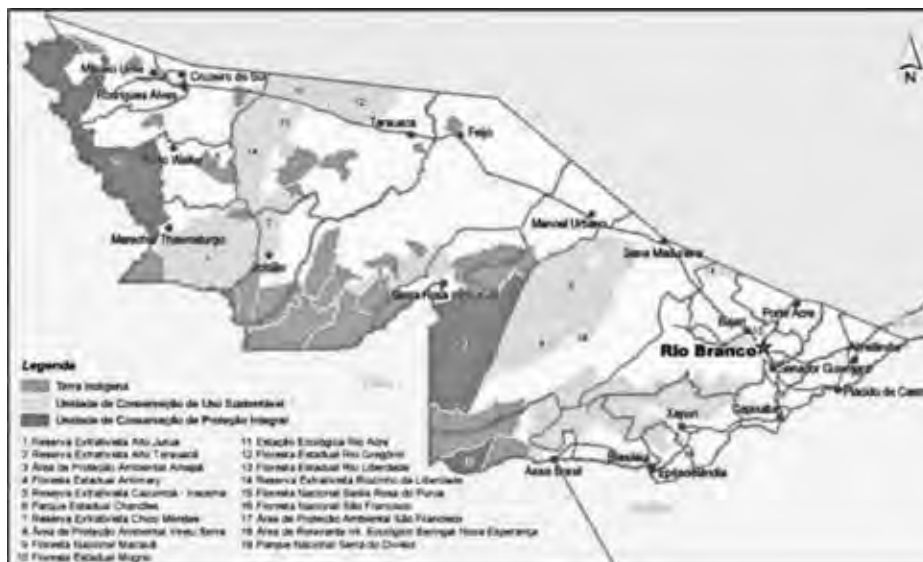
En el caso de Latinoamérica y el Caribe, la iniciativa de mayor envergadura fue la que se realizó en la Amazonia brasileña bajo la batuta del Banco Mundial a través del “Programa Piloto para la Protección de los Bosques Tropicales-PPG7”. Iniciado inmediatamente después de “Río 92” y finalizado en 2009, dicho programa obtuvo éxitos notables. Se considera que el estado de Acre es la unidad federativa brasileña que más “progresó” en la adopción de ese modelo de “desarrollo sustentable”.

La arquitectura de ese reordenamiento territorial se caracteriza básicamente por la instauración de un marco jurídico que instituye la creación de “unidades de conservación”, cuyo dominio formal puede ser de carácter comunal, comunitario y/o gubernamental, pero subordinadas a reglamentaciones de uso para asegurar la mercantilización de la naturaleza en pro de los capitales privados. Se otorgan “concesiones forestales” en las unidades de conservación de dominio gubernamental o PMFS en las áreas de dominio comunitario y comunal. Leyes específicas, como las que se promulgaron en Bolivia (1996), Perú (2000), Brasil (2006) y en otros países latinoamericanos, garantizan la apropiación privada de los bienes naturales. Ello explica por qué un 60% de la producción de los países miembros de la OIMT en Latinoamérica y el Caribe proviene de los bosques de dominio público y comunal. De esta forma revela nítidamente cómo la “economía verde” se ha apropiado de los bienes naturales también en los territorios conquistados por las luchas de resistencia de movimientos campesinos e indígenas en las dos últimas décadas. En ese sentido también, el análisis del caso del estado de Acre —que tiene 45% de su territorio destinado a unidades de conservación, principalmente

como consecuencia de las conquistas de las luchas campesinas e indígenas— nos ofrece un buen parámetro para analizar esa apropiación de lo público por lo privado cuando se trata de bosques tropicales.

Mapa 02: Configuración territorial de Acre

Fuente: Base de datos geográficos del ZEE/AC, Fase II, 2006



3. Acre como “laboratorio a cielo abierto”: la “economía verde” tal como es. El estado de Acre (Mapas 1 y 2) está localizado en la Amazonia brasileña y posee una extensión territorial de 16 millones 500 mil hectáreas, con un 88% de su territorio cubierto por bosques nativos, de los cuales cerca de 50% se encuentran en áreas naturales protegidas. Con una población de 732 mil 793 habitantes, de los cuales 72.61% residen en áreas urbanas, el estado de Acre es considerado uno de

los más empobrecidos de Brasil: 66.2% de los hogares ganan hasta un salario mínimo mensual y 2.9% se sitúan en una franja superior a 5 salarios mínimos (IBGE, Censo Demográfico de 2010). Según Celentano & Santos & Veríssimo



Foto: Jerónimo Palomares

En las luchas de resistencia contra la destrucción de sus medios de vida y los territorios forestales, el movimiento campesino liderado por Chico Mendes se hizo famoso por mostrar que la conservación de los bosques no podía disociarse de los pueblos que habitaban en ellos.

21

(2010, 24), “Acre presentó la mayor desigualdad de la región Norte (Índice de Gini= 0.61) y la segunda mayor de Brasil, atrás apenas del Distrito Federal”.

Las actividades productivas predominantes son la ganadería extensiva de corte y la explotación maderera. La primera década del siglo XXI fue marcada por la expansión de esas actividades y por una colosal reconcentración de propiedad de tierras de dominio privado. De acuerdo con Teixeira (2011), en 2010, 583 grandes propiedades con más de mil hectáreas correspondían a 6 millones 200 mil hectáreas, mientras que 23 mil 500 pequeñas propiedades, de 50 a 100 hectáreas, sumaban solamente 1 millón 400 mil hectáreas. En apenas siete años, la gran propiedad tuvo un incremento de más de 100% en su área total (ver Cuadro 3).

Cuadro 3: Inmuebles rurales registrados en el INCRA (Acre 2003 y 2010)

Categoría	2003				2010			
	Núm. Inmuebles	Área/ hectáreas	Núm. Inmuebles/ Núm. Total	Área/Área total	Núm. Inmuebles	Área - hectáreas	Núm. Inmuebles/ Núm. Total	Área/ Área total
grande productiva	63	322 666	14.2%	11.6%	72	523 285	12.3%	8.5%
grande propiedad	444	2 787 039	2.2%	67.1%	583	6 183 055	2.4%	78.9%
mediana propiedad	321	243 583	1.6%	5.9%	429	317 937	1.8%	4.1%
Minifundio	16 197	785 126	81.1%	18.9%	20 267	970 399	82.8%	12.4%
pequeña propiedad	3 013	339 073	15.1%	8.2%	3 194	368 920	13.1%	4.7%
Total			19 975	4 155 180		24 473		7 840 810
Fuente: Teixeira (2011; 9)								

El estado de Acre se hizo mundialmente conocido en 1988, después del asesinato de Chico Mendes, el entonces presidente del Sindicato de los Trabajadores Rurales de Xapuri. En las luchas de resistencia contra la destrucción de sus medios de vida y los territorios forestales, el movimiento campesino liderado por Chico Mendes se hizo famoso por mostrar que la conservación de los bosques no podía disociarse de los pueblos que habitaban en ellos¹³. La propuesta de las Re-

¹³ Respecto a este tema, ver Paula & Silva, 2008.

Las empresas que controlan esos territorios forestales podrán obtener ganancias fabulosas, tanto las madereras como el sector financiero vinculado al “mercado de carbono” y obviamente, la industria que permanece contaminando gracias a la “compra del derecho a contaminar”. Pierden los pueblos y las poblaciones que viven en los bosques empobrecidos.

servas Extractivistas-RESEX tradujo de forma más acabada esa interacción entre sociedad y naturaleza.

Por ser la “tierra de Chico Mendes”, Acre despertó el interés del ambientalismo internacional desde entonces y el estado ha sido divulgado mundialmente como el que más avanzó en la Amazonia en cuanto a la implementación de un “modelo de desarrollo sustentable”, que ahora es denominado por la ONU como “economía verde”. La financiación que el gobierno estatal recibe hace más de una década del Banco Mundial, el BID y el BNDES, como también de las grandes ONG conservacionistas internacionales, como el WWF, está dirigida a fomentar ese “modelo”. El poder ejecutivo estatal está gobernado desde 1999 por una amplia coalición de fuerzas, que involucra desde partidos considerados de izquierda hasta los de extrema derecha, y es liderada por el Partido de los Trabajadores. En tal periodo, se adoptaron diversas iniciativas para adaptar la legislación estatal¹⁴ a los cánones de la “economía verde”.

Una síntesis que explica claramente la materialización de esas acciones del gobierno de Acre, en el sentido de promover adaptaciones a la “economía verde” fue elaborada por Verocai & Ludewigs & Pereira:

Los principales programas de acción ejecutados por el Gobierno de Acre [...] se desarrollan en el ámbito de la Política de Desarrollo Sustentable y de la Política de Valorización del Activo Ambiental Forestal, que se fundamentan en la concepción del bosque como un proveedor de productos y servicios y en los principios de manejo racional [...] en conjunto con asociaciones civiles de cuño ambientalista, agencias internacionales de cooperación técnica, entidades de investigación y universidades, además de empresas privadas [...] el Programa de Valorización del Activo Ambiental Forestal (PVAAF), ejecutado con recursos propios del Tesoro Estadual y apoyado por el BID (primera etapa del PDSA) y por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que contempla la regularización del pasivo ambiental forestal y la certificación de unidades productivas sustentables, [...] pago por servicios ambientales y aumento del valor de la cubierta forestal con la legalización de la propiedad, incentivándose prácticas de manejo de uso múltiple, (Verocai & Ludewigs & Pereira, 2012; 21; 23).

La síntesis muestra cómo se materializan en el estado de Acre las propuestas de la “economía verde”. Se destaca especialmente en el caso de Acre el hecho de haber realizado un Zoneamiento Ecológico Económico, con el objetivo de la “ordenación sustentable” del uso del territorio, la implementación exitosa de los PMFS, en sus diversas modalidades: empresarial, comunitaria e individual. Los autores arriba citados enfatizan el hecho de que, en 2010, se extrajeron 756 mil m³ de madera en rollo, en su mayoría por empresas y grandes propietarios rurales. Eso equivale a un aumento del 150% en relación a la cantidad de madera en rolos extraída anualmente (304 mil m³) en todo el estado de Acre en la década anterior (Paula, 2005, 85). Otro dato importante es que en ese periodo hubo reducción de la explotación maderera en toda la Amazonia brasileña. No menos relevante es el registro de la expansión de los PMFS en las unidades de conservación (como las Reservas Extractivistas, Proyectos de Asentamientos Agroextractivistas y Bosques Públicos estaduais), mostrando el avance de la apropiación de los bienes naturales de carácter público con el objetivo de la explotación privada.

En ese sentido, cabe mencionar la Ley Estatal 2.308/ 2010 que creó el Sistema Estadual de Incentivos a Servicios Ambientales–SISA. Tal ley es considerada una de las más “avanzadas” del mundo, en cuanto a implementar las bases legales de la “economía verde”. Según la Agencia de Noticias de Acre, la ley del “SISA” permite “que Acre participe del mercado internacional de carbono y de otros servicios ambientales, como el de la biodiversidad y el del agua” y el artículo fi-

¹⁴ Informaciones más detalladas sobre las medidas normativas pueden verse en Neves, Rodrigo (Org) (2010) *Coletânea de normas ambientais do estado do Acre* <http://www.pge.ac.gov.br/site/arquivos/cartilhas/2010/coletaneanormasambientais2010.pdf>

naliza afirmando que “las políticas de reducción de deforestación son la gran propaganda del carbono acreano. Y sitúan otra vez a este estado amazónico en posición destacada en el mundo”.¹⁵

En suma, los parámetros fundamentales de la “economía verde” están implantados en tierras acreanas. La importancia y el “valor” de Acre fue debidamente reconocido por el director asistente de la OIMT, Eduardo Mansour, durante la realización en Rio Branco, la capital del estado, en 2011, del “Segundo Encuentro Internacional de Especialistas en Manejo Forestal Sustentable”, que en esa ocasión festejó también el “Año Internacional de los Bosques” y el 25º aniversario de la OIMT. De acuerdo con Mansour:

Acre fue elegido para ser sede del evento, porque aquí el trabajo que se realiza es, de hecho, una referencia para todos nosotros. Acre logró imprimir un modelo de desarrollo sustentable que es un ejemplo para todos porque siguió modelos sensatos de respeto por el bosque, por las poblaciones tradicionales”¹⁶.

Inmediatamente después de esta declaración se informa que los participantes del evento harán una visita al Bosque Estatal de Antimary, “un verdadero laboratorio a cielo abierto donde la Fundación de Tecnología del Estado de Acre (FUNTAC) desarrolla diversas experiencias”. En Antimary, prosigue el artículo, “viven 50 familias que reciben el subsidio Bolsa Floresta por valor de R\$ 880.90 [US\$ 450], una ayuda para la conservación del bosque a través del manejo sustentable, según el secretario de bosques, João Paulo Mastrângelo”.

En nuestra opinión, el examen cuidadoso del “laboratorio a cielo abierto de la economía verde” que es el estado de Acre puede contribuir bastante a revelar la destrucción oculta a la que estamos refiriéndonos. De una forma más general, se hacen más comprensibles los nexos entre MFS/PSA y por qué la OIMT, FAO y demás defensores de esa política insisten tanto en su adopción conjugada. Al empobrecer el bosque (en el sentido que le atribuimos a este término, o sea, territorios marcados por relaciones indisociables entre la vida material y simbólica, construidas socialmente por los pueblos que tienen al bosque como su lugar para vivir en el mundo) con la extracción de madera, se busca, a través del PSA, amenizar las adversidades sociales —a través del pago de bonos como el mencionado en el caso de Antimary— producidas y/o agravadas, mientras que las empresas que controlan esos territorios forestales podrán obtener ganancias fabulosas, tanto las madereras como el sector financiero vinculado al “mercado de carbono” y obviamente, la industria que permanece contaminando gracias a la “compra del derecho a contaminar”. Pierden los pueblos y las poblaciones que viven en los bosques empobrecidos.

La destrucción resultante de la expansión del MFS en Acre puede ser explicada por la conjugación de factores técnicos y políticos. Los primeros se relacionan con la falta de comprobación científica sobre la regeneración forestal¹⁷ en unidades explotadas bajo los PMFS, el comportamiento de los diferentes ecosistemas



¹⁵ http://www.agencia.ac.gov.br/index.php?Itemid=26&id=14065&option=com_content&task=view, acceso en febrero de 2012

¹⁶ <http://www.portalamazonia.com.br/secao/noticias/acre/2011/08/23/acre-sedia-2%C2%BA-encontro-internacional-de-especialistas-em-manejo-florestal-sustentavel/>, acceso en febrero de 2012

¹⁷ Como muestra el investigador Paulo Kageyama (2000).

Esta complicidad entre grupos de capitales privados y el Estado sólo se hace visible cuando emergen conflictos sociales que escapan al control político estatal, como los que ocurrieron en 2011 en las plantaciones de caucho São Bernardo y en el Bosque Estadual de Antimary. En ambos, las poblaciones locales denunciaron la destrucción de los bosques y las presiones que sufrieron para dejar las áreas donde vivían.

frente al aparato de explotación, que involucra la apertura de caminos y carreteras vecinales para la circulación de máquinas y camiones pesados, los desvíos de corrientes de agua, la contaminación de los suelos y ríos con aceite quemado y otros residuos tóxicos, los ruidos de las máquinas y el ahuyentamiento de aves y animales silvestres, etcétera. Los segundos están relacionados con la ausencia de fiscalización de los PMFS por parte de los órganos gubernamentales, sea en virtud de su deliberada devalorización resultante de políticas neoliberales, sea por la persistencia de la “asociación público-privado” que caracteriza la formación del Estado nacional en Brasil. Esta complicidad entre grupos de capitales privados y el Estado sólo se hace visible cuando emergen conflictos sociales que escapan al control político estatal, como los que ocurrieron en 2011 en las plantaciones de caucho São Bernardo y en el Bosque Estadual de Antimary. En ambos, las poblaciones locales denunciaron la destrucción de los bosques y las presiones que sufrieron para dejar las áreas donde vivían. Debido a las repercusiones en los medios de comunicación, el Ministerio Público Estatal (MPE) fue obligada a actuar, recomendando la suspensión de la licencia para uno de los PMFS concedidos a Laminados Triunfo.¹⁸

Hechos de esa naturaleza ocurren en todo el estado de Acre y ya habían sido denunciados por líderes sindicales no cooptados por el bloque de poder, especialmente la presidente del STR de Xapuri, Dercy Teles, y el líder de la oposición sindical del STR de Brasília, Osmarino Amâncio Rodrigues¹⁹.

En cuanto a las políticas de PSA, sus efectos perversos comienzan a ser sentidos en los territorios forestales, como bien ilustra la declaración de Dercy Teles:

Las políticas de PSA sólo amordazan la vida de esas personas, que no tienen ni oportunidades ni voz. Están sin voz porque firman un contrato que es, por lo menos, de treinta años. Y dejan a disposición el área donde viven durante treinta años para que el gobierno y las multinacionales investiguen y hagan usufructo de todo el conocimiento del área por una miseria, que es insignificante. Y lo que es aún más grave es que no pueden hacer nada en esa área, no pueden pescar más, no pueden sacar madera para uso propio, no pueden cazar más, no pueden hacer más nada. Yo estuve siguiendo de cerca el desarrollo de esas políticas, incluso en Pará, y hubo casos en que un habitante fue detenido por cortar un árbol para hacer una canoa para pescar. Entonces, en mi opinión, esas políticas no son otra cosa que el confinamiento de esas poblaciones dentro de su propio territorio, que hace que en el futuro desistan, porque no tiene sentido vivir en el medio de un bosque sin poder aprovechar los bienes que ofrece. La vida no tiene sentido. Y los subsidios que se dan, ni que fueran de un millón de reales. Pero nadie vive paralizado en un rincón si la vida pierde su sentido, ¿no? Uno se siente inútil, no hay cómo vivir sin poder hacer las cosas que siempre se hicieron, uno creció pescando, cazando, andando, haciendo sus cultivos” (Entrevista concedida a Israel Pereira Dias de Souza en marzo de 2012, [en publicación]).

Además de aumentar los conflictos sociales en los bosques de Acre, la adopción del PSA como crédito de carbono repercute tanto en el mantenimiento de la contaminación ambiental en los países centrales, como en la intensificación de conflictos más allá de las fronteras sudamericanas, como muestra Michael Schmidlehner (2012):

Con el “apoyo legal” del SISA en sus manos y con la ayuda del EDF, el gobierno de Acre logró, en 2010, firmar un acuerdo sobre REDD con los estados de California (EUA) y Chiapas (México). El memorando tiene como objetivo la comercialización de créditos de carbono que serían emitidos por los gobiernos de Acre y Chiapas. Las industrias de California que causan emisiones superiores a las normas legales de su Estado podrían compensar parte de esas emisiones excesivas a través de la compra

¹⁸ <http://www.ac24horas.com/2011/12/19/ministerio-publico-recomenda-suspensao-de-licenca-ambiental-para-o-plano-de-manejo-da-laminados-triunfo>

¹⁹ Según el líder sindical Osmarino Amâncio Rodrigues (contemporáneo de Chico Mendes) “el gobierno implementa la economía verde, pero el manejo está expulsando al cauchero de su lugar, quitándoles la dignidad a los extractivistas, los indios, perjudicando la biodiversidad. Es lo que está ocurriendo en Santa Quitéria, en Antimary. Uno va allí, y ve que el pueblo no se hizo rico, está recibiendo un subsidio [bolsa familia]. La economía se estanco y la pobreza continua” (<http://www.ac24horas.com/2011/10/08/4050>).

de estos créditos. El mecanismo legal que debe viabilizar este tipo de compensación en California, el llamado “Cap and Trade” [limitar y comercializar], fue impugnado por organizaciones de la sociedad civil californiana. A través del Cap and Trade, las industrias podrían, parcialmente, mantener sus excesivas emisiones y las comunidades tendrían que seguir sufriendo los impactos, tales como tasas elevadas de cáncer y abortos espontáneos. (CBE, 2011). En Chiapas, el acuerdo entre los tres gobiernos viene agravando los severos conflictos territoriales en la selva Lacandona. Para quedar “Ready for REDD” [listo para REDD], el gobierno de Chiapas debe comprobar que las áreas a partir de las cuales los certificados serán generados están bajo protección ambiental, y las comunidades que viven en el área que fue delimitada por el gobierno como parque ambiental ahora temen que se las expulse (Conant, 2011).

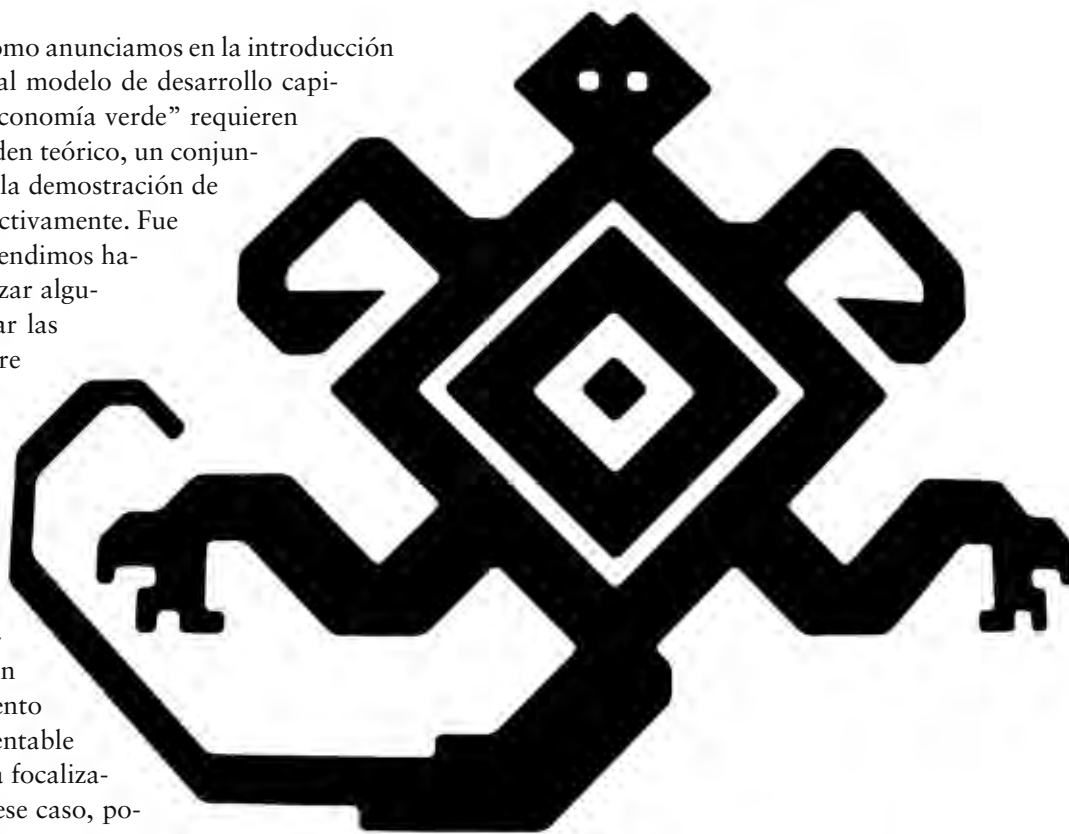
Finalmente, además de seguir destruyendo selectivamente los bosques con los PMFS, las formas de devastación total continúan su curso en el estado de Acre. De acuerdo con Verocai & Ludewigs & Pereira (2012, 56), “en los últimos diez años, el área total talada en Acre aumentó en 730 mil hectáreas, de las cuales 62% fueron convertidas en el periodo de 2000 a 2005”, superando así el promedio de las tres décadas anteriores de unas 500 mil hectáreas, y son anteriores a la implementación de la “economía verde”. Es necesario resaltar que la ganadería extensiva de corte, considerada una de las actividades más destructivas de la Amazonia, tuvo un fuerte incremento en Acre en esa última década, el rebaño pasó de 800 mil cabezas a 2 millones quinientas mil cabezas, o sea, se triplicó en sólo diez años.

Consideraciones finales. Como anunciamos en la introducción

de este artículo, las críticas al modelo de desarrollo capitalista identificado con la “economía verde” requieren además de incursiones de orden teórico, un conjunto de esfuerzos destinados a la demostración de cómo el modelo funciona efectivamente. Fue ese tipo de ejercicio que pretendimos hacer con la expectativa de lanzar algunas luces capaces de iluminar las sombras que se ciernen sobre la acelerada destrucción de los bosques tropicales en Latinoamérica y el Caribe en general, y en la Amazonia brasileña, en particular. Los defensores de la “economía verde” podrían cuestionar la plausibilidad de la generalización de la crítica al funcionamiento real de la “explotación sustentable de los bosques” a partir de la focalización en el caso de Acre. En ese caso, podríamos responder con la siguiente interrogante: ¿por qué motivo un caso que es usado como

“certificado de validez” para la réplica de un modelo, cuando es interpelado en una perspectiva crítica, deja de tener validez para fines de generalización?

Esperamos haber mostrado con razonable nitidez, a partir de la focalización del análisis en un caso divulgado por los defensores de la “economía verde” como “modelo” a ser repetido en otras regiones, la trampa de la llamada “explotación



26 *Las críticas al modelo de desarrollo capitalista identificado con la “economía verde” requieren además de incursiones de orden teórico, un conjunto de esfuerzos destinados a la demostración de cómo el modelo funciona efectivamente.*

sustentable” de los bosques. Vimos que las prácticas que rigen el proceso real de explotación maderera reiteran los fundamentos de la producción destructiva y expoliadora. El incremento de la destrucción de los bosques a través de los PMFS y el aumento del acaparamiento de tierras y de la expansión ganadera extensiva de corte ponen de manifiesto la trampa de la economía verde en Acre.

En suma, buscamos enfatizar el hecho de que los bosques están amenazados actualmente por la conjugación de las formas de destrucción convencionales más visibles, pero que por la nueva lógica de la “economía verde” pueden ser “compensadas” por el “Manejo Forestal Sustentable”. Y aún más, que la comercialización de “carbono” y de otros servicios ambientales son una amenaza frontal a la autonomía, la libertad y el control de los “pueblos del bosque” sobre sus territorios, además de “compensar” equivocadamente por la contaminación continuada de países industrializados en el Norte, como es el caso de California y su vinculación con los estados de Acre (Brasil) y Chiapas (México). A pesar de todo, tal como ocurrió en el pasado, las poblaciones y los pueblos que tienen en los bosques su “lugar en el mundo”, reaccionan y pelean contra las viejas y nuevas formas de destrucción y expoliación.

Referencias bibliográficas

- Albert, Bruce (2002). O Ouro canibal e a queda do céu. Uma crítica xamânica da economia política da natureza (Yanomami) in Albert, Bruce & Ramos, Alcida (Orgs) *Pacificando o Branco cosmologias do contato no Norte-Amazônico*. São Paulo. Ed. UNESP.
- Blaser, J., Sarre, A., Poore, D. & Johnson, S. (2011). *Estado de la ordenación de los bosques tropicales 2011*. Serie técnica OIMT no 38. Organización Internacional de las Maderas Tropicales, Yokohama, Japón. <http://www.itto.int/>
- Celentano & Santos & Veríssimo (2010). *O Estado da Amazônia Indicadores. A Amazônia e os Objetivos do Milênio* (2010). <http://www.ibcperu.org/doc/isis/13517.pdf>
- Schwarz, Laura (2008). *O Processo Internacional de Elaboração de Políticas para as Florestas*. Disertación de Maestría presentada en el PPG en Ciencia Política de la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Porto Alegre.
- Fantini, Alfredo C. & Crisóstomo Charle F. (2009). *Conflitos de interesses em torno da exploração madeireira Reserva Extrativista Chico Mendes, Acre, Brasil* [http://www.museu-goeldi.br/editora/bh/artigos/chv4n2_2009/conflitos\(fantini\).pdf](http://www.museu-goeldi.br/editora/bh/artigos/chv4n2_2009/conflitos(fantini).pdf)
- FAO (2011) *Situación de los bosques del Mundo* 2011. Edición bienal <http://www.fao.org/forestry/sofo/es/>
- Harvey, David (2004). *O Novo Imperialismo*, Ed. Loyola, São Paulo
- _____ (2011) *O Enigma do Capital e as crises do capitalismo*. Boitempo Editorial. São Paulo.
- Kageyama, P. "Manejo de florestas tropicais: que paradigma?" en *Anais do V Simpósio de Ecossistemas Brasileiros*, pp. 72-82, Vitória, 2000
- OIMT (2011); *Atualidad Forestal*, vol 18, núm. 3. Boletín de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales para fomentar la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques tropicales.
- Paula, Elder A (2005a). (Des) *Envolvimento Insustentável na Amazônia Ocidental: dos missionários do progresso aos mercados da natureza*. Edufac, Rio Branco
- _____ (2011). *Transgredindo fronteiras, Amazônia no espelho de Caliban*. UNAM, México (Mimeo).
- Paula, Elder & Silva, Silvio (2008, a) "Floresta, para que te quero? Da territorialização camponesa a nova territorialidade do capital". *Revista Nera*, año 11 núm. 12. São Paulo.
- _____ (2008, b). "Movimentos sociais na Amazônia brasileira: vinte anos sem Chico Mendes". *Revista Nera*, año 11 núm. 13. São Paulo.
- Serviço Florestal Brasileiro (2010). Plano anual de outorga florestal 2011 / Ministério do Meio Ambiente, Serviço Florestal Brasileiro. Brasília: SFB.
- Schmidlechner, Michael F. (2012). *A Função Estratégica do Acre na Produção do Discurso da Economia Verde* (en publicación).
- Teixeira, Gerson (2011). *Agravamento do Quadro de Concentração da Terra no Brasil?* <http://www.dihitt.com.br/n/politica/2011/06/22/gerson-teixeira-agravamento-da-concentracao-das-terra>
- World Rainforest Movement (2011). "A definição de floresta", briefing, septiembre de 2011, www.wrm.org.uy
- World Rainforest Movement (2012). Boletines 174 y 175, enero y febrero de 2012, <http://www.wrm.org.uy/>, acceso en febrero de 2012).
- Verocai & Ludewigs & Pereira (2012). Banco Interamericano para o Desenvolvimento. Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre-PDSA II. Expansão da Economia Florestal. Informe de Evaluación Ambiental y Social.

Imágenes de los PMFS en Acre

La secuencia de fotografías que sigue es bastante ilustrativa de lo que en realidad son los PMFS. La foto 1 fue sacada en el margen de la Carretera transacreana, en la entrada del camino vecinal que da acceso al área manejada. Quien pasa por la transacreana y ve el cartel tiende a identificarla con la imagen virtuosa de los planes difundidos por el aparato mediático. Sin embargo, los que entran en el camino vecinal se encuentran con imágenes como las reveladas por las otras fotografías, durante un recorrido de aproximadamente 30 kilómetros.

Algunas fueron divulgadas en octubre de 2011, y forman parte de las pruebas de la denuncia presentada por la Comisión Pastoral de la Tierra AC, contra la empresa Laminados Triunfo. Se trata de la empresa maderera más grande que opera en Acre y una de las más grandes en la Amazonia brasileña. Es la principal exportadora de Acre y posee el sello FSC y la mayor parte de los PMFS aprobados por el IMAC. La empresa ha sido blanco de numerosas denuncias de habitantes de las “áreas manejadas”, como la del PMFS en las Haciendas Ranchão I y Ranchão II, localizadas en la cuenca del “Riozinho do Rola (foto 1), principal afluente del río Acre, que abastece a la capital del estado, Río Branco. En los últimos años, el abastecimiento de agua ha sido seriamente comprometido por la reducción drástica del caudal del río, y una de las causas es debida a las destrucciones como la provocada por el PMFS de Triunfo Laminados.



Foto 1: Archivos de la Comisión Pastoral de la Terra AC



Foto 2: Archivos de la Comisión Pastoral de la Terra AC



Foto 3: <http://blogdaamazonia.blog.terra.com.br/2011/09/28/no-acre-moradores-de-seringal-denunciam-crime-ambiental-causado-por-manejo-de-madeira>



Foto 4: Archivos de la Comisión Pastoral de la Terra –AC



Foto 5 : <http://blogdaamazonia.blog.terra.com.br/2011/09/28/no-acre-moradores-de-seringal-denunciam-crime-ambiental-causado-por-manejo-de-madeira/>



Foto 6: <http://blogdaamazonia.blog.terra.com.br/2011/09/28/no-acre-moradores-de-seringal-denunciam-crime-ambiental-causado-por-manejo-de-madeira/>

La privatización de la Mata Atlántica: impactos de proyectos de REDD y reservas naturales sobre mujeres y hombres en comunidades tradicionales

Winfridus Overbeek¹

Si existieran sólo los caiçara, el bosque se mantendría en pie
Habitante de la comunidad Caiçara

La selva conocida como Mata Atlántica en Brasil es uno de los biomas más ricos en biodiversidad del planeta. Cubría la mayor parte de la región costera del país. El proceso brutal de destrucción sufrido por la mata atlántica, fue aún mayor que el de la selva amazónica, por estar ubicada en las regiones donde el proceso de colonización y explotación de la tierra no sólo se inició, sino que se consolidó en mayor medida a partir de 1500. Hoy, con apenas el 7% del área original, la Mata Atlántica es el bioma más amenazado del país.²

La región costera de Paraná, especialmente las localidades de Antonina y Guaraqueçaba, es una de las postales del estado localizado al sur de Brasil, por poseer la mayor área continua de mata atlántica del estado y del país. Este hecho está directamente relacionado con la presencia de poblaciones tradicionales y sus prácticas de conservación.

Sin embargo, la supervivencia de esas poblaciones está siendo seriamente amenazada por iniciativas privadas de apropiación de áreas de bosques en la región para fines diversos. En este artículo, nos dedicamos, en particular, a dos de ellas: una de comercio de créditos de carbono, en el marco del mecanismo REDD, promovida por la ONG brasileña Sociedad de Investigación en Vida Salvaje y Educación Ambiental (SPVS); y la otra para preservar la selva y biodiversidad en una reserva llamada “Reserva Natural Salto Morato”, de propiedad de la Fundación Boticário.

En este artículo, abordamos los impactos de tales actividades sobre las mujeres y hombres de las comunidades tradicionales en la región, y buscamos alertar sobre cómo esas iniciativas se articulan con la propuesta de la *economía verde*, en la agenda de la Conferencia Río+20.

Una historia de “buen vivir”

Desde el proceso de colonización de la región, en el siglo XVI, hasta la actualidad, el litoral paranaense fue poblado por comunidades tradicionales: caiçaras, quilombolas e indígenas. Hoy en día, hay decenas de comunidades de

¹ Winfridus Overbeek es el coordinador internacional del Movimiento Mundial por los Bosques (WRM), integra además la “Red Alerta Contra el Desierto Verde” de Brasil, país donde reside actualmente.

² <http://www.sosma.org.br/index.php?section=info&action=mata>



Dibujo: Atziri Carranza

tradición caiçara en Antonina y Guaraqueçaba, además de dos comunidades quilombolas, Batuva y Río Verde, y una comunidad indígena Guarani-Mbyá, en la Tierra Indígena Cerco Grande, ubicada en la localidad de Guaraqueçaba.

Las comunidades ‘caiçaras’³, cuyo origen es el mestizaje de indígenas con los primeros colonizadores portugueses, se extienden entre los estados de Río de Janeiro y Paraná, y se caracterizan por ser agricultoras y extractivistas. Históricamente, han convivido respetuosamente con la selva, donde producen sus alimentos de subsistencia con el sistema de barbecho o “descanso” de la tierra. O sea, preparan un área para plantar sus cultivos diversificados y la abandonan, después de un periodo, para que la selva y la fertilidad del suelo puedan recuperarse. En ese sistema, siempre se destacó la producción de mandioca para harina. Además, los caiçaras obtienen de la mata atlántica palmitos para su alimentación, lianas para artesanías y madera para la construcción de casas, cercas y canoas. Practican la caza y la pesca como forma de conseguir alimentos para sus familias. Tienen una tradición musical propia que buscan mantener, la *fandanga*, con instrumentos hechos con materia prima obtenida de la mata atlántica.

Las comunidades quilombolas son más de 2 mil y se extienden por todo el país⁴. Algunos centenares se localizan en áreas de mata atlántica, donde suelen practicar una agricultura diversificada de pequeños huertos, además del extractivismo, de la caza y la pesca, conviviendo con la naturaleza que les proporciona sustento.

³ <http://www.ilhabela.com.br/CULTURA/index.html>

⁴ <http://www.cpis.org.br/comunidades/>

Es evidente que para concretar su modo de vida, todas esas comunidades tradicionales, sean caiçaras, quilombolas o indígenas, dependen totalmente de la selva y, por ello, construyeron con ella una convivencia armoniosa. El hecho de que esta región esté tan bien conservada es una prueba de la presencia activa de esas comunidades, que muchas veces viven aisladamente, pero con fuertes lazos entre sí y viviendo en libertad.

Mantienen sus fiestas y danzas propias. Son comunidades negras que surgieron hace cientos de años como expresión de resistencia contra el sistema esclavista y a la búsqueda de una vida autónoma, con libertad. De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Federal de 1998, las comunidades quilombolas tienen derecho a sus tierras, y ésta ha sido su lucha principal. Las comunidades en Paraná aún no tienen sus tierras demarcadas.

Una tercera población tradicional con significativa presencia en la Mata Atlántica son los pueblos indígenas. En el caso del litoral de Paraná, se trata del pueblo guaraní, que también está presente en todo el sur y sudeste de Brasil, y en Argentina, Paraguay y Bolivia. Los guaraníes viven en comunidad en un extenso territorio, llamado *Tekoa Guasu*, y mantienen estrechas relaciones entre sí. El “caminar”, *Oguata*, tiene un carácter religioso y proviene de la idea de salir a la búsqueda de “tierras sin males”, *Yvy marany*. Así se explica la llegada de un grupo guaraní a la región, hace algunos años. Ellos ocuparon un área próxima a la ciudad de Guaraqueçaba, abundante en selvas y cercada por agua.

La tierra para los guaraníes no es un mero medio de producción sino que constituye un *Tekoa*, un lugar donde la comunidad puede realizar su modo de vida. Para conseguirlo necesita selva, agua, caza, pesca. Por ello, los guaraníes también fueron llamados *Ka'aguaygua*, que significa “los que pertenecen a la selva”.⁵

La comunidad guaraní-mbyá, en la localidad de Guaraqueçaba, luchó para lograr la regularización del territorio ocupado, un proceso casi concluido, según afirma el cacique de la aldea.

Es evidente que para concretar su modo de vida, todas esas comunidades tradicionales, sean caiçaras, quilombolas o indígenas, dependen totalmente de la selva y, por ello, construyeron con ella una convivencia armoniosa. El hecho de que esta región esté tan bien conservada es una prueba de la presencia activa de esas comunidades, que muchas veces viven aisladamente, pero con fuertes lazos entre sí y viviendo en libertad.

Históricamente, las comunidades nunca se preocuparon en registrar o cercar las tierras donde viven, ya que consideraban el territorio cubierto de selvas, ríos, manglares, islas y humedales, como un área de uso común, de usufructo de todos. Las tierras son, en su mayoría, fiscales⁶ y en ellas las familias consiguieron mantener sus propiedades, transmitidas de generación a generación. Trabajaban allí, en algunas ocasiones de forma individual, por familia, y en otras, colectivamente, en los cultivos itinerantes.

La invasión del territorio de las comunidades

Hacendados. El primer gran cambio en la región tuvo lugar a partir de la década de 1960, con la llegada de madereras y, sobretudo, de hacendados, quienes comenzaron a registrar y a apropiarse de las tierras, valiéndose muchas veces de la apropiación indebida de éstas, una práctica común en las zonas rurales de Brasil, que implica la adulteración de los documentos en los servicios de registro territorial de la región. Las familias de las comunidades fueron amenazadas y, muchas fueron expulsadas de sus territorios. Los hacendados usaban ‘*jagunços*’ [matones, sicarios] y búfalos para invadir y apoderarse de las propiedades de los pequeños agricultores. La cría de búfalos en la región, en vez de la de ganado bovino, se debe a que es un animal más rústico y, por lo tanto, más adecuado para convivir con el ambiente local en las zonas taladas, que se inundan periódicamente y, en general, son de difícil acceso y transporte.

La SPVS. Posteriormente, a fines de la década de 1990, la SPVS llegó a la región y en sociedad con la ONG estadounidense TNC (*The Nature Conservancy*) comenzó

⁵ CIMI, Dossiê de la Campanha Internacional por la demarcación de tierras indígenas Tupinkim y Guaraní, 1996.

⁶ Tierras sin títulos, por ello pertenecientes al Estado que tendría que destinarlas a la agricultura en pequeña escala de alimentos, para que las tierras cumplieran su función social. No pueden ser transferidas a grandes propietarios, sin embargo, éstos se apoderaron de ellas, muchas veces con uso de violencia y adulterando la documentación, un proceso fraudulento llamado “grilagem”.

a comprar grandes extensiones a los hacendados. También logró comprar algunas áreas de los ocupantes [posseiros], principalmente las de aquéllos que sufrieron más presión por la acción de la organización. En total, su área abarca hoy unas 18 mil 600 hectáreas en las localidades de Antonina y Guaraqueçaba: las reservas naturales de Rio Cachoeira (8 mil 600 hectáreas), en el municipio de Antonina; Serra do Itaqui (6 mil 700 hectáreas), en la localidad de Guaraqueçaba; y el Morro da Mina (3 mil 300 hectáreas), también en el perímetro de la localidad de Antonina, siendo esta última una donación en 1995 de una empresa minera que actuaba en la región a la TNC.

Dichas áreas tienen hoy el status de Reservas Particulares del Patrimonio Natural (RPPN).⁷ Se trata de áreas privadas que tienen como objetivo preservar la biodiversidad y donde la caza, pesca y otras actividades extractivistas son prohibidas.⁸ Esas reservas forman parte de un área mayor en la que se pretende preservar la mata atlántica de toda la región: el Área de Protección Ambiental (APA) de Guaraqueçaba, con 314 mil hectáreas. Un APA es un área donde la ocupación y la explotación de recursos naturales son permitidas, pero siguiendo normas que aseguran la protección ambiental.⁹

La SPVS adquirió sus extensiones de tierra gracias a la sociedad con la TNC, y a los recursos proporcionados por tres empresas estadounidenses, *General Motors*, *American Electric Power* y *Chevron*, que comparten un objetivo primordial y de especial interés: el carbono “almacenado” en esas áreas. La TNC afirma que las empresas inversionistas “destinaron, entre 1999 y 2001, 18 millones de dólares para la implantación, ejecución y mantenimiento de los proyectos brasileños durante 40 años”.¹⁰

Así, en 1999, años antes del lanzamiento del mecanismo de Reducción de las Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD), ya se había iniciado uno de los primeros proyectos de carbono en áreas de bosque en el mundo.

Según la TNC, ya fue posible restaurar mil 500 hectáreas de mata atlántica. Gilberto Tiepolo, coordinador de los proyectos de carbono forestal de la TNC, explica que “el incremento de la biomasa vegetal mediante el mantenimiento de áreas forestales en buen estado de conservación y la plantación de árboles captura el dióxido de carbono de la atmósfera y colabora para amenizar el calentamiento



Dibujo: Atziri Carranza

⁷ <http://portugues.tnc.org/comunicacao-midia/destaques/em-tupi-guarani-guaraquecaba.xml>

⁸ <http://www.infoescola.com/meio-ambiente/reserva-particular-do-patrimonio-natural/>

⁹ http://www.ambiente.sp.gov.br/apas/oque_apas.htm

¹⁰ <http://portugues.tnc.org/comunicacao-midia/destaques/em-tupi-guarani-guaraquecaba.xml>

A partir de la década de los sesenta, las familias de las comunidades fueron amenazadas y, muchas fueron expulsadas de sus territorios. Los hacendados usaban ‘jagunços’ [matones, sicarios] y búfalos para invadir y apoderarse de las propiedades de los pequeños agricultores.



Dibujo: Atziri Carranza

del planeta.”¹¹ Si, por un lado, el carbono emitido, por ejemplo, por Chevron es igual al carbono que los árboles en los proyectos de la SPVS absorben, por otro, en términos de crisis climática los dos carbonos son muy diferentes; esto es porque el carbono emitido por el petróleo de Chevron aumenta la cantidad total de carbono presente en la atmósfera, en la vegetación, en el suelo y en los mares, mientras que el carbono absorbido en los proyectos de SPVS/TNC son remociones de carbono, como máximo, temporales, incapaces de “menguar el calentamiento del planeta”. En realidad, la cantidad total de carbono, y con ello el calentamiento del planeta, tiende a aumentar.

En relación a la cantidad de carbono que los proyectos supuestamente estarían removiendo de la atmósfera circulan diferentes datos en internet. En una entrevista de 2010 de la *Revista Visão Ambiental* a la SPVS, se afirma que el proyecto ya habría removido 860 mil toneladas de carbono de la atmósfera, y en el periodo de 40 años evitaría la emisión de 370 mil toneladas.¹² En otro artículo de la TNC Brasil de 2012, se afirma que desde que el proyecto fue implantado, se absorbieron 322 mil 401 toneladas, o sea, hay una diferencia de 539 mil 599 toneladas con la cifra citada en la otra fuente. Además, el segundo documento revela otros datos, por ejemplo, que los proyectos de la SPVS, a lo largo de sus 40 años, almacenarían 1 millón 340 mil toneladas de CO₂, de las que 801 mil toneladas serían de áreas

¹¹ <http://portugues.tnc.org/comunicacao-midia/destaques/em-tupi-guarani-guaraquecaba.xml>

¹² http://www.revistavisaoambiental.com.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=643:projeto-de-carbono-colabora-com-o-desenvolvimento-sustentavel-de-comunidades-no-parana&catid=5:noticias&Itemid=5

preservadas y 543 mil toneladas de áreas restauradas, además de la preservación de selvas y bosques, en general.¹³

En realidad, las “estimaciones del volumen de carbono almacenado en las diversas áreas forestales varían considerablemente” y los “niveles de error del 50% o más no son algo raro”.¹⁴ Por otra parte, en los proyectos REDD, los cálculos de carbono almacenado se basan en la situación de referencia hipotética de que el proyecto no se hubiera desarrollado. Como se trata de una situación hipotética, es imposible tener un cálculo preciso del carbono que efectivamente sería removido de la atmósfera gracias al proyecto.

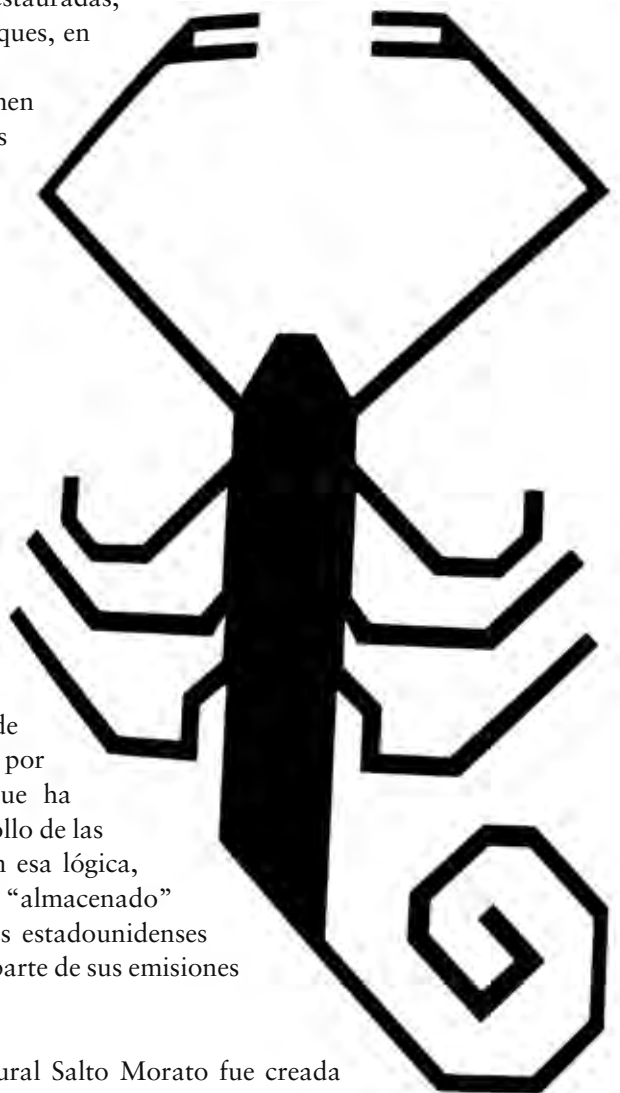
Aun así, el sitio web de la SPVS¹⁵ divulga que, según el Servicio Forestal Brasileño, el proyecto está en la categoría de “acciones de REDD que han generado buenos resultados”. Y según la TNC, se trata de “un modelo pionero de proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) que ha ayudado a mostrar caminos para el desarrollo de las localidades que conforman el APA”.¹⁶ Con esa lógica, los créditos provenientes del carbono “almacenado” serían aprovechados por las tres empresas estadounidenses que financian a la SPVS para “compensar” parte de sus emisiones de contaminantes.

La Fundación Boticário. La Reserva Natural Salto Morato fue creada por la Fundación Boticário que pertenece al Grupo Boticário, una empresa brasileña del ramo de productos de belleza. La Reserva tiene 2 mil 253 hectáreas, e incluye una cascada de aproximadamente 100 metros. El área fue comprada en 1994 con apoyo de la TNC.¹⁷

El Grupo Boticário, que es considerado pionero en cuestiones de “sustentabilidad”, anuncia en su página web que “Hace 21 años, mucho antes de que la sustentabilidad se estableciera como prioridad en la agenda de las grandes corporaciones, nuestro compromiso con la cuestión ambiental ya se expresaba por medio de la creación de lo que hoy es la Fundación Grupo Boticário de Protección a la Naturaleza”.¹⁸

La Fundación Boticário se articula con otras ONG como, por ejemplo, SPVS y TNC en la iniciativa “Observatorio del Clima”. En la introducción de tal iniciativa, se destaca la importancia del llamado *mercado de carbono*, y la califican como la iniciativa más “contundente” para atacar los cambios climáticos. Afirman que:

En el ámbito económico, la iniciativa más contundente de combate al cambio climático está representada por el mercado de carbono, que negocia los llamados créditos de carbono en bolsas de valores o en negociaciones asociadas a proyectos de reducción de emisiones en países desarrollados y en desarrollo, muchas veces con financiación de instituciones internacionales. La evolución de ese mercado muestra que países en desarrollo como Brasil tienen papel importante en las iniciativas.¹⁹



¹³ <http://portugues.tnc.org/comunicacao-midia/destaques/em-tupi-guarani-guaraquecaba.xml>

¹⁴ Kill, Jutta, “O REDD+ e os mercados de carbono: dez mitos detonados”. *Fern*, 2011

¹⁵ http://www.spvs.org.br/download/boletins/bol_jan10.html :

¹⁶ <http://portugues.tnc.org/comunicacao-midia/destaques/em-tupi-guarani-guaraquecaba.xml>

¹⁷ http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/pt-br/paginas/o-que-fazemos/areas-protetidas/reserva/default.aspx?idareaprotetida=6&titulo=reserva_natural_salto_morato

¹⁸ <http://www.grupoboticario.com.br/institucional/Paginas/institucional.aspx>

¹⁹ http://www.oc.org.br/index.php?page=Conteudo&id=1&expanddiv=menu_1

En la comunidad quilombola de Batuva, un habitante fue detenido por haber extraído madera. La prisión de otro habitante quilombola llamó la atención por el tiempo que lo mantuvieron detenido. Fueron 47 días en la cárcel, acusado de haber matado a un animal silvestre. La rebelión de la gente es aún mayor cuando se da cuenta de que los grandes propietarios no reciben el mismo tratamiento, cuando son ellos y no las comunidades los que talan la selva nativa, por ejemplo, para plantar palmeras y extraen palmitos.

Las iniciativas en el litoral de Paraná, tanto de la SPVS como de la Fundación Boticário, han provocado impactos negativos sobre las comunidades locales residentes en los alrededores de las reservas en cuestión, a pesar de que la TNC afirma que la región vive actualmente una situación de “recuperación visible de la selva y de los animales” y las “familias que vivían de la caza y de la ganadería obtienen resultados económicos concretos de actividades compatibles con la conservación del patrimonio natural”.²⁰

De hecho, la llegada de la SPVS y de la Fundación Boticário constituyó un verdadero golpe para las comunidades. Fue a partir de la privatización de las áreas compradas por dichas organizaciones que las comunidades del entorno comenzaron a perder el acceso a la abundante selva en la región, a cascadas, manglares y ríos —o sea, comenzaron a perder libertad, autonomía, el derecho de ir y venir y, principalmente, de mantener sus economías locales y ejercer su modo de vida.

Además de los impactos sobre los hombres buscamos, en el trabajo de campo para este artículo, escuchar a las mujeres, porque, como una habitante de las comunidades dice, “para las mujeres seguramente es más difícil. Tenemos más miedo. Las mujeres se quedan más en sus casas”.

Persecución. En la región siempre actuó la policía ambiental, pero, según afirman los habitantes de las comunidades vecinas de las áreas de la SPVS y de la Fundación Boticário, nunca perseguían a la comunidad como ha ocurrido después de la llegada de estas organizaciones. Casi todas las familias en la región tienen historias para contar sobre los abusos de la policía ambiental en Paraná, actualmente, llamada Fuerza Verde que, de forma articulada con las ONGs citadas, han amedrentado a las familias.

Las mujeres se ven especialmente afectadas, están más expuestas porque son las responsables de las tareas domésticas y de los niños cuando los maridos salen a la búsqueda de trabajo. Hay numerosos relatos de mujeres sobre la actuación de la Fuerza Verde, sobre cómo los policías armados irrumpen en sus casas sin tener la debida autorización judicial para ello.

Una habitante de la localidad de Antonina, vecina de la SPVS, afirma que “ellos no llegan aquí conversando, llegan perturbando”. Ella cuenta que:

Acá a mi casa, ellos vinieron, yo no estaba, había salido para entregar unas invitaciones, entonces subieron a mi casa, mi hija estaba desayunando. No tocaron a la puerta, fueron directamente a la ventana. Mi hija se asustó. Cuando volví ya habían recorrido prácticamente toda mi huerta, sin pedir permiso. No sabía que ya habían entrado a mi casa. Entonces, con esos aparatitos [de GPS], a mí no me lo hicieron, se lo hicieron a mi hija, le mostraban a mi hija, y decían: “tu padre tiene dos escopetas dentro de la casa, ¿dónde están? Decime dónde están”. Entonces me perturbaron bastante, querían entrar dentro de mi casa, e hicieron muchas barbaridades. En mi casa sólo estaba yo. Yo y mis hijos, sin mi marido, él estaba trabajando fuera, nosotros en medio de seis hombres. Y uno dijo, si no me entregas [la escopeta] vamos a agarrar a tu marido. Entonces yo fui y agarré la escopeta y se la di.

Escuchamos diversos relatos de mujeres sobre cómo sus maridos habían sido detenidos. La habitante antes citada cuenta que en una ocasión su marido fue esposado en su casa por la Fuerza Verde, que argumentó que ése era su “trabajo”. En otro momento, cuando él cortó un árbol para hacer una canoa, fue detenido durante 11 días. Para salir, tuvo que pagar fianza. Y cuando detienen a los maridos, aumenta aún más la inseguridad y el miedo de las mujeres.

²⁰ <http://portugues.tnc.org/comunicacao-midia/destaques/em-tupi-guarani-guaraquecaba.xml>



Dibujo: Atziri Carranza

Habitantes de la comunidad de Morato, vecinos de la Fundación Boticário, afirman que la policía siempre está en la comunidad. Una habitante cuenta cómo ellos entraron en la casa de su abuela de 80 años:

Mi abuela tiene presión alta, y no lo pasó bien. Se puso nerviosa. Ella tenía carne de cerdo y pollo encima del horno. Entraron con todo sin pedir permiso, sin nada, revolviéndolo todo para ver lo que había. Ella estaba en la cocina como siempre. La asustaron. Mi abuela no lo pasó bien. Pero si alguien llega a decir algo marcha preso.

En la comunidad quilombola de Batuva, un habitante fue detenido por haber extraído madera. La prisión de otro habitante quilombola llamó la atención por el tiempo que lo mantuvieron detenido. Fueron 47 días en la cárcel, acusado de haber matado a un animal silvestre. La rebelión de la gente es aún mayor cuando se da cuenta de que los grandes propietarios no reciben el mismo tratamiento, cuando son ellos y no las comunidades los que talan la selva nativa, por ejemplo, para plantar palmeras y extraen palmitos.

El derecho del uso de la selva. Hubo un caso en que un habitante de la comunidad quilombola de Río Verde cortó un árbol nativo y un grupo de policías, que contaba con el transporte concedido por la Fundación Boticário, fue hasta su propiedad para incautar la madera, alegando que él no tenía autorización para realizar el corte. El habitante que la precisaba para reformar su casa urgentemente se quedó sin la posibilidad de hacer la reforma.

Pero este habitante sí tiene derecho a cortar árboles nativos porque es miembro de una comunidad tradicional. La ley federal 11.428 del 22/12/2006 garantiza

Las mujeres se ven especialmente afectadas, están más expuestas porque son las responsables de las tareas domésticas y de los niños cuando los maridos salen a la búsqueda de trabajo. Hay numerosos relatos de mujeres sobre la actuación de la Fuerza Verde, sobre cómo los policías armados irrumpen en sus casas sin tener la debida autorización judicial para ello.

Una antigua habitante cuenta que antes “el pueblo vivía más tranquilo”. La comunidad producía su propia alimentación. La dificultad que las familias tienen para producir sus propios alimentos es debida a la falta de tierras. Y complementa que “no existían las enfermedades que hay ahora, nada de eso. Las enfermedades eran sarampión, tos convulsa que hubo toda la vida, varicela, paperas. Pero esas enfermedades como diabetes, artritis, artrosis, trombos, no existían, nadie tenía nada”. Conseguir dinero para comprar los alimentos se constituye en una presión adicional para que la gente salga de las comunidades a la búsqueda de trabajo.

a las comunidades tradicionales el uso de la selva con fines de subsistencia. En base a esta ley, la resolución 007 del 18/04/2008, elaborada por las autoridades estatales de Paraná, asegura que el habitante de una comunidad tradicional tiene derecho a 15 m³ de madera por año, siempre que no sea madera de especies consideradas en extinción. En el caso antes citado, se trataba de guaricica, una especie que no está amenazada de extinción.

Un policía ambiental, que fue escuchado en este caso, alega que el habitante debía tener registro y que eso sería, según él, algo bastante simple: sólo tenía que llevar la documentación de su terreno al órgano competente para realizar el registro. Pero esto llega a ser difícil, o inclusive imposible, para la mayoría de las familias, porque en general son ocupantes que no tienen títulos de propiedad registrados. Es un ejemplo de legislación elaborada sin la participación de aquellos a los que la ley pretende beneficiar, y que, en definitiva, termina causando un proceso de persecución inaceptable por algo que es un derecho.

Y también conduce a otras situaciones desesperantes, por ejemplo, el caso de un habitante con una parcela plantada con palmera-juçara, una especie nativa. Él afirma que ya no puede cortar esos árboles aunque estén plantados en su propio terreno.

Problemas de salud. La imposibilidad de cultivar con el sistema de barbecho, de cazar y pescar, y de practicar la medicina tradicional, generó una situación en la que los alimentos básicos saludables, sin agrotóxicos, que antes estaban a su alcance ya no pueden ser consumidos. En su lugar, las familias deben comprar la mayor parte de los alimentos básicos, en muchas ocasiones contaminados con agrotóxicos. Según las mujeres, estos cambios en la base alimentaria explican el surgimiento de nuevos problemas de salud.

Una antigua habitante cuenta que antes “el pueblo vivía más tranquilo”. La comunidad producía su propia alimentación. La dificultad que las familias tienen para producir sus propios alimentos es debida a la falta de tierras. Y complementa que “no existían las enfermedades que hay ahora, nada de eso. Las enfermedades eran sarampión, tos convulsa que hubo toda la vida, varicela, paperas. Pero esas enfermedades como diabetes, artritis, artrosis, trombos, no existían, nadie tenía nada”.

Conseguir dinero para comprar los alimentos se constituye en una presión adicional para que la gente salga de las comunidades a la búsqueda de trabajo.

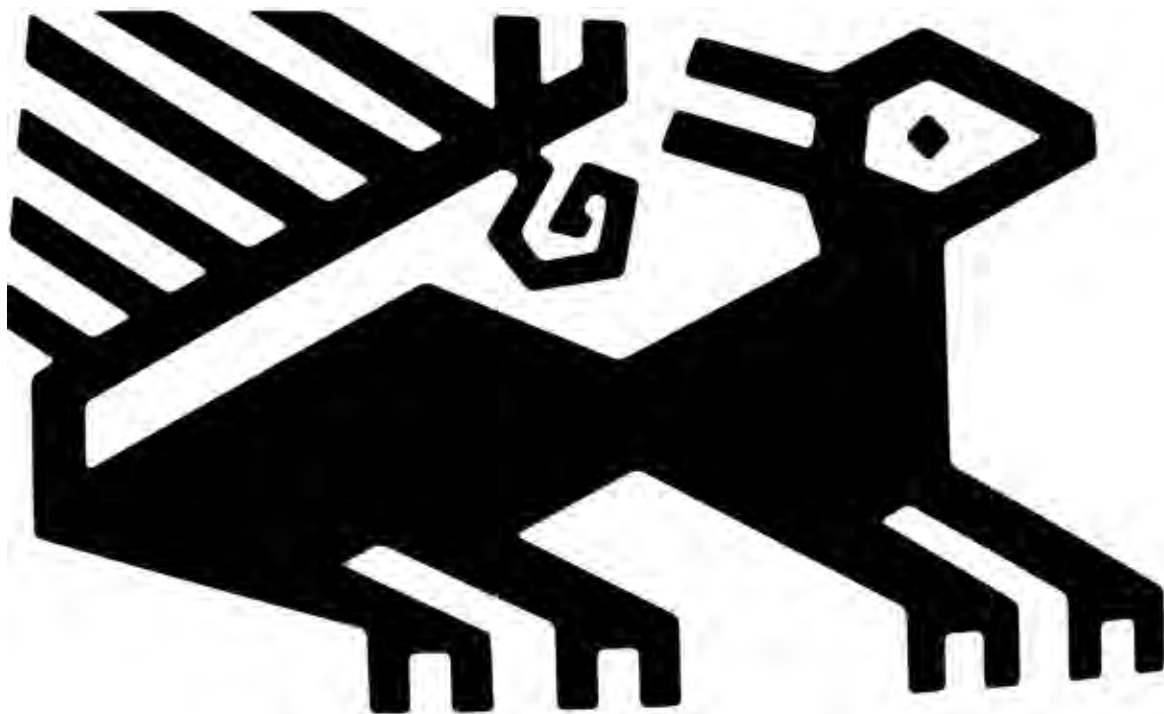
Forzado a buscar trabajo fuera y promesas no cumplidas. La persecución provocó una situación en la que las comunidades se sienten “prisioneras” y “acorraladas” en sus propias casas, cercadas por una selva que apenas pueden admirar, pero a la que no pueden entrar y cuyos beneficios no pueden aprovechar. Cuando se les pregunta si los proyectos conservan la selva, los habitantes afirman que cuando tenían sus cultivos cercanos a sus casas, había mucho más caza porque también los animales se alimentaban con los alimentos cultivados. Pero hoy ya no pueden cultivar y los animales se alejaron.

Sin embargo, no todos aceptan esta situación. Ante la pregunta de si aún logra cultivar con el sistema tradicional de barbecho, un habitante responde: “Escondido sí, bajo cuerda, y algo pequeño, sólo para sobrevivir, para consumo propio. Planto porotos para consumir en mi casa. Planto porotos, banana, mandioca, ñame, papas. Pero con sólo plantar, no es suficiente. Todo se hace a escondidas, porque tenemos miedo”.

No concuerdan en absoluto con la afirmación de que el uso tradicional que hacían de la selva estaba poniendo en peligro el futuro de la misma. Por ejemplo, en relación a uno de los alimentos más comunes y apreciados por las comunidades, el palmito, una habitante afirma: “Justo acá, acá alrededor de mi

casa hay mucho palmito, la semilla cae al suelo; a veces, las tiramos por la selva, pero no podemos recogerlos después, nosotros no podemos tocarlos”. Es por este motivo que muchos habitantes, los hombres pero también las mujeres, son forzados a vender su fuerza de trabajo a hacendados de la región o a buscar trabajo en las pequeñas ciudades de la zona o en la capital.

Asegurarse un sueldo al trabajar en la SPVS tampoco es una opción relevante para las comunidades. Cuando llegó, la SPVS prometió empleos que durarían unos 40 años, el mismo tiempo de existencia previsto para el proyecto de carbono. Según los habitantes, inicialmente, la SPVS empleó a 47 personas de la comunidad, en su gran mayoría como guardias forestales, pero hoy quedan muy pocos. Ex empleados cuentan que gran parte fue despedida, y que quedan sólo siete funcionarios. Además, los sueldos que pagaban eran y son bastante bajos, poco más de un salario mínimo. Sólo tres de los 47 empleados iniciales eran mujeres, que a su vez, tenían sueldos aun menores que el de los hombres. En la Fundación Boticário la situación no es muy diferente. Según habitantes de la comunidad de Morato, habría sólo seis personas empleadas.



Mientras la clase media de Curitiba ha comprado casas en la región para pasar sus fines de semana y feriados, varias familias de las comunidades locales han desistido de seguir viviendo en el lugar, lo que llevó al vaciamiento de las comunidades. Sin embargo, también hay casos de familias que volvieron a sus comunidades debido a la dificultad de adaptarse a la ciudad. Una habitante que vivió un periodo en la ciudad y luego volvió cuenta que “prefiero este lugar, aquí es tranquilo. Pero no podemos hacer más nada”.

Las promesas de mejora de las condiciones de vida y de generación de ingresos, hecha por la SPVS, dieron como resultado algunas iniciativas que fueron vaciándose a lo largo de los años. Un grupo de mujeres se organizaron con el propósito de generar ingresos a través del corte y confección y eso funcionó por algún tiempo, pero hoy está paralizado, según los testimonios de varias mujeres de las comunidades. Sólo un trabajo de producción de miel iniciado por la SPVS parece haber dado buenos resultados, pero no involucra directamente a las comunidades más impactadas.

*La comunidad
comenzó a realizar
pequeños trabajos de
reforestación y, con la
opción de la
agroecología se eligió
la propuesta de
trabajar colectivamente
con el sistema
agroforestal como
sugerencia principal
para que en el futuro
se generaran ingresos
para las familias.
Además, cada una de
las familias tendrá su
parcela individual para
su subsistencia básica.*

A pesar de todo, las comunidades siguen resistiendo a la presión de la SPVS y de la Fundación Boticário, cuyo objetivo parece ser expulsarlas del la región. Una comunidad se organizó de forma especial. Al comienzo de la década pasada, en el municipio de Antonina, un hacendado quería vender su terreno a la SPVS- lo que hubiera llevado a la expulsión de todas las familias que vivían en el lugar. Se organizaron y con el apoyo del Movimiento de los trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) realizaron en 2003 una ocupación. Actualmente, hay 20 familias en el lugar que luchan por la oficialización del campamento, bautizado con el nombre del ambientalista Jose Lutzenberger, en Rio Pequeno, para que sea un asentamiento de la reforma agraria.

Resistieron a una fuerte campaña contraria por parte de la SPVS que elaboró un informe en el que afirma que:

Numerosos datos, de orden técnico, económico e histórico muestran que eso (nuevos asentamientos rurales) es inviable. Admitir más asentamientos en el APA de Guaraqueçaba representaría que se abriera un peligroso precedente, con serias consecuencias ambientales y socioeconómicas. Además, las familias eventualmente asentadas estarían condenadas a una experiencia con posibilidades de éxito muy reducidas, visto que la región tiene baja aptitud para la actividad agrícola.²¹

A lo largo de la ardua lucha de esa comunidad contra las presiones del hacendado, de la SPVS y de órganos ambientales, los habitantes denunciaron delitos ambientales cometidos por el hacendado, como el desvío de un río y el uso indiscriminado de agrotóxicos, pero nada fue considerado ni por los órganos ambientales ni por la SPVS.

La comunidad comenzó a realizar pequeños trabajos de reforestación y, con la opción de la agroecología se eligió la propuesta de trabajar colectivamente con el sistema agroforestal como sugerencia principal para que en el futuro se generaran ingresos para las familias. Además, cada una de las familias tendrá su parcela individual para su subsistencia básica. Una habitante, durante el trabajo de recuperación con agroforestación de una de las áreas degradadas por el hacendado cuenta:

Yo que hace cuatro años que vivo acá, a mí me gusta. Trabajo aquí, tengo un terreno también y trabajamos colectivamente. Así se logra que todo el mundo ayude, y está funcionando, es muy bueno. En el futuro, más adelante, aquí va a haber un matorral que se va a transformar en agroforestación para poder tener ingresos para mí y para todas las compañeras en el futuro. Y es lindo, entrar aquí, ver los árboles, las plantas. Nosotros no trabajamos pensando sólo en la plata, nosotros trabajamos pensando en la vida también. Nosotros trabajamos con mucho orgullo, con mucho amor. Porque la planta es una vida igual a nosotros, siente sed también. Yo viví en la ciudad, la ciudad es un horror. Acá no, las casas pueden quedar abiertas. Y para mis hijos, este lugar es un paraíso. Acá no hay nada de violencia.

El área del campamento limita con el área de la SPVS, pero, según los habitantes, las áreas de selva bajo control de las comunidades están en mejores condiciones si se comparan con las áreas de la SPVS. Esta información y el testimonio de una habitante contradicen por completo las afirmaciones del informe de SPVS mencionado antes.

Futuro amenazado. Cercana a una de las comunidades hay una casa en la selva, en la que la SPVS desarrolla investigaciones sobre las especies de la Mata Atlántica, gracias a su sociedad con el banco privado HSBC, a través de la Alianza por el

²¹ http://www.oeco.com.br/maria-tereza-jorge-padua/16283-oeco_18681



Dibujo: Atzi Carranza

Clima (HSBC Climate Partnership). Según la página web del HSBC, se trata de un “programa ambiental innovador” para “dar continuidad a la preservación del planeta”.²²

Mientras tanto, el futuro de las comunidades está sumamente amenazado si la propuesta de preservación de las áreas forestales de la SPVS y de la Fundación Boticário, que cuentan con todo el apoyo del aparato estatal, principalmente del área ambiental y del área policial, continua dominando en la región. Es absolutamente urgente que se detenga el abuso contra las comunidades y su persecución. Lo que ocurre en la región, según los testimonios de los habitantes, son violaciones graves de los derechos humanos, e incluso sociales, culturales y ambientales. Una habitante resume:

²² <http://www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/sobre-o-hsbc/sustentabilidade/meio-ambiente/hsbc-climate-partnership>

Sí, nosotros siempre conservamos la selva. Pero en algunos momentos necesitamos cortar algo también, a veces necesitamos construir una casa, necesitamos sacar madera. Ahora, no se puede y entonces todo es difícil. Antes plantábamos ahí pero ahora no se puede más. Cuando la SPVS entró, todo terminó. En el lugar que mi padre vivía, hoy no se puede más. Antes nadie compraba porotos, no compraba maíz, muchas verduras plantábamos, cortábamos la parte baja, se limpiaba y plantaba, recogíamos la mayoría de las cosas de la tierra. Y hoy no se puede plantar, todo hay que comprar. Antes, no veíamos enfermedades. Hoy, casi todos viven enfermos. Ellos hablaron, prometieron que iban a ayudar a mi padre pero, hasta ahora, nunca vimos ninguna ayuda. Cada vez fue peor porque ellos decían que iban a ayudar y después vino la Fuerza Verde y además querían llevarse a mi padre preso. Esa es la ayuda de ellos.



La situación que enfrentan las comunidades es un ejemplo y, al mismo tiempo, una advertencia sobre la perversidad de la propuesta de *economía verde* que está en la agenda de la Conferencia Río+20, a realizarse en junio de 2012. Uno de los pilares de la economía verde es justamente el comercio en servicios ambientales como carbono, biodiversidad y agua. Los proyectos en Paraná muestran que ese tipo de “economía” permitirá un verdadero maquillaje verde para las actividades contaminadoras de las empresas que patrocinan las áreas forestales en cuestión, mientras que la privatización y el control de esas áreas provocan diversas violaciones a los derechos de las mujeres y hombres que viven en esas comunidades.

Hay un patrocinador de la SPVS como Chevron, que, además de provocar emisiones con sus actividades de extracción y quema de petróleo, causa más degradación ambiental, por ejemplo, a través del accidente de derramamiento de petróleo que contaminó el medio ambiente marino, en Campo da Frade en la Cuenca de Campos, Río de Janeiro, en noviembre de 2011²³ y otro accidente ocurrido en mayo de 2012 en la misma región. La indemnización pedida por el Ministerio Público Federal de Brasil en relación al accidente de noviembre de 2011 es de 20 mil millones de reales, cerca de 12 mil millones de dólares.²⁴ Para esta empresa, es bastante cómodo poder contar con un proyecto como el de SPVS para maquillar su imagen de verde, mientras degrada el medio ambiente.

La Fundación Boticário ha buscado contratar a nuevos empleados para actuar “como pago por servicios ambientales y economía verde”.²⁵ Según esa lógica, la posesión de áreas como la Reserva Natural Salto Morato “compensaría” a través de los “servicios ambientales prestados” —como agua, carbono y biodiversidad— las actividades productivas presentes y futuras de la empresa y/o de otras empresas, con el falso supuesto de que sería posible continuar con el actual modelo de producción y consumo y, al mismo tiempo, cuidar el medio ambiente, el clima.

La economía verde permitiría que la economía contaminante y destructiva pudiera continuar a todo vapor, pero sus propuestas concretas de “preservación” terminan destruyendo las economías locales tradicionales, de subsistencia, que buscan contribuir justamente a la conservación de los bosques y forman parte de ellos. Pero en la lógica de la economía verde, las familias se ven amenazadas y expuestas a la persecución, enfermedades y falta de trabajo e ingresos. Y la crisis climática tiende a agravarse si la propuesta de la economía verde se implementa, afectará aún más a las selvas y a la vida de esas personas.

Pero la realidad de Paraná muestra también que las comunidades resisten. Y ellas nos ofrecen una serie de elementos para repensar el modelo de desarrollo perverso que la economía verde busca consolidar. Por ejemplo, las familias que practican la recuperación de la naturaleza. Muestran que el ser humano forma parte y depende de la naturaleza, que la naturaleza es una riqueza que posibilita que la comunidad pueda “vivir bien”, conservando y disfrutando una verdadera riqueza.

Es importante, por lo tanto, escuchar a esas comunidades y así pensar otros rumbos para el modelo de desarrollo dominante, privilegiando la vida y no el lucro. Es necesario aprender con ellas para encontrar inspiración y nuevos caminos. Algunas sugerencias pueden verse en el siguiente testimonio de un habitante del asentamiento de Rio Pequeno, cuando explica el sistema agroforestal que él implementó en los alrededores de su casa en un área que había sido talada y degradada por el hacendado:

Acá hay una fertilización verde, un área de recuperación con fertilización verde. Esta se llama *mucuna*, es una planta leguminosa que produce mucha materia orgánica

Pero la realidad de Paraná muestra también que las comunidades resisten. Y ellas nos ofrecen una serie de elementos para repensar el modelo de desarrollo perverso que la economía verde busca consolidar. Por ejemplo, las familias que practican la recuperación de la naturaleza. Muestran que el ser humano forma parte y depende de la naturaleza, que la naturaleza es una riqueza que posibilita que la comunidad pueda “vivir bien”, conservando y disfrutando una verdadera riqueza.

²³ <http://www.cartacapital.com.br/carta-verde/foi-a-mae-natureza-diz-executivo-da-chevron-sobre-acidente/>

²⁴ http://www.dnonline.com.br/app/outros/ultimas-noticias/38,37,38,72/2012/03/18/noticia_interna_brasilemundo,94018/apos-acidente-executivos-da-chevron-estao-impedidos-de-deixar-o-brasil.shtml

²⁵ http://www.nqm.com.br/index.php/login/clipping/150/?sel_pasta=491&sel_mes=10&sel_ano=2011&visualizar=10282547

para el suelo, produce biomasa, materia orgánica. O sea, produce carbono. Las transnacionales usan el bosque para producir carbono, nosotros lo hacemos con fertilización verde, con mucuna, napiê, con leguminosas que recogen los nutrientes que están en el aire y los reponen al suelo. Tenemos un proyecto de 'secuestro de carbono', con agroecología y para la comunidad, no para las transnacionales. Es un proyecto que produce riqueza para el suelo y fertilidad para poder producir nuestros alimentos. Es lo contrario a los proyectos de las transnacionales que capturan carbono a través del uso de los bosques para sobrevalorizarse en el mercado capitalista. El bosque es para que el hombre viva. Dios lo dejó para la comunidad, el pueblo, para que tengamos calidad de vida en el bosque, a pesar de que esté en manos de los especuladores. Los gobiernos entraron en la lógica del capital. No es sólo el bosque, es el agua, el suelo, es toda la biodiversidad que existe en un bosque. Para nosotros, el bosque es nuestro hogar, es nuestro modo de vivir.



REDD y América Latina

En ATALC (Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe) hemos definido REDD como un mecanismo de mercado neoliberal que viola la soberanía de nuestros pueblos y su derecho al consentimiento libre, previo e informado así como a la soberanía de los estados nacionales. No es un mecanismo que venga a atacar la deforestación o sus causas sino, más bien, puede contribuir en el aumento de la misma. Rechazamos REDD y todas sus variantes pues forman parte de las falsas soluciones que se imponen desde los gobiernos, desde los foros internacionales en favor de los intereses corporativos y para lucrar a partir de crisis como la climática.

En América Latina se está implementando REDD en todos los países y en algunos ya existen proyectos REDD que están causando impactos negativos. En este artículo, recogemos la experiencia de siete países donde desde los diversos grupos de ATALC hemos realizado trabajos e investigaciones. Los estudios completos de cada país pueden consultarse en atalc.org

45

¿Cómo va el enREDDo en Chiapas?

Gustavo Castro Soto

Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México

Los antecedentes. El gobierno de California de los Estados Unidos bajo el periodo del republicano Arnold Alois Schwarzenegger (2003-2011) aprobó el proyecto de Ley AB 32 (Global Warming Solutions Act) para supuestamente aportar a la solución del calentamiento global.

Según la ley aprobada, el Air Resources Board (ARB) del gobierno de California tendría que determinar los GEI que se emitían en 1990 en todo el estado según su inventario de 1990 al 2004,¹ y poner un límite de emisiones para el año 2020. Así, el 6 de diciembre de 2007 el ARB recomendó 427 millones de toneladas métricas de CO₂ equivalente (MTmCO₂e) como el tope de emisiones para el 2020 en todo el estado, independientemente del sector². El siguiente paso después de aprobada la Ley sería identificar las políticas y medidas que se aplicarían para reducir las emisiones y mantener el límite propuesto. Pero nuevamente, para poder seguir contaminando, en diciembre de 2010 el ARB aprobó las regulaciones para que los mayores emisores de GEI pudieran compensarlo o comprar créditos de carbono, sin tener que reducir sus emisiones en el lugar de origen. Esta compra de créditos de carbono puede ser dentro de los EUA o fuera del país. Significa entonces que las comunidades locales en California afectadas por la contaminación de los emisores cercanos (refinerías, industrias, entre otras) no se verían beneficiadas. Así, voltean a ver la Selva Lacandona en Chiapas, México.



El acuerdo Chiapas-California. Poco antes de la COP16 en Cancún en noviembre de 2010 y en el marco de la 3ª Cumbre Global de Gobernadores ante el Cambio Climático, los gobernadores de California, Chiapas y Acre firmaron el Memorandum de Entendimiento³ para la cooperación técnica, científica y legal, con el fin de lograr un mercado homologado para la compra-venta de créditos de carbono forestal, que pudiera compensar California para el supuesto combate a la crisis climática, por medio de la reducción de emisiones de GEI por la deforestación, la degradación de los suelos y el manejo de los bosques.

¹ California Environmental Protection Agency, Air Resources Board, "California 1990 Greenhouse Gas Emissions Level and 2020 Limit", consultado el 13 de abril de 2012. <http://www.arb.ca.gov/cc/inventory/archive/archive.htm>

² Ibid. <http://www.arb.ca.gov/cc/inventory/1990level/1990level.htm>

³ www.semahn.chiapas.gob.mx/subambiente/MdE



Previo a la COP16 estos gobiernos quisieron mostrarse apresuradamente a la vanguardia de la implementación de la primera experiencia piloto de REDD a nivel mundial. Sería el primer mercado mundial de créditos de carbono forestal definidos legalmente al menos desde el estado de California, con el fin de cumplir con la meta propuesta en la Ley AB32, y no como un mecanismo

voluntario. También pretendían que contagiara a otros estados y provincias para formalizar el mercado internacional de créditos de carbono forestal, y cuyas experiencias dieran pautas para definir el mecanismo de REDD desde Naciones Unidas.

En el COP16, el gobierno de Chiapas lanzó su caballería verde para hacerse presente, acompañado de las ONG ambientalistas del coyotaje verde empresarial, en diversas mesas y paneles de trabajo, entre ellas: Sistemas Multiescala de Información y su Aplicación al Piloto de Chiapas; REDD para Chiapas; Proyecto REDD+; Memorándum de Entendimiento para el Mecanismo REDD, Presentación de Avances del Programa de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Chiapas; Presentación de la Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el Estado de Chiapas. También presumió la operación de 24 Ecobuses con un poco de biodiesel chiapaneco durante el COP.⁴

Sin embargo, cabe señalar otros antecedentes importantes con el fin de implementar diversas experiencias en el país bajo el paraguas del concepto de REDD. En 2010 la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo (AECID) financió un proyecto piloto REDD+ a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en la Cuenca del Río Ayuquila en el estado de Jalisco. Se pretendió impulsar proyectos productivos para mantener la superficie forestal e incluir en el ordenamiento territorial el cambio climático y el manejo sustentable de los recursos. AECID esperaba que esta experiencia se replicara en otras regiones. Posteriormente, en octubre de 2011, la transnacional Coca-Cola informó que bajo el programa 'Captura de Carbono en Comunidades Indígenas y Campesinas en el Estado de Oaxaca', que llevara a cabo Pronatura AC y la Conafor, entregaría al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el certificado por la neutralización de 12 mil toneladas de CO₂ que se generaron durante la reunión del COP16 en Cancún, por medio de la entrega de recursos para la restauración, mantenimiento, enriquecimiento de cafetales y reforestación en diez comunidades forestales de las regiones Mixe, Sierra Norte, Chinanteca y Sierra Sur del estado de Oaxaca.

Los vacíos y los retos. Ambos gobiernos, Chiapas y California, se enfrentan con vacíos y problemas que tienen que solucionar luego de la firma del Memorando de Entendimiento a finales del 2010. A nivel federal, el gobierno mexicano no contaba con la normatividad para la implementación del mercado internacional del carbono forestal. Además hay una falta de definición de las estructuras, secretarías y dependencias federales y estatales en cuanto a su intervención, alcance y

⁴ Informe de Comparecencia 2011 de la Lic. Lourdes Adriana López Moreno, Secretaria del Medio Ambiente e Historia Natural del gobierno de Chiapas; http://www.semahn.chiapas.gob.mx/portal/descargas/comparecencia_2010.pdf

sus delimitaciones en la implementación de REDD. El personal técnico y la burocracia gubernamental carecen de información sobre su significado, los conceptos que maneja y el objetivo mismo. Habría que definir las metodologías, la evaluación y seguimiento de los proyectos y mediciones de la captura de carbono, el área boscosa y de selvas que entrarían en el mercado e inventariar lo más que se pudiera, entre otros retos políticos, sociales, técnicos y científicos.

Por su lado, la ARB de California requería la definición de una normativa especial —para lo cual se estableció en febrero de 2011 el “Grupo de Trabajo de compensaciones REDD” (ROW), con el apoyo y financiamiento de Climate and Land Use Alliance (CLUA), conformado entre Climate Works Foundation, David and Lucile Packard Foundation, Ford Foundation, y la Gordon and Betty Moore Foundation.⁵ ROW definiría las opciones, recomendaciones y procesos de adopción para Acre, Chiapas y California sobre los mecanismos técnicos, políticos, jurídicos e institucionales para aplicar REDD como un mecanismo que reconociera el cumplimiento legal del tope de emisiones por medio de los créditos forestales internacionales de carbono. ROW establece su trabajo entre California y Chiapas para presentar sus recomendaciones a la ARB a finales del 2012. Para el 2013, la ARB tomaría una definición sobre los mecanismos de los créditos REDD en California.

El Air Resources Board (ARB) de California ya ha aprobado los protocolos o las normas de compensación propuestos por la Reserva de Acción Climática (CAR), entidad no gubernamental, para que las empresas puedan compensar su contaminación con los bosques nacionales, lo que podría dar pie para implementarlos en las compensaciones en otros países. Sin embargo, casi 50 organizaciones sociales de los Estados Unidos manifestaron al ARB su preocupación de que estos protocolos incentivan la tala de bosques y la conversión de los bosques en plantaciones forestales.⁶ El gobierno de California propone que sólo el 20% de las emisiones de GEI de las industrias pueden ser compensadas con bonos de carbono forestal. Siendo el sector más contaminante, tampoco REDD aporta significativamente a la aparente solución.

También necesita elaborar un plan sectorial para reducir esas emisiones, crear los mecanismos para darle seguimiento y verificación a esas reducciones, y al mismo tiempo exigirle al gobierno de Chiapas que los créditos de compensación que compre sean reales, adicionales, cuantificables, permanentes, verificables y aplicables.⁷ Con todo, hasta el momento no hay experiencia clara ni exitosa en ello ya que las líneas de base de las emisiones forestales no dan seguridad para vender créditos de carbono sólidos y adicionales para propósitos de cumplimiento.⁸ Y California no cuenta con mecanismos para monitorear salvaguardas. No es rigurosa ni confiable científicamente la medición de la existencia y los flujos de carbono. No es eficiente ni creíble. Muchos estudios aseguran que las estimaciones del carbono forestal pueden generar números y cantidades artificiales; y que según la metodología que se aplique hay porcentajes muy dispares en dichas mediciones.⁹ Sin embargo, el gobierno de Chiapas intentó definir, con muchas lagunas e inconsistencias, la línea base, un inventario que reflejara el escenario de compra de créditos de carbono. Para ello habría que calcular las tasas de deforestación y degradación de bosques que pudiera definir futuros negocios y proyectos que los redujeran.¹⁰

Los falsos argumentos. El gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero (2006-2012), lanzó una campaña de justificación y convencimiento sobre el programa REDD. Argumentó que REDD reduciría la crisis climática. Esto es totalmente falso. Los bosques absorben el carbono y otros gases que de manera natural hay en la atmósfera. Pero no los GEI que artificialmente se inyecta por medio de la quema de hidrocarburos, la deforestación o degradación de los suelos. Mucho menos se

⁵ REDD Offset Working, Group <http://stateredd.org/about-row/>.

⁶ Carta de las ONG dirigida al Presidente de la California Air Resources Board (09 de diciembre 2010.).

⁷ California Air Resources Board. Overview; preliminary draft regulation for a California cap-and-trade program for public review and comment; 24 de noviembre, 2009; California cap on greenhouse gas emissions and market-based compliance mechanisms in accordance with California Global Warming Solutions Act of 2006 (AB 32); <http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/meetings/121409/pdr.pdf>

⁸ Griscom B, Shoch D, Stanley B, Cortés R, Virgilio N: La sensibilidad de la cantidad y la distribución de créditos de carbono forestal tropical en función de las normas de referencia. *Environ Sci Política* de 2009, 12:897-911.

⁹ Munden Projetc, “REDD and Forest Carbon: Market-Based Critique and Recommendations”, 7 de marzo de 2011. Pelletier J., 2011. “El diagnóstico de la incertidumbre y la detectabilidad de las reducciones de emisiones para REDD + en las capacidades actuales: un ejemplo para Panamá.” Los estudios de las reservas de carbono en proyectos en Perú, llevados a cabo utilizando dos metodologías diferentes dieron lugar a una diferencia de las reservas de carbono de 50 toneladas de carbono / hectárea.

¹⁰ Ver: “Inventario estatal de emisiones de gases de efecto invernadero para el estado de Chiapas. sectores: energía, procesos industriales y residuos”, s/f. También: “Desarrollo de una línea base subnacional para REDD+: deforestación y degradación forestal. Fernando Paz, Ma. Isabel Marin, Marisol Reyes, Edgardo Medrano y Fernando Ibarra. Colegio de Postgraduados”, s/f. También se puede consultar: “Inventario de GEI provenientes del sector Agricultura, Silvicultura, y Otros Uso de Suelo (ASOUS)”/Ben de Jong, Vanessa Maldonado, Marcela Olguín, Fabiola Rojas, Verónica de la Cruz, Fernando Paz, Guillermo Jiménez Ferrer, Miguel-Angel Castillo Santiago, s/f

Una de las grandes trampas del gobierno de Chiapas fue sugerir que las plantaciones de palma aceitera podrían ser incorporadas al mecanismo de REDD y que los indígenas se verían beneficiados no sólo de la venta del aceite de palma, sino de la “venta de oxígeno” y por lo tanto tendrían mayores ingresos. Muchos productores y ejidatarios adoptaron el programa de la “Reconversión Productiva” y una vez eliminado el maíz, el café u otros productos agropecuarios por la palma aceitera, se les informó que ésta no puede cortar en 25 años. Una forma más de despojo de la tierra a los indígenas y campesinos.

logrará tal absorción de GEI adicionales con los pocos bosques que quedan en el planeta. Por si fuera poco, el programa no reduce las emisiones de origen sino que sólo se compensan con metodologías y mecanismos de verificación muy dudosos.

El gobierno de Chiapas aseguró que con REDD la población indígena saldría de la pobreza y tendrían mayores ingresos. Pero el pago de REDD en Chiapas supuso 2 mil pesos mensuales a pocas familias, que equivale a poco más del salario mínimo (poco más de 5 dólares). Tampoco es una alternativa económica ni sacará de la pobreza extrema a las familias indígenas. Este raquítico ingreso no se invierte en otras opciones de desarrollo local. También se argumentó que con REDD se reforestaría las tierras degradadas por la ganadería, pero el resultado ha sido la implementación de monocultivos del agronegocio y la presión de deforestar selvas o bosques para ampliarlos.

Paralelo a esto, sumas millonarias son atrapadas por los intermediarios, por las organizaciones ambientales internacionales empresariales que aparecen en el ciclo del coyotaje verde. Conservación Internacional, AMBIO, Pronatura y Ecosur, entre otros se benefician de jugosos contratos, consultorías, y servicios como validadores, verificadores, registradores, capacitadores, agentes de comercialización y consultores cuyos costos pueden rebasar el 40 o 50% del presupuesto como sucede en muchas experiencias de pagos por servicios ambientales, aunado a los mecanismos de corrupción gubernamental. Frotan sus manos al predecir las ganancias que obtendrían de la administración de la venta de créditos, mientras las familias indígenas, confrontadas y divididas, reciben las migajas del mercado.

El gobernador aseguró que el “plus” de REDD en Chiapas significa la participación de las localidades. Sin embargo, nunca hubo consulta ni información previa sobre el programa. Agudizó los conflictos entre las comunidades indígenas, las amenazas de expulsión, las amenazas de muerte y las divisiones comunitarias. El gobernador llamó a los indígenas lacandones a evitar que otros grupos indígenas permanecieran en la zona y los conminó a expulsar a todo grupo que quisiera un pedazo de tierra o que pretendiera asentarse en la selva.

Una de las grandes trampas del gobierno de Chiapas fue sugerir que las plantaciones de palma aceitera podrían ser incorporadas al mecanismo de REDD y que los indígenas se verían beneficiados no sólo de la venta del aceite de palma, sino de la “venta de oxígeno” y por lo tanto tendrían mayores ingresos. Muchos productores y ejidatarios adoptaron el programa de la “Reconversión Productiva” y una vez eliminado el maíz, el café u otros productos agropecuarios por la palma aceitera, se les informó que ésta no puede cortar en 25 años. Una forma más de despojo de la tierra a los indígenas y campesinos. Y por supuesto, nunca llegaron, hasta la fecha, los recursos por la venta del supuesto oxígeno que aportaría la palma africana al planeta. Por otro lado, bajo el lema de que los bosques son igual a plantaciones, se incentiva la tala de bosques por monocultivos que impactan no sólo en el acceso y calidad del agua, sino también en la soberanía alimentaria de los pueblos.

Según el Programa de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Chiapas alrededor del 62% de las emisiones de GEI en Chiapas se producen por el cambio de uso de suelo entre 1990 y 2010. Aunque poco se habla de sus causas como las más de 1 millón 200 mil hectáreas que abarcaban las más de 120 concesiones mineras otorgadas para el 2010, entre otros megaproyectos, y las instalaciones de megatiendas de Walmart por todo el estado. Sin embargo, con ello se ayuda a justificar el programa de REDD+ en Chiapas. De esta manera, en diciembre de 2010, el gobierno del estado comprometió a algunas comunidades indígenas de la Selva Lacandona a no cambiar el uso actual de suelo para evitar invasiones a la selva. Recordemos que en Chiapas existen un millón 300 mil hectáreas consideradas reservas naturales, de las cuales, casi 50 por ciento (614 mil) están en la Lacandona.¹¹

¹¹ Castro Soto, Gustavo, “EnREDDar a Chiapas”, El Escaramujo, Año 05, No 01, 10 de enero de 2011, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México; <http://otrosmundoschiapas.org/index.php/component/content/article/118-el-escaramujo/897-el-escaramujo-enreddar-a-chiapas.html>

¿Y qué avances se han dado en Chiapas? El gobierno de Chiapas ha impulsado una variedad amplia de acciones procurando el alcance múltiple que pueda tener el programa de REDD: las compensaciones pueden ser por proyectos que eviten la deforestación (RED), que eviten la degradación de los suelos (REDD) o que se implementen formas de gestión forestal y mejoras en las reservas de carbono (REDD+).¹² En este marco, existen propuestas para incorporar como un componente a REDD+ los bosques gestionados por las comunidades y los ejidos en Chiapas, que en algunos lados ya se les otorgan pagos con fondos públicos para el mantenimiento y la ampliación de la cubierta forestal.¹³

En enero del 2011 tomó posesión el nuevo gobernador de California, el demócrata Jerry Brown, de 72 años y quien ya ha gobernado en dos ocasiones el estado (1975 y 1983). Ahora se enfrentó con un déficit presupuestario de más de 20 mil millones de dólares al momento de tomar el poder. Mientras tanto, en ese mismo mes la Cámara de Diputados del Congreso de Chiapas aprobó un fondo de casi 50 millones de pesos proveniente de fondos públicos de la recaudación de impuestos por la tenencia vehicular en el estado, para iniciar el pago a los indígenas con el programa de REDD+.¹⁴ Con ello se inició en enero de 2011 el pago mensual de 2 mil pesos a cada uno de los mil 678 comuneros de Lacanjá Chansayab, Nahá, Metzabok, Ojo de Agua Chankin, Nueva Palestina y Frontera Corozal, que sumarían alrededor de 40 millones, y el resto para la administración, la burocracia del aparato de REDD+. Ésta es una forma en que la sociedad chiapaneca subsidia la experiencia piloto de REDD+ y al final un subsidio de uno de los estados más pobres del país al estado de California, uno de los estados más ricos del mundo.¹⁵

¹² "REDD as a Compliance Option"; Brian Murray, Director for Economic Analysis. Nicholas Institute for Environmental Policy Solutions. Duke University. Workshop on sector-based offset crediting and a subnational (REDD) program California Air Resources Board Sacramento, CA, July 30, 2010.

¹³ David Bray, Profesor de Earth & Environment de la Universidad Internacional de Florida (USA) y coautor de *"Manejo Comunitario de Bosques y el Surgimiento de Instituciones de Gobernanza en Múltiples Niveles: Lecciones de México, Brasil y Bolivia para el Desarrollo de REDD+"*; <http://blog.cifor.org/> - ECoticias.com; <http://www.ecoticias.com/naturaleza/60955/la-energia-solar-fotovoltaica-es-hoy-mucho-mas-barata-que-hace-un-ano-medio-ambiente-energias-renovables-verdes-limpas-sostenibles-alternativas>

¹⁴ Gobierno del Estado de Chiapas, *Boletín 4943*, <http://www.comunicacion.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20110508121730>

¹⁵ V Informe de Gobierno, Juan Sabines Guerrero. Pags 303-310. Chiapas ante el Cambio Climático.



Foto: Prometeo Lucero

En marzo de 2011 el gobernador de Chiapas realizó la entrega de 2 mil pesos a los 601 comuneros de la región de Frontera Corozal, Chiapas, del programa de REDD+ para "garantizar un mejor futuro para sus hijos y para la humani-

El gobernador aprovecha cualquier ocasión para insistir en su discurso aunque las comunidades indígenas no tengan ni idea de lo que significa REDD para California en el sentido de seguir contaminando y sólo compensando con migajas, ni la corrupción y ganancias de los intermediarios, ni las ganancias que significarían para la industria de California comprar bonos de carbono en lugar de reducir sus GEI. Por ello, el gobernador les insistió: “El tema de REDD+ es para que los dueños de la tierra reciban recursos por conservar, siempre se pagó por producir, siempre se pagó por deforestar, ahora vamos a pagar por conservar, eso nunca se había pagado y es lo mejor que le podemos hacer al planeta: conservar”.

dad” y “para tener mayores oportunidades de desarrollo”. Este programa se convierte en decreto de ley para la Selva Lacandona, en las siete reservas. El gobernador anunció en ese momento que se iniciaría un inventario para que los comuneros accedieran al pago de recursos federales e internacionales, lo que se complementará con diversos proyectos, entre ellos los de Reconversión Productiva fuera de la reserva, con especies como palma de aceite o hule.¹⁶ Así, la lógica del *capitalismo verde* y el agro negocio es la apuesta para las comunidades indígenas y campesinas.

Dos meses después el gobernador regresó. En mayo de 2011 realizó la quinta entrega de los dos mil pesos a cada familia del programa de REDD+ y les pidió, ante las críticas que ya circulaban en los medios, no creer en quienes “propalan información falsa” respecto a este programa: “Apoyen esa causa, defiéndanla, que no haya falsos además impostores que van y dicen (sic), no es que les van a quitar su tierra, no los van a despojar nunca, jamás actuaré en contra de mi pueblo y el proyecto que tenemos está muy claro, se está pagando por conservar, no se está comprando nada, ustedes están dando un servicio al mundo”. Y enfatizó: “La captura de monóxido de carbono y metano que propicia la conservación de los recursos naturales de la Selva Lacandona pronto significará recursos para los propietarios de la tierra”.

El gobernador aprovecha cualquier ocasión para insistir en su discurso aunque las comunidades indígenas no tengan ni idea de lo que significa REDD para California en el sentido de seguir contaminando y sólo compensando con migajas, ni la corrupción y ganancias de los intermediarios, ni las ganancias que significarían para la industria de California comprar bonos de carbono en lugar de reducir sus GEI. Por ello, el gobernador les insistió: “El tema de REDD+ es para que los dueños de la tierra reciban recursos por conservar, siempre se pagó por producir, siempre se pagó por deforestar, ahora vamos a pagar por conservar, eso nunca se había pagado y es lo mejor que le podemos hacer al planeta: conservar”. Insistió en el deslinde del terreno de la selva a conservar: “Hay que seguir avanzando con las mojoneras, hay que lograr el diálogo con la parte federal para que se respete su territorio, hay que llegar a los acuerdos, a las comunidades para que conserven y respeten su territorio, hay que lograr también la vigilancia y la capacitación para que puedan cobrar esos bonos de carbono”.¹⁷

Como parte de la labor de convencimiento, el gobernador les entregó equipo de cómputo para las autoridades comunales y a la “policía ecológica” radios portátiles de comunicación, cámaras digitales y mochilas a las personas para el combate de incendios.¹⁸ Ahora se tratará de cuidar la mercancía (los bosques y selvas) a los compradores de los bonos de carbono de California. Esta “policía ecológica” compuesta por 42 indígenas (ocho mujeres y 36 hombres) de la región tiene el rol de cuidar la Selva Lacandona, ya se les ha equipado con patrullas y pueden detener a sospechosos o personas que cometan delitos en las regiones donde operan, entre ellas en Zamora Pico de Oro, Benemérito de Las Américas, Frontera Corozal, Ocosingo, Marqués de Comillas, Selva Lacandona, Palestina, Lacanjá, entre otras comunidades.¹⁹ Si bien esto agravará los conflictos y enfrentamientos con otras comunidades indígenas, no será esta “policía ecológica” quien detendrá a los grandes taladores y saqueadores de madera de la Selva con destino a los centros turísticos como Cancún, entre otros.

En junio de 2011 la Unión Europea, a través de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), formalizó una donación de 2 millones de euros regulado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para la ejecución del proyecto para reducir la deforestación y degradación forestal llamado “Implementación de Acciones Tempranas REDD+ en cuencas prioritarias de México a través de la construcción de mecanismos de gobernanza a nivel local”. En las cuencas seleccionadas se concentra el 70% de la deforestación

¹⁶ *La Jornada*, 21 de marzo de 2011, p. 30

¹⁷ Gobierno del Estado de Chiapas, Boletín 5122.

¹⁸ Gobierno del Estado de Chiapas, Boletín 5040; <http://www.comunicacion.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20110518015018>

¹⁹ Gobierno del Estado de Chiapas, Boletín 5005, <http://www.comunicacion.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20110515122122>

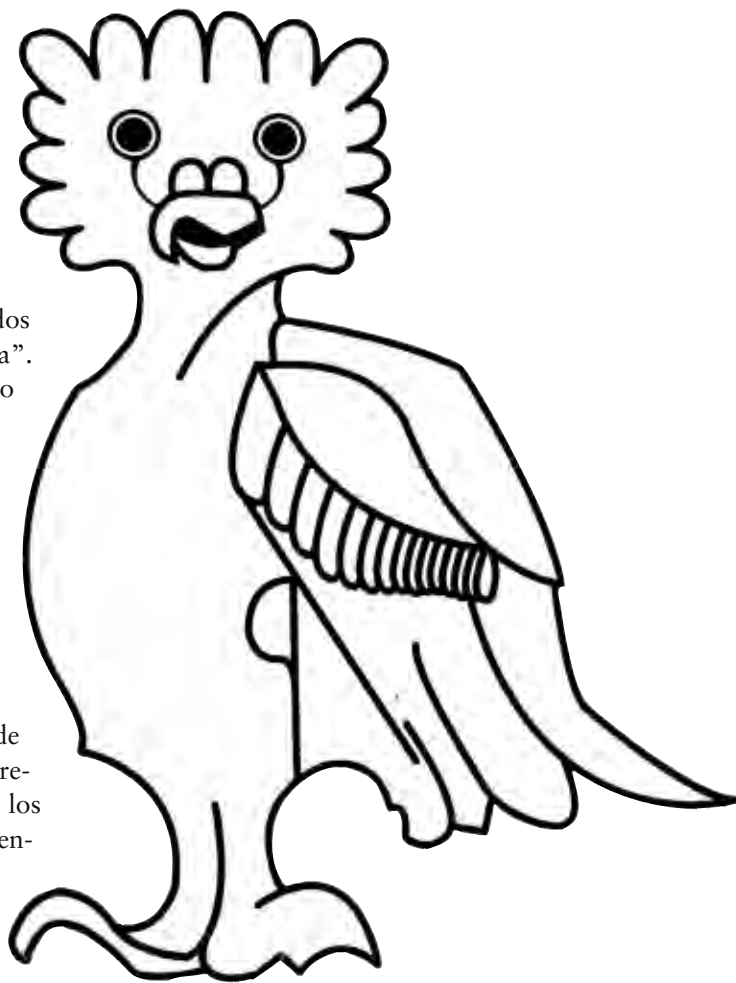
del país. El principal desafío del proyecto consiste en crear un mecanismo institucional que permita adaptar y operar REDD+ a nivel local. Para enfrentar estos desafíos en México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Conafor, promueve en el país el Manejo Forestal Sustentable. Este programa de largo plazo se basa en los principios internacionales REDD+ (Reducción de las Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación).²⁰ En ese mismo mes el mandatario chiapaneco realizó la sexta entrega de dinero a los indígenas y los felicitó por aceptar el programa de REDD+. También felicitó los éxitos de la “policía ecológica” que recientemente había detenido a las dos supuestas bandas de saqueadores de flora y fauna en la reserva Montes Azules y de la Selva Lacandona. Sin embargo, siguen quedando im-

punes otros programas de biopiratería, investigadores, empresas y otros centros de investigación que continúan saqueando información y material genético. Sin embargo, el mensaje es para los indígenas, tratados como extranjeros en sus territorios. El destinatario fue claro y el gobernador insistió: “Cuidemos que nadie se meta, no puede pasar nadie a quitar fauna de ahí y mucho menos a talar árboles. Quiero felicitarlos porque ya esta policía —me platicaron— ha logrado detener a dos grupos delictivos que se dedicaban a la tala de caoba”.

En contraposición, dos meses después, en agosto de 2011 las Comunidades Indígenas de la región Amador Hernández, Reserva de Biosfera Montes Azules, en la Selva Lacandona, declararon su rechazo a “la brecha (mojoneras) Lacandona al lado de nuestras tierras porque tiene como propósito disponer las tierras medidas del lado Lacandón en servicio de las potencias capitalistas”. Así mismo rechazaron el “El proyecto REDD+ en la Reserva de Montes Azules es la nueva máscara, máscara climática, con la que el gobierno Federal de Felipe Calderón y el de Chiapas de Juan Sabines pretenden encubrir el despojo de la biodiversidad de los pueblos”. También rechazaron los demás componentes que acompañan al programa de REDD como es el programa de la Reconversión Productiva, el Pago de Servicios Ambientales y FANAR²¹, la política de acaparamiento de tierras impulsada por el Banco Mundial, las organizaciones conservacionistas y sus gobiernos neoliberales como el de Chiapas.²²

Hasta casi un año después, Ecosur se deslindó en marzo del 2012 del programa de REDD+ en la Selva Lacandona argumentando que “los pueblos indígenas y productores pequeños agropecuarios podrían enfrentarse con limitaciones en el uso de sus tierras, porque REDD indirectamente busca el acaparamiento de tierras por empresas y gobiernos”. Ecosur insiste que el programa, avalado por el Banco Mundial, no resuelve de fondo el problema ni el cambio climático ni la deforestación, pues “no enfrenta las causas subyacentes de dichos procesos que son inherentes al capitalismo desenfrenado”.

Las perspectivas y conclusiones. California pretende que el esquema del comercio de emisiones se apruebe en el 2013, aunque prevean el inicio de la compra de créditos de carbono para compensar sus emisiones fuera de los EUA a partir



²⁰ <http://www.gaiaox.org.mx/index.php/noticias/312-europa-subvenciona-con-dos-millones-el-proyecto-redd-en-mexico>; <http://www.scidev.net/es/news/uni-n-europea-dona-a-m-xico-us-2-8-millones-para-redd-.html>; Portal del Medio Ambiente/ 15 Junio, 2011.

²¹ FANAR: Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar; programa para impulsar la privatización de las tierras ejidales y comunales.

²² Comunicado de las Comunidades Indígenas de la región Amador Hernández, Reserva de Biosfera Montes Azules, en la Selva Lacandona; 21 de agosto del 2011.

El Salvador es el país más deforestado de Centroamérica. Según el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en su informe sobre el estado del medio ambiente, en El Salvador 2003-2006 sólo se cuenta con una cobertura forestal del 12.6% en todo el territorio. Se calcula que el bosque de manglar, uno de los ecosistemas más importantes, se encuentra seriamente degradado en un 35%. Las causas son diversas: la instalación de salineras y camaroneras, los proyectos urbanísticos y hoteleros, el uso de la tierras para pastizales y la expansión de las fronteras agrícolas entre otros.

del 2015. El programa de REDD no es la solución al cambio climático, no reduce las emisiones; aumenta la deforestación, la privatización de tierras, las divisiones comunitarias; fomenta la pérdida de la soberanía alimentaria y el subsidio con fondos públicos al mercado de carbono.

En el caso de Chiapas, el estado se enfrenta en el 2012 con grandes retos. Necesita elaborar el inventario y va retrasado. Las comunidades no tienen información a fondo de las implicaciones del programa REDD. Condiciones múltiples que no garantizan solidez en las mediciones, además de enfrentamientos y enconos entre diversos grupos indígenas. En este 2012 las elecciones presidenciales y para gobernador del estado en el mes de julio mantienen en un impasse a la burocracia gubernamental, los presupuestos y las acciones. El gobierno estatal tiene que buscar recursos públicos de diversas fuentes para mantener la costumbre a la que ya están sometidos los indígenas de recibir sus 2 mil pesos mensuales. En este año, por las carreras de las campañas políticas, se redujo el pago de la tenencia vehicular en el estado, de donde salía el presupuesto para pagar a los comuneros su pago de REDD+. Quizás para el mes de septiembre del 2012 la turbulencia política luego del proceso electoral haya amainado. Es entonces cuando se llevará a cabo la reunión anual del CGF en el estado de Chiapas.

REDD en el Salvador: **Mercantilizando nuestros últimos bosques**

Silvia Quiroa

CESTA - Amigos de la Tierra El Salvador

El Salvador es el país más deforestado de Centroamérica. Según el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en su informe sobre el estado del medio ambiente, en El Salvador 2003-2006 sólo se cuenta con una cobertura forestal del 12.6% en todo el territorio. Se calcula que el bosque de manglar, uno de los ecosistemas más importantes, se encuentra seriamente degradado en un 35%. Las causas son diversas: la instalación de salineras y camaroneras, los proyectos urbanísticos y hoteleros, el uso de la tierras para pastizales y la expansión de las fronteras agrícolas entre otros.

El Salvador ha sido clasificado como uno de los países de la región que presenta mayor vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos aunque sus emisiones de gases con efecto de invernadero no son significativas y no tiene ninguna responsabilidad (en términos formales) en la reducción de estos gases. El MARN si habla de “mitigación basada en la adaptación”, concepto que aún no es claro pero sí se evidencia aspectos que apuntan al programa REDD+.

El Salvador, al igual que el resto de países centroamericanos, excluyendo a Belice, forma parte de la lista de países de América Latina que han sido aceptados en el Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). El Salvador inició la preparación de R-PIN en el año 2009 mientras que Costa Rica y Panamá ya han sometidos su propuesta. Además, como parte de la región centroamericana, el país al menos participa en tres iniciativas para promover REDD entre las que se encuentran:

1. El fondo cooperativo para el carbono forestal, que es el fondo más activo y se encarga de proveer asistencia financiera y técnica para crear capacidades y desarrollar el sistema de incentivos positivos para REDD+.

En general, la aplicación REDD+ se desarrolla en fases. Durante la primera, los países preparan las estrategias REDD+ a nivel nacional e inician los procesos sociales y ambientales incluyendo los niveles de referencia, las salvaguardas y un marco de implementación sienta esta la fase de preparación. La segunda, es

un periodo en que los países REDD comienzan la aplicación de estrategias así como la realización de reformas políticas y legales y la ejecución de actividades de demostración. Cumplidas estas dos fases, se espera que los países REDD estén listos para recibir los pagos. En el siguiente cuadro se muestran los países y el grupo de donantes que impulsan este programa:

Donantes del FCPF (En millones de dólares)	
Noruega	50
Alemania	46.1
Inglaterra	17.9
Australia	12.7
Estados Unidos	10.
Suecia	6
Comisión Europea	6.7.
The Nature Conservancy	5
CDC climat	5
British Petroleum	5

Fuente: Información tomada de *REDD Alert*. núm. 4 octubre 2011



53

2. El programa colaborativo de las Naciones Unidas sobre REDD (UN-REDD) que da financiamiento a actividades en dos áreas: a) gobernanza de sistemas forestales que incluye capacidad institucional, aspectos legales, tenencia de la tierra y mecanismo de distribución de pagos entre otros; y b) monitoreo, reporte y verificación.
3. El programa regional sobre REDD que financia GTZ. Da inicio en mayo del año 2011 y funciona bajo la dirección de La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), órgano ambiental del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Es apoyado por la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), financiada por el gobierno de la República Federal de Alemania a través del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)²³, entre sus componentes se encuentran:

- a. El dialogo intersectorial.
- b. Mecanismos de compensación sostenibles.
- c. Monitoreo e informe para proveer datos e información para la supervisión de emisiones de CO₂ provocadas por la deforestación y degradación de los bosques.

A principios de mayo 2012, este programa firmó un convenio con UICN que entre otras acciones busca coordinar actividades para desarrollar plataformas REDD+ en Centroamérica, identificar sitios piloto e implementar actividades REDD+. Desarrolla líneas base de emisiones por deforestación y degradación en Centroamérica, entre otros.

Además existen otras acciones lideradas por organizaciones internacionales como: Conservación internacional, Rainforest Alliance, The Natural Conservancy, el Fondo Mundial para la Naturaleza y WWF, entre otros.

Con el cambio de gobierno salvadoreño, se tuvo un compás de espera en el desarrollo de la estrategia pues luego de la preparación del R-PIN en 2009 no es sino recientemente (2011) que el gobierno reinició el proceso y en palabras del Ministro del MARN se busca trabajar con la agenda de adaptación²⁴ “basada en ecosistemas, un concepto bastante diferente al que ha adoptado los otros países de la región, por lo que actualmente se ha insertado en el programa REDD que financia GTZ, y la primera acción es el levantamiento de una línea base”. Los recursos financieros y técnicos están destinados para preparar condiciones y generar capacidades nacionales para impulsar REDD.



²³ <http://www.reddccadgiz.org>.

²⁴ Memoria del dialogo mesoamericano de seguimiento por Internet, reducción de emisiones por deforestación y degradación: implicaciones para comunidades forestales, nov 2009 San Salvador, Bank Information Center BIC, PRISMA y ACICAFOC

En ese sentido El Salvador ha estado buscando su preparación para el programa REDD. Para tal fin el MARN ha trabajado en la preparación de diferentes documentos y desarrollando los arreglos institucionales para formar parte de la iniciativa, entre los que se pueden destacar los siguientes:

1. Plan Nacional de Cambio Climático que incluye²⁵:

a. Acciones nacionales voluntarias de mitigación (NAMAs):

- * sector energía (transporte, producción energética),
- * sector uso del suelo, cambio de uso del suelo y forestal,
- * sector desechos,
- * sector agricultura.

b. Acciones nacionales de adaptación (NAPA):

- * sector forestal: estrategias de adaptación forestal,
- * otros sectores: Áreas Naturales Protegidas, incluyendo manglares.

2. Acciones de mitigación en el sector forestal: restauración (reforestación) de áreas degradadas y enriquecimiento de bosques secundarios con especies forestales nativas:

- * establecimiento y manejo de sistemas agroforestales: cafetales, plantaciones;
- * mejoramiento de bosques energéticos,
- * enriquecimiento de bosques secundarios,
- * restauración de bosques tropicales secos degradados,
- * rehabilitación de suelos degradados,
- * restauración del bosque de manglar.

Un hecho claro es que El Salvador, por su reducido bosque, tiene muy poco potencial en lo que se refiere a la deforestación y/o degradación evitada, por ello su apuesta es a las reservas de carbono que pretende impulsar a través de su agenda de restauración de ecosistemas (programa de restauración de ecosistemas y paisajes (PREP). Sin embargo aún tiene que resolver problemas fundamentales como la tenencia de la tierra (uno de los problemas estructurales más sensibles no sólo en el país sino en toda la región), los derechos de uso y acceso a los recursos forestales, los derechos de carbono, la gobernabilidad de los territorios, y desarrollar estrategias de participación efectiva, entre otras.

El Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y paisajes (PREP) ha establecido 5 temas claves: regulación hídrica; biodiversidad (suelos y vegetación); captura y mantenimiento de carbono, lo que implica ampliar el alcance de REDD más allá de considerar únicamente los bosques para incluir suelos; perspectiva de paisaje y territorio; y seguridad alimentaria²⁶.

Con este programa (PREP) según el R-PP²⁷, El Salvador atenderá la temática específica de “mitigación basada en la adaptación” y asesorará y proveerá los lineamientos para el diseño, preparación e implementación de la Estrategia Nacional REDD Plus de El Salvador. El MARN ha creado una unidad especial que ha denominado Unidad Coordinadora PREP-REDD+.

En el marco de REDD hay otras iniciativas en los mercados voluntarios como son, por ejemplo, por sus nombres en inglés:

- * Avoided Deforestation Through the Payment of Environmental Services in Rainforests Located on Private Lands in the Conservation Area of the Central Volcanic Mountain Range of Costa Rica.
- * Avoided Deforestation in the Coffee Forest in El Salvador.



²⁵ Arreglos para la gestión de la fase de preparación nacional REDD en El Salvador, Ministerio del Ambiente y recursos naturales, El Salvador, enero 2010.

²⁶ Memoria foro taller “Agricultura sostenible para la restauración de ecosistemas y paisajes rurales”, febrero 2012, San Salvador.

²⁷ Readiness Preparation Proposal (R-PP), version 6, working draft, nov 2011, (FCPF), The United national collaborative, Programme of Reducing Emission from deforestation and forest degradation in development countries, El Salvador, Abril 2012.

En Centroamérica, con excepción de El Salvador y Costa Rica, se observa un fuerte interés en las actividades de deforestación evitada, probablemente porque es una de las áreas con mayor posibilidad de fondos.



Sobre la participación social en REDD. Quienes impulsan el programa REDD han formado estructuras regionales y nacionales. Una de ellas es el Diálogo Mesoamericano de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación: formado por ACICAFOC, PRISMA²⁸ y el Bank Information Center (BIC). Lo que hace este espacio es conocer el abordaje de las diferentes iniciativas sobre REDD en los países de Centroamérica y México y llama la atención el interés de estos tres organismos, dada su naturaleza. PRISMA por ejemplo en un programa de investigación y no se conoce por lo menos en El Salvador precisamente por sus vínculos con la población.

A nivel nacional, se encuentra el grupo de Diálogo Rural. Este grupo está formado por instituciones públicas, ONG, universidades y agencias de cooperación. Se dice que es un grupo que busca programas de inversión para superar la pobreza rural y, curiosamente, la Bahía de Jiquilisco en el estero de Jaltepeque está definida como una de las zona de prioridad. Ésta es una de las áreas del país con mayor cobertura del bosque de manglar, donde es significativa la especulación de la tierra y con alto riesgo de desarrollar un turismo depredador y excluyente. Además el bosque de manglar está considerado como parte del programa REDD + según lo mencionó la señora viceministra del MARN²⁹.

Existen otros espacios mencionados en la R-PP como las mesas permanentes territoriales, las mesas de concertación y desarrollo forestal. En términos de la participación según el R-PP se menciona una lista amplia de grupos e instituciones, durante el proceso que dice el MARN que ha desarrollado. Sin embargo, se ha comprobado que muchas de las mencionadas hasta la fecha no han sido consultadas y como ejemplo está CESTA-Amigos de la Tierra El Salvador.

²⁸ Programa de Investigación de Medio Ambiente.

²⁹ La presentación pública del programa PREP fue el día 7 de mayo del 2012 en un hotel de la ciudad de San Salvador.

Una de las salvaguardas para cualquier iniciativa REDD+ habla de: participación plena y efectiva de los interesados que entre otras demandas plantea: “desarrollar o mejorar los mecanismos para garantizar el acceso público a la información y facilitar la participación de los pueblos indígenas, comunidades locales, propietarios forestales, y otras partes interesadas en la toma de decisiones a todos los niveles”. Aspecto que hasta ahora no han dejado claro quienes promueven REDD+ en el país. Un ejemplo se tiene en La Montañona, zona prioritaria para el programa PREP-REDD+ y que Edwin Cortés, representante de la Fundación Promotoras de Cooperativas Agrícolas manifiesta que “las comunidades han sido invitadas a participar en actividades bajo los argumentos de restauración de ecosistemas, agricultura sostenibles, sistemas productivos y no se les ha presentado la verdadera realidad de las implicaciones de REDD+.”

Vinculación REDD+ con otros programas nacionales. REDD+ en el caso salvadoreño se vincula con al menos los siguientes programas nacionales: restauración de ecosistemas y paisajes, el plan de agricultura familiar (cuya acción principal ha sido la distribución de paquetes de semilla, fertilizantes y pesticidas o herbicidas químicos), los fondos del Milenio II enfocados en crear un polo de desarrollo en la franja costero-marina del país que entre otras actividades remueve los obstáculos a los interesados en invertir, para mercantilizar nuestros recursos costero-marinos.

Los manglares de El Salvador y REDD+. Todos los manglares del país son parte de la iniciativa REDD según lo expresó la viceministra del MARN. La Bahía de Jiquilisco es una de las tres zonas prioritarias bajo el argumento de la restauración del ecosistema. Esta zona es uno de los estuarios y bosque de manglar más importante que se encuentra en la vertiente del pacífico centroamericano, al existir una importante concentración de especies marino costeras. Las comunidades que viven en y de los manglares han hecho hasta la fecha un uso aceptable de sus recursos. Sin embargo el gobierno actual cuenta con un plan de manejo de la zona para promocionar su venta a grupos corporativos.



Foto: Prometeo Lucero

REDD en Costa Rica: un paso más en la mercantilización de los bosques

Isaac Rojas, Mariana Porras y Henry Picado
Coecoceiba-Amigos de la Tierra Costa Rica

Pago por servicios ambientales: antecedente de REDD. El PSA es un instrumento ampliamente utilizado en el país lo que ha sido muy difundido, llegando a afirmarse por parte de los diversos gobiernos, que gracias a su implementación el país ha recuperado su cobertura boscosa. El PSA es el principal antecedente del mecanismo REDD en Costa Rica.

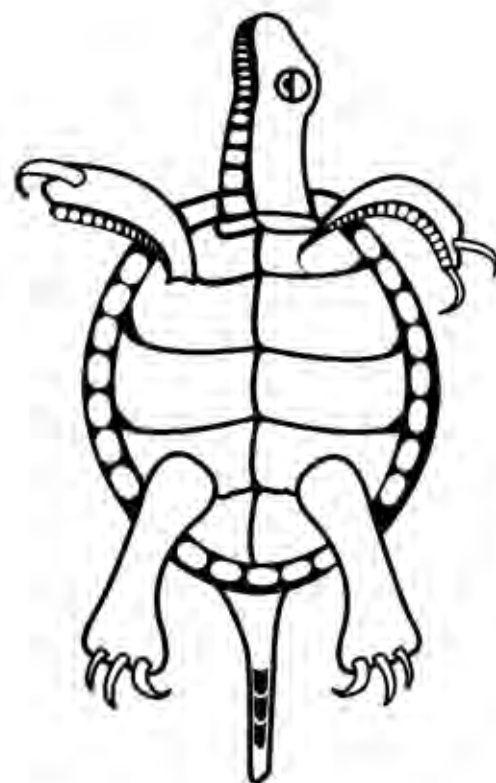
El PSA fue desarrollado por el Estado como un mecanismo para promover la conservación de los bosques. Es un sistema de incentivos financieros a cargo del Fondo Nacional para el Financiamiento Forestal (Fonafifo), una dependencia del Ministerio de Ambiente y Energía. El PSA es dedicado a propietarios(as) y poseedores(as) de bosques y plantaciones forestales a quienes se les paga por los servicios ambientales que sus bosques o plantaciones proveen. El presupuesto proviene del 3.5% del impuesto a los combustibles, según la Ley 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributaria. De conformidad con la Ley Forestal, el país reconoce servicios ambientales tales como: mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero; protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico; protección de la biodiversidad para su conservación y uso sostenible, científico y farmacéutico, de investigación y mejoramiento genético; la protección de ecosistemas y de formas de vida; la belleza escénica natural para fines turísticos y científicos.

Uno de los problemas estructurales del PSA es la mezcla del reconocimiento de servicios ambientales brindados por un ecosistema y del financiamiento a la actividad maderera. Durante la aplicación del PSA, y desde el sector ecologista, se ha criticado fuertemente que se le pague a plantaciones forestales cuando más bien las plantaciones forestales provocan los mismos impactos que otros monocultivos. Debido a estas críticas, se suspendió durante un tiempo este pago por servicios ambientales volviéndose a reestablecer hace dos años.

Los sistemas de PSA ofrecen una visión reduccionista al enfocarse en los denominados servicios ambientales donde valores culturales, espirituales y sociales del bosque y la biodiversidad son dejados de lado con los respectivos impactos en comunidades locales y pueblos indígenas. El PSA, además, enfrenta la dificultad de que no puede cuantificarse en forma exacta cuanto cuesta un “servicio ambiental”. Al mismo tiempo, es un mecanismo que no cuestiona o propone soluciones a las causas de la degradación ambiental y tampoco cuestiona el consumismo depredador. Dado que brinda tan sólo un pago por un periodo de tiempo determinado, tampoco ofrece una solución a aspectos tales como la reducción de la pobreza. El PSA provoca la mercantilización y privatización de la Naturaleza.

Una de las grandes trabas para optar por este incentivo es la exigencia de la titularidad de la tierra, lo que dificulta a los pequeños poseedores recibir algún pago como es el caso de parceleros en asentamientos campesinos (IDA, JAPDEVA) y tierras comunitarias. En general las áreas con mayor incidencia de cambio de uso y de extracción ilegal de madera están ubicadas en terrenos que carecen de títulos de propiedad y muchos de ellos se localizan en áreas prioritarias por ser corredores biológicos, áreas protegidas y cuencas estratégicamente importantes para la producción hídrica.

No es cierto el discurso oficial que sostiene que a través del PSA se combate la pobreza y se favorece la distribución de recursos económicos en la población. El PSA no se creó con el propósito de atenuar la pobreza, se pensó más bien como un mecanismo en apoyo al sector forestal. Existen estudios que concluyen que el PSA se ha concentrado en pocas manos favoreciendo sobre todo a aquellas personas



*Si en realidad se quisiera
favorecer a las
comunidades locales y a
los pueblos indígenas, la
solución debería ser la
promulgación de
políticas públicas
integrales que favorezcan
el control comunitario
del territorio y los bienes
de la Naturaleza
fortaleciendo iniciativas
ya existentes como la
gobernanza comunitaria
del bosque y la
biodiversidad, garantizar
las condiciones necesarias
para que exista un
ejercicio real de sus
derechos históricos y
colectivos como la
autonomía y el control de
sus tierras y territorios
bajo su cosmovisión.*

que además de su casa en las ciudades, tienen un terreno en zonas rurales donde se encuentran los bosques: la mayor parte de las personas que acceden al programa son medianos o grandes productores en la zona norte o bien profesionales y empresarios en la parte central del país que no viven de los ingresos por PSA.

El PSA genera conflictos a lo interno de las comunidades, sobre todo las indígenas donde existe la propiedad colectiva, puesto que el PSA crea dueños para las funciones de la Naturaleza, lo que ocasiona una competencia por el acceso a los recursos económicos que se ofrecen. Este impacto también se da a nivel cultural debido a que el uso de los bosques en estas comunidades siempre ha sido libre, colectivo y fuera del ámbito de la comercialización, ya que no es una mercancía. En una reunión que Coecoceiba tuvo el pasado 16 de mayo del 2012 en una comunidad indígena del territorio Bribri, pudimos constatar como se ha creado una división debido a que algunas personas indígenas están a favor del PSA (sobretudo porque han recibido algunos pagos) y otros lo rechazan y además dicen ni siquiera conocer qué es el mecanismo y menos haber recibido fondos provenientes del mismo. Es decir, uno de los primeros y principales impactos del PSA, es la división comunitaria.

Si en realidad se quisiera favorecer a las comunidades locales y a los pueblos indígenas, la solución debería ser la promulgación de políticas públicas integrales que favorezcan el control comunitario del territorio y los bienes de la Naturaleza fortaleciendo iniciativas ya existentes como la gobernanza comunitaria del bosque y la biodiversidad, garantizar las condiciones necesarias para que exista un ejercicio real de sus derechos históricos y colectivos como la autonomía y el control de sus tierras y territorios bajo su cosmovisión.

Además, el PSA en Costa Rica se encamina a tener un carácter mercantilista puesto que cada vez hay más presiones para que se convierta en un mecanismo de mercado. Esto a pesar de que en realidad, los fondos provienen del pago de impuestos por lo que podría ser considerado como un subsidio. Sin embargo, en los diversos gobiernos se insiste, gracias a la presión de espacios internacionales como la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o instituciones como el Banco Mundial (pero también por la convicción de quienes han estado en los distintos gobiernos), en que el PSA sea un mecanismo de mercado más favoreciendo la tendencia global en el tema.

El PSA es un sistema caro que le consume al Ministerio de Ambiente y Energía un 30% de su presupuesto cubriendo menos de 300 mil hectáreas entre bosques y plantaciones. Con el 70% del presupuesto restante, este ministerio tiene que atender su personal y un total de 1 millón 250 mil hectáreas en ASP más los problemas cotidianos de contaminación, aspectos de energía entre muchas otras tareas más.

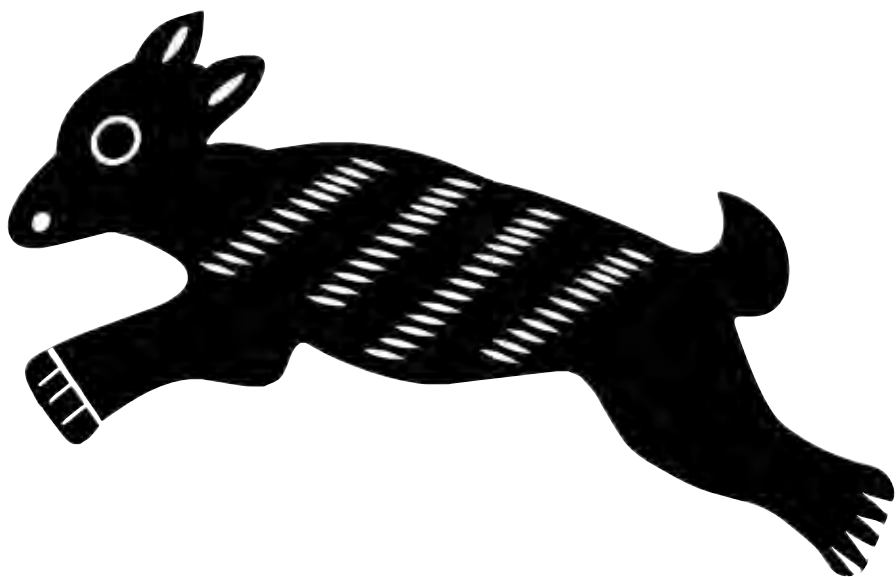
Dos estudios, uno elaborado por la Universidad de Alberta y otro citado en el número especial de *The Economist* sobre REDD, sostienen que el PSA en Costa Rica no ha sido una herramienta para el combate a la pobreza y tampoco ha sido la causa fundamental por la que se ha recuperado la cobertura boscosa en el país. Para explicar el por qué hoy el país cuenta con más del 50% de su territorio con cobertura boscosa, tendríamos que destacar la aplicación de políticas públicas, la existencia de mayor conciencia ambiental, la puesta en práctica y el rescate de prácticas campesinas en la agricultura y el descenso abrupto en los precios de la carne que se dio hace varias décadas que desestimuló esta actividad, dejando en manos de la recuperación natural, muchas fincas.

Otro instrumento utilizado es los certificados de servicios ambientales (CSA) que consiste en captar fondos de empresas e instituciones para retribuir a los propietarios/as de bosques por conservarlos. De esta forma, se firma convenios financieros con el fin de contar con más recursos para el PSA en un área determinada. Actualmente existe convenios con hidroeléctricas privadas nacionales, el gobierno noruego, la Global Environmental Facility y el banco alemán KfW. Este

instrumento se vende como una buena inversión para el sector privado que a través de la misma ayudará con la conservación de los bosques. Puede convertirse en un excelente mecanismo para el lavado verde de muchas empresas.

La oferta de proyectos de “absorción de CO₂ a través de actividades de aforestación/reforestación dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)” es otro instrumento existente. Este pretende, favorecer y estimular la absorción de CO₂ a través de diversas actividades. Actualmente existen nueve proyectos bajo el esquema de MDL, todos en el área energética. En el área forestal ha sido difícil registrar un proyecto ya que la metodología es muy rigurosa y los que se han presentado han sido rechazados. Lo mismo ha sucedido con los proyectos de conservación. Todos los proyectos han sido desarrollados para ser ejecutados en periodos de 20 años y pueden renovarse. Los MDL han sido ampliamente criticados debido a que no ayuda en nada en el combate a las causas que provocan el cambio climático y más bien provocan no sólo más cambio climático sino un sinnúmero de otros impactos. Los mismos han favorecido la expansión acelerada de monocultivos, los cuales amenazan con severos daños ambientales incluyendo pérdida de biodiversidad, concentración de la tierra en pocas manos y control corporativo de la producción.

Todos estos instrumentos, no han impedido que los bosques se encuentren actualmente amenazados por actividades tales como el turismo a gran escala o el monocultivo de piña. El plan de contingencia forestal ha permitido que grandes compañías produzcan madera bajo un concepto mercantilista concentrando incentivos como el PSA para el establecimiento de plantaciones de monocultivo y abriendo la explotación de madera del bosque y otros agroecosistemas según estrictos criterios de rentabilidad y mercado. El PSA a su vez se ha destinado principalmente para el establecimiento de plantaciones, cuya madera será destinada a la elaboración de tarimas para la exportación de piña, lo que ha provocado que el país se quede sin madera para otros usos: en el 2006 el Ministerio de Ambiente advierte que el país “se queda sin madera” y que a corto plazo será necesario importarla. De esta forma, el PSA se convierte en un subsidio a la industria maderera.



REDD en Costa Rica. Recientemente el gobierno ha incursionado en la creación de una estrategia para implementar REDD y así participa del FCPF (Fondo Cooperativo de Bosques) que es explicado como un proyecto piloto y de generación de aprendizaje que se ejecutará mediante un fondo constituido por el Banco Mun-

Todos estos instrumentos, no han impedido que los bosques se encuentren actualmente amenazados por actividades tales como el turismo a gran escala o el monocultivo de piña. El plan de contingencia forestal ha permitido que grandes compañías produzcan madera bajo un concepto mercantilista concentrando incentivos como el PSA para el establecimiento de plantaciones de monocultivo y abriendo la explotación de madera del bosque y otros agroecosistemas según estrictos criterios de rentabilidad y mercado.



Foto: Prometec Lucero

Para explicar el por qué hoy el país cuenta con más del 50% de su territorio con cobertura boscosa, tendríamos que destacar la aplicación de políticas públicas, la existencia de mayor conciencia ambiental, la puesta en práctica y el rescate de prácticas campesinas en la agricultura y el descenso abrupto en los precios de la carne que se dio hace varias décadas que desestimuló esta actividad, dejando en manos de la recuperación natural, muchas fincas.

dial. El FCPF consiste en proveer a los países con asistencia financiera y técnica para desarrollar capacidades de un futuro sistema de incentivos para REDD. La institución a nivel nacional encargada de liderar el proceso es el Fonafifo.

Según Fonafifo, REDD en Costa Rica abarcará las siguientes iniciativas: estrategia para el control de la tala ilegal (ECTI), inventarios forestales, estudios de cobertura (mapa de la cobertura forestal de Costa Rica 2005), programa de PSA, proyecto ecomercados y la Estrategia Nacional de Cambio Climático enfocada en el concepto de “carbono neutralidad”. Algunos de estos elementos ya existen y son aplicados en el país por lo que no son nada nuevos. Otros, como la estrategia sobre cambio climático es una serie de acciones sin mayor coherencia y enfocada en la promoción de negocios privados bajo mecanismos de mercado como lo es carbono neutral. Este mecanismo fue concebido como una forma de atracción de inversiones privadas al país: invertirían para obtener una marca —carbono neutral— que les permitiría hacer más negocios.

Para elaborar la estrategia REDD, Costa Rica recibirá una donación de 200 mil dólares al entrar en el FCPF, para preparar el R-Plan (plan de preparación), requisito fundamental para acceder a una donación de 3 millones 400 mil dólares. En su momento y hasta el 2009, Fonafifo invitó a diversas instituciones y organizaciones para realizar consultorías e iniciar la preparación pero ninguna mostró interés en su momento lo que hizo que los avances en la discusión sobre REDD en Costa Rica se llevaran a cabo en el 2010 y 2011.

Según lo propuesto por Fonafifo, el contenido del R-Plan parte de varios componentes:

1. Preparación y consulta: establecer un sistema nacional para coordinar, promover REDD y buscar fondos.
2. Diseño de la estrategia REDD.

3. Desarrollo del marco de Implementación de la estrategia REDD.
4. Establecer un escenario nacional de referencia y diseño de un sistema nacional de monitoreo.

Para realizar lo anterior, la idea era generar un proceso que desarrolle y proponga una metodología y que incluya un proceso amplio de consulta para que pueda ser considerado una propuesta de metodología para un programa REDD de carácter nacional. Si bien el proceso se propone ser “ampliamente participativo”, funcionarios de Fonafifo, la institución oficial que ha sido declarada como punto focal de REDD señalan que: “REDD es una iniciativa país en donde todos los actores podrán tener la oportunidad de contribuir a su desarrollo e implementación, a fin de garantizar que esta sea: significativa, inclusiva, previsor, coordinada”. Sin embargo ante la consulta por parte de grupos campesinos, indígenas y ecologistas de cómo se iba a financiar su participación para poder contar con tiempo para la elaboración de propuestas y discusión en las diversas comunidades, Fonafifo dijo que no había fondos disponibles, lo cual evidencia el carácter poco participativo del proceso que se piensa echar a andar.

El proceso ampliamente participativo simplemente no se dio. Nunca se realizó una consulta con el sector campesino y al sector ecologista, si bien participamos en algunas reuniones luego no nos convocaron más. Coecoceiba siempre asistimos para decir, basados en nuestros estudios y también con base en literatura especializada, que REDD jamás podía ser un mecanismo de mercado y más bien, el país tenía que revisar muy críticamente el PSA para construir algo novedoso. La memoria del amplio proceso participativo registró nuestra intervención así: Coecoceiba, en contra. Nunca y a pesar de nuestra propuesta, consignaron nuestros argumentos por lo que los invisibilizaron y de esta forma, han dirigido la propuesta REDD hacia una propuesta de mercado. Esta propuesta se basa en la experiencia del PSA que ha favorecido mayormente el monocultivo y la tala selectiva. Además, se ha dado el irrespeto a los derechos de los pueblos indígenas. El gobierno solamente dice que el PSA es el responsable de la recuperación boscosa del país y, para eso, han desarrollado algunos estudios de metodología con un nivel de complejidad que casi rayan en lo esotérico, donde se han propuesto demostrar que la recuperación de la cobertura boscosa del país se debe al PSA y el impacto de la misma en el incremento de los stocks de carbono.

Con la implementación de REDD, el gobierno pretende consolidar al menos 600 mil hectáreas bajo PSA actual y ampliar la cobertura en 750 mil hectáreas adicionales, además de recuperar la cobertura forestal en el 12% del territorio nacional que se encuentra en usos distintos a su vocación forestal y mantener el Sistema Nacional de Áreas Protegidas como un seguro contra la no permanencia (fugas domésticas) en un 26% (que es el área actual).

Para el sector campesino, tanto a nivel nacional como internacional, un aspecto de enorme importancia es determinar si REDD será concebido como un mecanismo de mercado. Para este sector, el detener la deforestación y la degradación de bosques no puede terminar siendo un simple mecanismo de contabilidad de créditos de carbono sobre el cual se basen mercados especulativos que favorecen a grandes empresas contaminadoras y al mantenimiento de los niveles de emisión en los países industrializados. Su preocupación se basa en que existen casos donde corporaciones u organizaciones de carácter conservacionista expulsan campesinos de sus tierras para liberar áreas dedicadas a supuestos proyectos REDD. Otro tema de importancia relacionado a estrategias para enfrentar y mitigar el cambio climático, se relaciona al fomento de agroecosistemas forestales así como la soberanía alimentaria y energética. Una agricultura que integre árboles y bosques y esté en función de la producción de alimentos para mercados locales.

Nunca se realizó una consulta con el sector campesino y al sector ecologista, si bien participamos en algunas reuniones luego no nos convocaron más. Coecoceiba siempre asistimos para decir, basados en nuestros estudios y también con base en literatura especializada, que REDD jamás podía ser un mecanismo de mercado y más bien, el país tenía que revisar muy críticamente el PSA para construir algo novedoso. La memoria del amplio proceso participativo registró nuestra intervención así: Coecoceiba, en contra.

La seguridad en la tenencia de la tierra y la equidad en la distribución de la misma es otro de los elementos importantes para el sector campesino. Así, cualquier mecanismo que quiera enfrentar el cambio climático no sólo debe alejarse del comercio de carbono sino que debe integrar componentes que fomenten una mejor distribución de la tierra y mayor seguridad en su tenencia. El hecho de que existan campesinos sin tierra o con parcelas minúsculas hace que no se pueda pensar en el fomento de sistemas agroforestales en algunas regiones de Mesoamérica. También se ha señalado que la expansión de grandes monocultivos del agronegocio cuya producción va dirigida a abastecer el consumismo de mercados internacionales es una de las principales causas subyacentes de la deforestación y de una agricultura subsidiada a partir de combustibles fósiles. Este tipo de desarrollo debe ser detenido teniendo en cuenta que las plantaciones de árboles no son bosques y deben salir de los esquemas MDL.

En Costa Rica existen muchas experiencias campesinas de conservación e integración de bosques a la economía local. La Asociación para la Conservación de Bosques Comunitarios (Ascomafor) ubicada en la zona norte, es un ejemplo. Esta organización conserva y gestiona de manera sustentable bosques comunitarios ubicados en sus asentamientos campesinos. En la región existe alrededor de 4 mil hectáreas de bosques campesinos que pudieran ser apoyados en su gestión por un programa para enfrentar la deforestación y degradación de bosques. Uno de los principales problemas que enfrentan es la incertidumbre en la tenencia de la tierra así como sus límites.

Para el sector indígena costarricense son importantes las políticas públicas que fomenten la conservación de bosques así como su restauración en los territorios indígenas. Estas políticas así como cualquier mecanismo que se discuta —como actualmente sucede con REDD— no debe estar relacionado al comercio de carbono y debe permitir la planificación desde los mismos pueblos indígenas según lo disponen diversos convenios y declaraciones internacionales sobre sus derechos. Por lo tanto, cualquier política y mecanismo deben favorecer su autonomía por lo que desde las etapas iniciales de discusión debe participarse a los pueblos indígenas. Fonafifo ha mantenido contacto con un grupo de indígenas de diversos territorios que han participado en el proceso oficial. Un grupo, ligado a las asociaciones de desarrollo integral (un mecanismo de autogobierno impuesto por la cultura no indígena) ve con buenos ojos la llegada de dinero a los territorios indígenas pero, según comentarios que nos han hecho a Coecoceiba, REDD les alarma y ven que ha causado impactos negativos en otros países. Otro grupo que no está ligado a las asociaciones de desarrollo, participan en el proceso oficial porque lo ven como una oportunidad para fortalecer sus derechos y creen que REDD debe ser sinónimo de una propuesta elaborada por el país. También son conscientes de los impactos negativos que REDD ha tenido en el mundo.

La experiencia sobre PSA en territorios indígenas ha sido muy contradictoria. En los territorios Ngobe por ejemplo, se ha distribuido varios millones de dólares en PSA durante los últimos cinco años. Sin embargo y hasta el momento, no se conoce de ningún caso donde el uso de estos fondos haya servido para consolidar sus territorios dado que gran cantidad de tierra todavía está en manos de personas no indígenas. Lo anterior es de fundamental importancia pues hay territorios Ngobe donde más del sesenta por ciento de la tierra está en manos de ganaderos no indígenas que provocan deforestación. Por otro lado, al ser un programa gubernamental, el PSA negocia los contratos con las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI) adscritas al Consejo Nacional Indígena (Conai) que es una institución de carácter oficial encargada de manejar tanto los asuntos indígenas como su relación con las instituciones públicas. Aparte del impacto negativo en el derecho a la autonomía indígena, esta práctica ha favorecido que el dinero se reparta entre indígenas allegados y cercanos a quienes controlan la ADI en los diversos territo-



rios y que no exista un uso para el territorio de dichos fondos. El gobierno por su parte muestra como un logro del PSA la distribución de poco más de nueve millones de dólares entre todos los territorios indígenas del país. A pesar de que hay casos exitosos donde se ha hecho un uso planificado de estos recursos y/o se han repartido de manera equitativa, en muchos territorios estos dineros han generado tensiones ya que algunos grupos se han apropiado y administrado de manera subjetiva estos fondos, favoreciendo a las familias más cercanas a su entorno.

El sector ecologista costarricense coincide en la necesidad de contar con políticas públicas que apoyen la conservación de los bosques así como su restauración y recuperación. Del mismo modo, coincide con los sectores campesino e indígena en que estas políticas o mecanismos deben mantenerse fuera de los mercados. Para el sector ecologista éste es un tema de particular importancia ya que se señala al comercio de carbono como una falsa solución que permite a las empresas y corporaciones de países industrializados seguir emitiendo GEI, ignorar los compromisos de reducción a partir de la fuente y mantener las mismas estructuras productivas y los mismos niveles de consumismo y desperdicio de recursos que nos han llevado a la crisis climática y ambiental actual.

El país tiene un enorme potencial para la gestión sustentable de bosques y por lo tanto, evitar la deforestación y degradación de bosques. Sin embargo, existe visiones encontradas sobre el tema y cómo manejarlo. Por un lado, el gobierno y los sectores más conservadores incluyendo algunas instituciones relacionadas al sector forestal, buscan un mecanismo REDD fundamentado en la mercantilización del carbono y enfatizan la contabilidad del carbono y los inventarios. También apuntan al continuismo de las prácticas tradicionales de explotación maderera y buscar perpetuar las subvenciones al maderero basado en el uso de maquinaria pesada, uso intensivo de insumos y recursos financieros. De ahí la necesidad de incluir el tema del manejo sostenible del bosque como una de las actividades a subvencionar.

Por otro lado, una serie de sectores populares —campesinos, indígenas y ecologistas— reconocen la urgencia de políticas públicas que favorezcan la conservación y gestión comunitaria del bosque así como el evitar la degradación y deforestación de los mismos. Estos mecanismos deben basarse en políticas de Estado con visión a largo plazo más allá de mecanismos que se discutan en diversas coyunturas, deben basarse en el reconocimiento de los derechos colectivos históricos de comunidades locales y Pueblos Indígenas —acorde con la Convención en Diversidad Biológica—, trascender el Protocolo de Kioto y los mercados de carbono y arraigarse a los conceptos de justicia climática. Se considera que se deben promover políticas públicas a largo plazo construidas mediante procesos de discusión y elaboración de acuerdos en forma transparente para garantizar el respeto —y apropiación— por parte de los actores sociales involucrados.

La realidad de REDD. Si bien es cierto que en Costa Rica todavía no existe un acuerdo sobre REDD, ya el pueblo bribri —situado en el atlántico sur— sufre sus impactos. Miembros de la comunidad de Alto Durigna dentro del territorio Bribri han denunciado la implementación en sus territorios de REDD. Esta comunidad indígena, está alarmada por la intención del Fonafifo de aplicar ese mecanismo en unas mil hectáreas de bosques dentro de su territorio que además rodea dos sitios considerados sagrados por la cultura bribri.

El cerro Namaso y el valle de Surayo son dos lugares que para la cosmovisión bribri no deben de ser objeto de mercantilización: el cerro Namaso representa un lugar sagrado y está prohibido el ingreso de toda persona, mientras que el segundo sitio, el Surayo, representa la tierra sagrada donde Sibü, una de las divinidades de esta cosmovisión, “sembró la semilla y creó a los bribri y su cultura”. Filidencio Cubillo, un indígena bribri ha manifestado:



Los bosques de estas partes, no solamente son simples bosques sino son sitios sagrados para nuestro pueblo. Uno de ellos, el Surayo es el origen de la ceración, de la semilla. Fueron designados por el mismo Sibú para darle vida a su semilla. Lo mismo es el cerro Namasol. Es por esta razón que el mundo de afuera no entiende nuestra manera de ver, de sentir y de expresar nuestra espiritualidad . El mundo de afuera todo lo ve sólo por la plata, todo es mercancía para ellos. Así expresamos nuestro rechazo a este proyecto que pretende conservar entre comillas, parte de estos bosques; dicen que son mil hectáreas pero no sabemos cuanto será. Defenderemos estos bosques. Es la misma comunidad la que se manifiesta y no es gente de fuera que viene a calentarnos la cabeza.

Los bosques de estas partes, no solamente son simples bosques sino son sitios sagrados para nuestro pueblo. Uno de ellos, el Surayo es el origen de la ceración, de la semilla. Fueron designados por el mismo Sibú para darle vida a su semilla. Lo mismo es el cerro Namasol. Es por esta razón que el mundo de afuera no entiende nuestra manera de ver, de sentir y de expresar nuestra espiritualidad . El mundo de afuera todo lo ve sólo por la plata, todo es mercancía para ellos. Así expresamos nuestro rechazo a este proyecto que pretende conservar entre comillas, parte de estos bosques; dicen que son mil hectáreas pero no sabemos cuanto será. Defenderemos estos bosques. Es la misma comunidad la que se manifiesta y no es gente de fuera que viene a calentarnos la cabeza. No queremos que estas áreas se conserven como lo dice el blanco. Nos da alimento y ríos para beber y los bosques serán de las futuras generaciones. Así le han puesto precio a los lugares sagrados y nos preguntamos si el mundo de afuera le pone precio a sus lugares sagrados, a sus ermitas, a sus iglesias, a sus lugares santos como ellos los denominan para que le pongan precio a nuestros bosques y a nuestros sitios sagrados.



Foto: Prometeo Lucero

REDD en Colombia

Diego Rodríguez Panqueva

Censat Agua Viva

Colombia es uno de los países beneficiados por los recursos del Forest Carbon Partnership Fund y el programa UN-REDD+ destinados a la preparación del mecanismo REDD promovido por el actual gobierno y definido como la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y como parte de la política nacional de cambio climático³⁰.

Desde 2010 ante la Asamblea General de Naciones Unidas el presidente Juan Manuel Santos señaló que la biodiversidad es una de las mayores riquezas que el país puede ofrecer al mercado mundial, pues cuenta con el 20 por ciento de la oferta mundial de agua dulce y con el 50% de la diversidad biológica del planeta, respaldando así la iniciativa Redd y sobretodo enfocándose en esta propuesta como una iniciativa enmarcada en el mercado:

¡Queremos ser un país modelo para el mundo en el monitoreo de sus bosques, de sus emisiones de carbono y del estado de su biodiversidad!. Con las debidas compensaciones económicas, tenemos una inmensa capacidad para reducir la deforestación y plantar nuevos bosques” (Santos, 2010).

Iniciativa atractiva ante el hecho de que los bosques naturales ocupan entre el 50.7% (Igac, 2002) y 54% (Ideam, 2007) del territorio nacional cuya extensión es de 104 millones de hectáreas, siendo un 8.5% del territorio bosques fragmentados³¹ (Igac, 2002).

En estos territorios donde hay bosques, se da el contraste con el conflicto existente, el cual está presente en las causas de su deforestación como la ampliación de la frontera agropecuaria, entre ella la de los cultivos ilícitos, la creciente amenaza de la minería y el desarrollo de proyectos de infraestructura.

Financiamiento y preparación REDD en Colombia. Al ser REDD un mecanismo que tiene su nacimiento en un organismo multilateral como Naciones Unidas y que es impulsado principalmente desde el Banco Mundial, su preparación no puede entenderse únicamente como un proceso enmarcado en las acciones y política gubernamental de un gobierno, sino como todas las acciones que son promovidas desde estos órganos, lo que ha generado una alta expectativa financiera en torno al mecanismo y por consiguiente una significativa dinámica en aumento relacionada con esta estrategia.

En este sentido la preparación de REDD corresponde al desarrollo de la R-PP financiada por el FCPF y el programa UN-REDD: diferentes acciones de organizaciones que promueven el desarrollo de proyectos pilotos las cuales en su mayoría confluyeron en una iniciativa que se denominó Mesa Redd+ y todas aquellas acciones que se reflejan en el asedio de comunidades por parte de empresas y organizaciones que a través de esquemas contractuales apuntan a tener el control de los derechos sobre el carbono forestal de manera previa a la implementación del mecanismo.

En su mayoría este conjunto de acciones puede evidenciarse si observamos el financiamiento climático que se concentra en torno a REDD en el país. Participa el gobierno, la banca, organismos internacionales, el sector empresarial, ONG conservacionistas y organizaciones indígenas o afrodescendientes cuyo fin es el de establecer relaciones institucionales hacia la definición de una política, una adecuación institucional, un desarrollo de capacidades técnicas para el monitoreo



³⁰ El Conpes 3700 es un documento de política emitido por el Departamento Nacional de Planeación en el cual la estrategia REDD se denomina como: Estrategia Nacional para la Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo; y la Función de la Conservación, la Gestión Sostenible de los Bosques y el Aumento de las Reservas Forestales de Carbono en los Países en Desarrollo-ENREDD+.

³¹ Por bosques fragmentados se entienden las áreas de bosque con alta intervención humana, en las que se concentra la mayoría de cultivos ilícitos y en las que se ha perdido al menos un 40% de cobertura boscosa debido a la extracción de madera y seguramente un porcentaje de aún mayor de biodiversidad, todavía no calculado (IGAC, 2002).

de los proyectos REDD y la realización de proyectos piloto. Todo ello se configura en una compleja arquitectura promovida desde el grupo del Banco Mundial para la creación de todas las condiciones que den viabilidad y legitimidad al mercado de carbono forestal en el país.

Financiamiento climático a Redd en Colombia		
Proyecto	Financia o Apoya	Participante en Colombia
R-PP Preparación de REDD en Colombia	BM, FCPF, Programa UN-REDD	MAVDT Fondo para la Acción Ambiental WWF
Mesa REDD – tiene como objeto la publicación de: <i>Deforestación evitada: Una Guía REDD+ en Colombia</i>	BM (Banco Mundial)	USAID, Concejo Empresarial Colombiano de Desarrollo Sostenible, Fundación Natura, WWF, Conservación Internacional, Patrimonio Natural, Corporación Ecovera, Fondo para la Acción
Hacia la construcción de capacidades de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica sobre cambio climático y REDD	BM, FCPF	MAVDT, WWF, Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, Patrimonio Natural.
Capacidad institucional técnica y científica para soportar proyectos REDD	Fundación Gordon and Betty Moore	IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia) y Fundación Natura.
Mercado voluntario de carbono	BID, GEF (Global Environmental Facility)	Fundación Natura, MAVDT, La Bolsa de Valores de Colombia, Concejo empresarial Colombiano de Desarrollo Sostenible y Cámara de Comercio de Bogotá.
Proyecto piloto San Nicolás Agroforestry	BM, FCPF	Corporación Autónoma Regional del Río Negro-Nare
Programa BioRedd Proyectos piloto en Bajo Mira, Chigorodo y Costa Pacífica.	USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) a través de su programa MIDAS con comunidades en territorios colectivos indígenas y afrodescendientes.	
Programa Planet Banking —impulsa la participación de entidades financieras en los mercados de carbono.	BM; BID, PNUMA	Bancolombia
Seminarios sobre banca de desarrollo y cambio climático	BID, ALIDE	Bancoldex (Banco de Desarrollo Empresarial y Comercio exterior en Colombia)
Curso de alto nivel para el fortalecimiento de las capacidades en cambio climático y servicios ecosistémicos.	Alta Consejería de Gestión Ambiental de la Presidencia de la República de Colombia, Mesa REDD, UMNG, Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales (ASOCARS), Conservación Internacional, Fondo para la Acción ambiental, Fondo Patrimonio Natural.	
Siglas: ALIDE (Asociación Latinoamericana de Instituciones Financiera de Desarrollo); BID (Banco Interamericano de Desarrollo); FCPF (Forest Carbon Partnership Found); MAVDT (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial); PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente); UMNG (Universidad Militar Nueva Granada); WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza).		

Cuadro realizado por el autor

Este alto financiamiento que busca la promoción de REDD genera de la misma manera una alta expectativa de los beneficios financieros que puedan recibirse a través de este en los mercados de carbono. Esto repercute en un creciente número de actores interesados en los territorios de bosques que en su mayoría se encuentran en territorios de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, razón por la cual la dinámica de asedio y negociación con las comunidades para que éstas participen en el mecanismo REDD forma parte de la lógica geopolítica que se busca desplegar, producto de la concepción de los bosques como un capital natural y de los derechos de carbono como una nueva forma de propiedad que inserte definitivamente estos territorios en la lógica del capital.

REDD es muestra de la capacidad política y financiera de estas instancias al lograr crear en su totalidad un complejo mercado a nivel mundial que se institucionaliza a través de las políticas gubernamentales y es por ello que se posibilitan múltiples acciones simultáneas que definen sus condiciones.

Es por esta razón que desde 2009, momento en el cual inicia la preparación de las condiciones para el funcionamiento de REDD, exista un significativo aumento de los proyectos REDD existentes en el país pasando de 3 a 18 en 2010 identificados en el país y pronosticando un crecimiento continuo hasta 2015, año en el que se culminará la preparación del mecanismo y desde el cual se proyecta un significativo crecimiento de oferta de proyectos REDD.

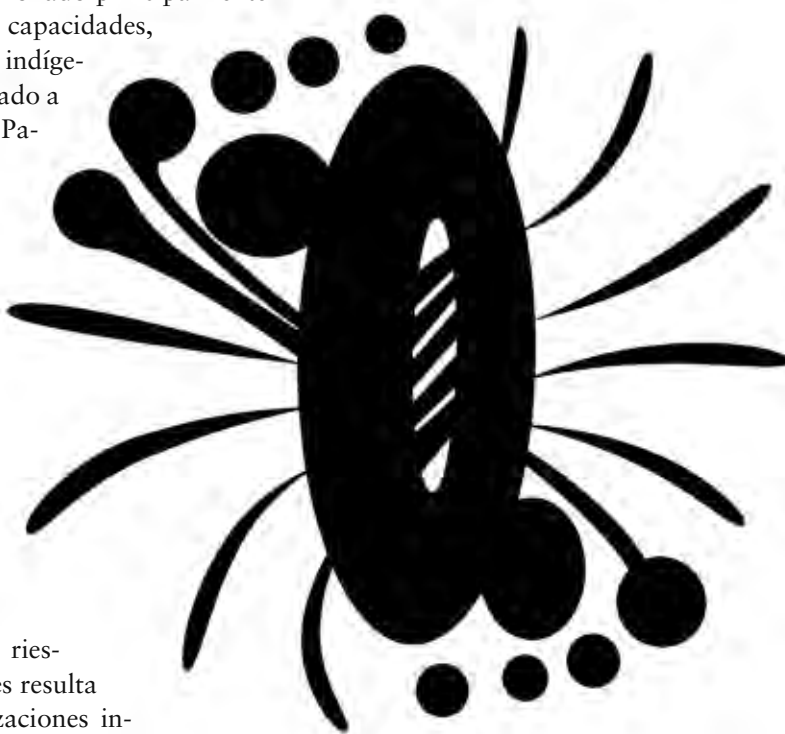
La R-PP. Es la propuesta de preparación para REDD y de todas las condiciones necesarias para su funcionamiento tales como su adecuación política a través de arreglos legislativos e institucionales, la preparación de condiciones técnicas que posibiliten el monitoreo de la deforestación y la identificación de actores relevantes para la estrategia e inicio de una interlocución orientada a la construcción colectiva de la propuesta.

En el marco de este proceso se han desarrollado principalmente talleres regionales para el fortalecimiento de capacidades, cambio climático y REDD con comunidades indígenas y afrodescendientes de los cuales han estado a cargo del Ministerio de Ambiente, la WWF, Patrimonio Natural, COICA y OPIAC.

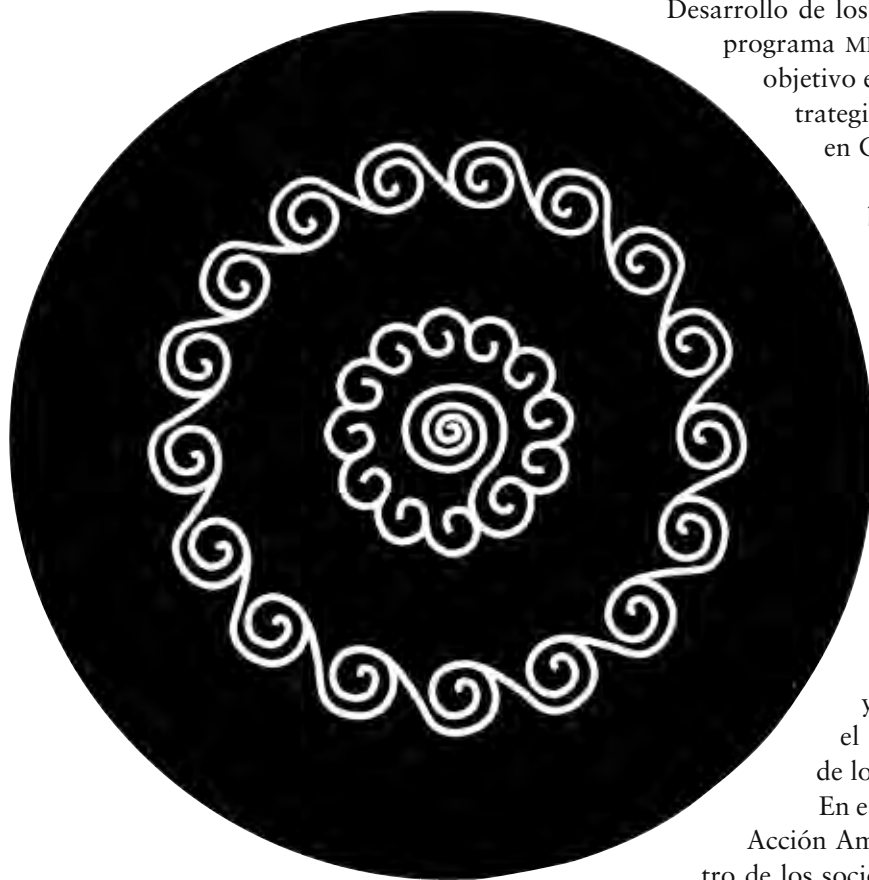
La participación de las organizaciones indígenas en los talleres obedece al hecho de que el Banco Mundial financia a COICA el “Programa para el Desarrollo de Capacidades para las Personas Dependientes de los Bosques” cuyo objetivo es aumentar la comprensión sobre REDD por parte de los pueblos indígenas y de los otros pobladores de los bosques; incentivar su participación en la preparación del mecanismo y en las negociaciones internacionales sobre el papel de REDD en el régimen climático post 2012.

Frente a las múltiples críticas a REDD y riesgos que puede representar a las comunidades resulta extraño ver la colaboración de las organizaciones indígenas amazónicas en los talleres enmarcados dentro de un proceso de consulta de la R-PP. Es necesario aclarar que estas organizaciones no asumen una posición de aceptación o rechazo de REDD, esto debido a que, para los pueblos indígenas, REDD ha significado una dinámica de asedio a través de la firma de contratos, acuerdos o mandatos realizados por actores que quieren tener el control sobre los derechos de carbono, los denominados vaqueiros del carbono.

A pesar de esta realidad los talleres desarrollados en el marco de la R-PP no pueden verse como puros procesos de formación, su fuerza radica en que a través de ellos el mecanismo adquiere mayor legitimidad en los territorios indígenas y afrodescendientes. Éstos son animados a la participación en un proceso de construcción participativa que en múltiples ocasiones en Colombia ha sido definido por funcionarios gubernamentales como una etapa que apunta a determinar la idoneidad o no del mecanismo para el país. Sin embargo el proceso de preparación definido desde el Banco Mundial en ningún momento contempla la pregunta a las comunidades de si éstas desean o no la participación en este esquema de mercado. Por el contrario los talleres se enmarcan dentro de un plan de consultas³² como uno de los requisitos a tener en cuenta por el Banco Mundial para brindar el financiamiento.



³² Sin embargo es necesaria la claridad que este tipo de consultas no corresponde a la figura de consulta previa que trata la Ley 21 de 1991.



Un mercado de carbono gourmet. En Colombia diferentes organizaciones constituyeron el primer escenario de articulación enfocado en REDD: la mesa REDD en la que participan WWF, Fundación Natura, The Nature Conservancy, Conservación Internacional Colombia (CI), la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) mediante su programa MIDAS y la Corporación Ecovera cuyo objetivo es el de “promover el desarrollo de estrategias, políticas, planes y proyectos REDD en Colombia”.

En su mayoría organizaciones “ambientales conservacionistas” que representan intereses corporativos y financieros y que dan mayor legitimidad al desarrollo de la estrategia al ser consideradas como la sociedad civil; tienen como prioridad enfocarse en la vinculación de REDD a mecanismos voluntarios de carbono y financiar la ampliación del portafolio de proyectos de carbono en el país. También respaldan mediante estudios técnicos y proyectos piloto el fomento de las falsas soluciones al cambio climático y diferentes megaproyectos mediante el desarrollo del componente ambiental de los mismos.

En esta perspectiva es que el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez se contempla dentro de los socios locales del Amazon Forest Carbon Partnership, iniciativa cuyo objetivo es “acercar el mecanismo REDD al mercado de créditos de carbono, lo que permitiría que países ricos paguen por la conservación de bosques y descuenten esa inversión del saldo de sus emisiones de carbono a la atmósfera”.

Y en esta misma perspectiva la Fundación Natura desarrolla un proyecto financiado por el BID por diez millones de dólares proporcionados por el Fondo Mundial Ambiental (Global Environmental Fund) y busca impulsar un mecanismo de mercado (Reducciones Verificadas de Emisiones-VERS) que facilite el comercio voluntario de reducción de emisiones de proyectos agrícolas, agroforestales y REDD+ en Colombia. Es apoyado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa Mercantil de Colombia, la Cámara de Comercio de Bogotá y el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (Cecodes). Este proyecto se desarrollará entre 2011 y 2015, fecha desde la cual el mecanismo REDD se espera sea aplicado. Este mercado beneficiará a las industrias extractivas y grandes empresas en Colombia, como lo refleja un estudio previo del mismo proyecto que las menciona como las principales interesadas en participar de un portafolio de proyectos de reducción voluntaria de emisiones evidenciando el lavado verde que se posibilitaría con este mercado en el país.

Por otro lado, sus promotores lo consideran como un mercado de carbono con una mayor calidad que otros mercados que solo centran su atención en la compensación de emisiones, este sería un mercado de carbono de alta calidad o en palabras del director de Fundación Natura “un mercado de carbono gourmet”. Pero ¿en qué se diferencia el carbono del carbono gourmet? El carbono

gourmet será aquel proveniente de proyectos que tengan co-beneficios además de la compensación de emisiones de carbono tales como actividades asociadas a la conservación de la biodiversidad, al fortalecimiento o desarrollo de las comunidades locales y a la preservación de su conocimiento o a la conservación de otros servicios ecosistémicos. Estos co-beneficios resultan atractivos para los inversionistas que podrán vender más fácilmente aquellos proyectos que se pretenden desarrollar con pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en territorios de titulación colectiva.

Proyectos piloto. En Colombia son numerosos los proyectos piloto en REDD como también numerosos los contratos que hasta hoy se han firmado con comunidades de vigencias de hasta treinta años a través de los cuales algunas empresas pretenden garantizar ser los únicos intermediarios entre las comunidades y los esquemas de mercado consiguiendo con ello significativos beneficios.

Pero debido a la alta expectativa en REDD muchos contratos o proyectos ofrecidos a las comunidades prometiéndoles ingresos financieros resultan ser falsos y a través de ellos se pretende engañar a las comunidades con fines delictivos, frente a tales acciones el gobierno ha alertado a nivel nacional para prevenir que más comunidades caigan en dichos engaños.

Proyecto San Nicolás. El proyecto San Nicolás es financiado por el Banco Mundial y desarrollado por Cornare (Corporación Autónoma del Río Negro y Nare) en el valle de San Nicolás (Antioquia), en el cual se encuentran las principales fuentes de agua que abastecen los ríos Negro y Nare, cuyas aguas alimentan varios embalses y represas de la región de Antioquia que aportan cerca de un 33% de la energía hidroeléctrica del país.

Este proyecto surge en un principio como proyecto forestal para MDL, varias de las áreas denominadas en el proyecto como No Kyoto son de bosque natural, mismas zonas en donde se encuentran la mayor parte de los nacimientos de agua y REDD surge en esta región como una propuesta de conservación que se complementa con el proyecto MDL existente en la zona y las actividades de conservación de las fuentes de agua requeridas para el abastecimiento de los embalses y represas.

REDD en Argentina

Eduardo Sánchez

Amigos de la Tierra Argentina

A principios de 2009 la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) a través de la Dirección de Cambio Climático comenzó a llevar a cabo una serie de actividades y procesos que tienen “como objetivo final la preparación de los instrumentos necesarios para que Argentina pueda consolidarse como un país con capacidades de establecer actividades y proyectos REDD”. Para ello realizó cursos destinados a personal con funciones directivas de coordinación, profesionales y técnicos de la SAyDS y de la Administración de Parques Nacionales. Realizó también talleres con las comunidades de pueblos originarios y por otra parte convocó a un número pequeño de ONG a una mesa de trabajo en el marco de la estrategia de preparación durante el año 2009.

La Dirección de Cambio Climático de la SAyDS, basándose en las premisas del Banco Mundial, presentó en enero de 2009 un documento borrador para planificar su estrategia para reducir las emisiones de carbono causadas por la deforestación y la degradación de los bosques. Durante los últimos meses del año,



convocó a algunas ONG a reuniones de consulta sobre la futura implementación de mecanismos REDD en Argentina.

Amigos de la Tierra fue convocada para participar de estas reuniones, conjuntamente con otras ONG con fuerte presencia en el país, como FARN, Greenpeace y Vida Silvestre Argentina para debatir y hacer aportes al Documento Borrador. Luego de varias conversaciones a lo interno de nuestra organización consideramos que participar de dichas reuniones nos permitiría poder plantear lo que vemos desde nuestra perspectiva y nuestro posicionamiento en contra de esta clase de propuestas que, lejos de beneficiar al ambiente y a los que lo habitamos, resulta otra vía directa para que los países del Norte continúen desarrollando un modelo económico injusto e insustentable para el resto del planeta.

Actualmente el plan para el desarrollo de la estrategia REDD en Argentina se encuentra sin avances debido a múltiples causas.

Aportes de las ONG. El objetivo de los comentarios elaborados fue dar a conocer a la Dirección de Cambio Climático de la SAYDS nuestra visión como organizaciones que trabajamos diariamente en la conservación de bosques y cambio climático. En esta línea, nos propusimos dar nuestra opinión tanto sobre cuestiones generales que hacen a la elaboración de este borrador de propuesta como así también sobre temas específicos en los que creemos necesario introducir modificaciones. Destacamos la importancia de que la Dirección de Cambio Climático haya elaborado un documento borrador sobre el cual trabajar y realizar aportes.

Acordamos conjuntamente tomar como punto de partida que existen algunas cuestiones que no están especificadas en los mecanismos en torno a REDD en todo el mundo como tampoco en la propuesta argentina, que resultan definitorios para que este tipo de proyectos sean eficaces y que nos distancian a la hora de hacer aportes y tomar postura al respecto. Con las organizaciones convocadas hemos debatido el documento y llegamos a algunos puntos de acuerdo para hacer señalamientos a SAYDS, pero por otra parte desde AT propusimos otras observaciones que no fueron incluidas por no contar con el consenso de todas las organizaciones. Las organizaciones hemos sido consultadas sobre dos borradores, uno elaborado en enero y el otro en junio de 2010 con lo cual hicimos aportes para cada uno de ellos.

Aportes al primer borrador

Contexto general del documento. Si bien este documento³³ analiza un universo temático muy amplio y de gran complejidad, presenta una redacción confusa que lo torna de difícil comprensión en muchos de sus aspectos. Observamos que varios de los datos allí plasmados se encuentran desactualizados y carentes de fundamentación (Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos que ya se han elaborado en las Provincias). Por otra parte, carece de un glosario que permita clarificar cuestiones técnicas y lleva al lector a serias confusiones al momento de la interpretación de su contenido. Tampoco existe una fuente bibliográfica que fundamente las afirmaciones allí vertidas. Otra cuestión que advertimos es la falta de un procedimiento metodológico para explicitar cuál es el criterio que se utilizó para definir cada una de las actividades estratégicas REDD que plantea este borrador. En este orden de ideas, entendemos arbitrario el establecimiento de las metas o porcentajes e indicadores de proyección respecto a la reducción de la deforestación; ello en virtud de que son bastante exigüos. Esta arbitrariedad no resulta ajena a la cuestión ya mencionada de que el documento carece de fundamentos bibliográficos o técnicos que lo sustenten.

La imprecisión en la que está redactado no permite comprender en su totalidad cuáles serían las posibles actividades financiadas con un fondo proveniente

³³ Documento producido por la Dirección de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable denominado: "R-PP Argentina. Borrador Enero. Estrategia en Cambio Climático y Bosques. Propuesta para el plan de preparación para un Mecanismo de Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación de Bosques-REDD". Argentina, enero de 2010, borrador.

de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección del Bosque Nativo (Ley 26.331) y cuáles por medio de potenciales sumas destinadas a un Mecanismo REDD. Finalmente, resta decir que este documento parece limitarse más a describir un estado de situación de la deforestación en Argentina que en el desarrollo, gestión e implementación de una estrategia real para la aplicación de un potencial mecanismo REDD.



Foto: Prometeo Lucero

71

Cuestiones específicas en las que no estamos de acuerdo. De la lectura de este documento han surgido tres cuestiones fundamentales que no compartimos en absoluto y sobre las que se sugiere un cambio como lo es el año base. Consideramos indispensable que no se tome como año base el 2007 ya que éste es considerado como el año de mayor deforestación en Argentina. Tomar este año como base tornaría ilusoria cualquier estrategia destinada a estos efectos ya que los porcentajes de deforestación siempre resultarían magros. En virtud de que se nos informó verbalmente que el motivo de la elección de este año residía en que debe elegirse un año específico comprendido entre los periodos 2004-2007³⁴, estimamos conveniente tomar como año base el 2006 o un promedio entre estos últimos cuatro.

1. Participación de la Sociedad Civil.

b.1 Reglamento Operativo de funcionamiento para la implementación.

Es inaceptable que un mecanismo de participación excluya de antemano la posibilidad de tener injerencia en la toma de decisiones y resulta ficticio pensar que la representación será plural cuando no existe igualdad de condiciones desde el principio³⁵.

³⁴ El 2004 está relacionado con el comienzo de la historia del Mecanismo REDD y el 2007 con su incorporación en el Plan de Acción de Bali.

³⁵ Pág. 9 del Borrador: "El mecanismo para manejar potenciales desacuerdos se establecen niveles de jerarquía de votos: 1 voto para SAYDS; 1 voto para las restantes instituciones gubernamentales; 1 voto para los representantes de organismos de la sociedad civil. El desacuerdo de estos tres votos jerárquicos se resolverá por mayoría".

b.2 Representantes de organismos de la sociedad civil.

Este documento no establece quiénes son los “organismos de la sociedad civil” a los que se refiere. Si bien este término en la jerga coloquial es entendido como organizaciones no gubernamentales, implícitamente se deduce de este documento que en este rubro estarían incluidos todos los actores que no pertenezcan al sector gubernamental. En este sentido, es de destacar que será imposible que haya una visión única al participar en este proceso, dada la heterogeneidad de intereses involucrados. Por ello, entendemos que es indispensable revisar este sistema de forma tal de permitir una verdadera representación.

2. Principio de Progresividad del Fondo de la Ley 26.331

Es inadmisibles que un documento de esta magnitud exprese en su texto “[...] la implementación progresiva del (fondo) se basa en la necesidad de establecer y desarrollar en primer término las capacidades necesarias para la implementación de la ley, a través de mecanismos de fiscalización, control e implementación de seguros, aplicando el principio de progresividad de la ley general del ambiente.[...]”. En efecto, el “Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos” es una obligación legal que surge de una norma actualmente vigente. Bajo ningún motivo puede aplicarse este principio general del ambiente. Acá el objetivo ambiental es la conservación de los bosques mediante el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), no la integración efectiva del fondo. El fondo es una de las fundamentales herramientas para que el OTBN tenga lugar, y de la mano de éste, la conservación. En este sentido, la gradualidad nunca puede



hacer referencia a un presupuesto asignado por una ley de la Nación, a menos que se lo disponga expresamente. En efecto, si una ley dispone que determinados fondos deban estar disponibles para el cumplimiento de un objetivo, allí no corresponde la gradualidad. Podría corresponder para el logro de los objetivos que ese fondo financie pero no para la conformación del fondo. Si ese hubiera sido el caso, la Ley de Bosques habría planteado una integración escalonada del Fondo, situación que no ocurrió. Ésta es una muy mala señal política hacia los gobiernos provinciales que se encuentran realizando los Ordenamientos Territoriales de sus Bosques Nativos, puesto que el 30% de esos fondos van dirigidos a mejorar los mecanismos de control y asistir técnicamente a campesinos e indígenas; y también hacia los titulares de bosques nativos que deben cobrar el 70% restante como compensación por conservarlos. Es importante mencionar que sin una correcta conformación y distribución de los fondos de la Ley de Bosques, la aplicación de fondos REDD podría no resultar efectiva para reducir la deforestación en tanto que haría aún más compleja la plena aplicación de la norma. En ese sentido es fundamental que la Secretaría de Ambiente se comprometa a trabajar en pos de que el Congreso Nacional incorpore en la próxima Ley de Presupuesto la partida correspondiente a esos fondos en forma completa, y que el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) reglamente en forma urgente la distribución de los mismos.

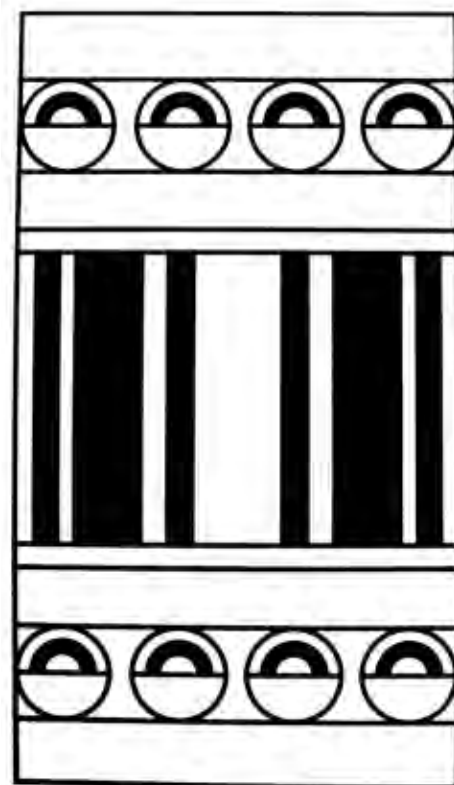
Aportes al segundo borrador

Contexto general del documento. A diferencia del borrador presentado en enero de este año, consideramos que esta versión es un poco más clara y está más ordenada. Sin embargo, advertimos que el documento aún carece de un procedimiento metodológico para explicitar cuál es el criterio que se utilizó para definir cada una de las actividades estratégicas REDD que plantea. Por otra parte, sorprende la ausencia de metas o porcentajes e indicadores de proyección respecto a la reducción de la deforestación. El documento no permite comprender en su totalidad cuáles serían las posibles actividades financiadas con un fondo proveniente de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley 26.331) y cuáles por medio de potenciales sumas destinadas a un mecanismo REDD.

Año de base. Como ya ha sido señalado consideramos indispensable que no se tome al 2007 año de base.

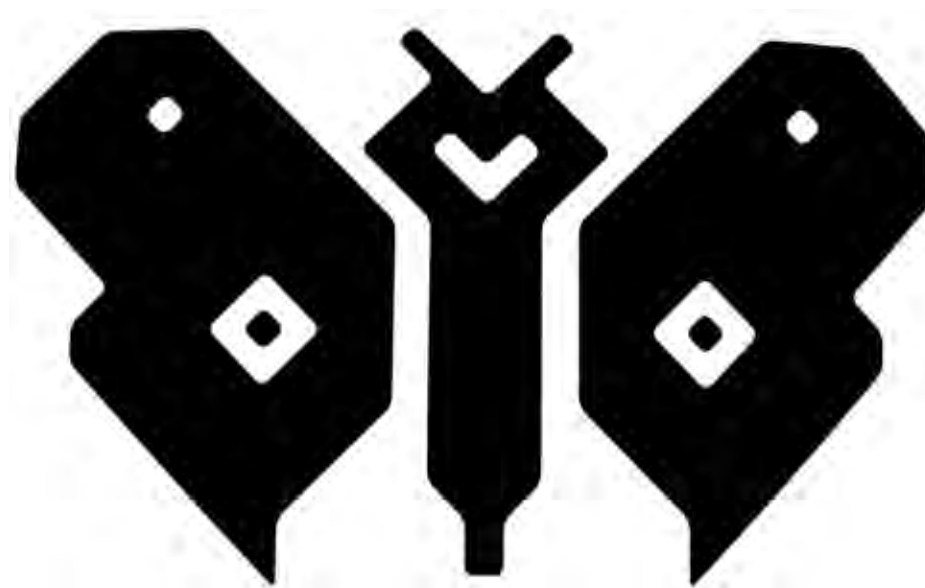
Participación de la Sociedad Civil. Resulta llamativa la ausencia de comunidades y organizaciones campesinas en las consultas y la bajísima representatividad de las comunidades y organizaciones indígenas. En ese sentido, y teniendo en cuenta que la mayoría de los bosques nativos de nuestro país se encuentran ocupados o son utilizados por comunidades campesinas e indígenas, consideramos fundamental facilitar su participación en el proceso de consultas sobre la Estrategia REDD y su implementación. Esto es aún más relevante si tenemos en cuenta la falta de titularización de la mayoría de los bosques nativos que históricamente utilizan y los problemas que podrían generarse al aplicarse los fondos REDD.

Fondos de la Ley 26.331. La falta de implementación de los fondos de la Ley de Bosques es una muy mala señal política hacia los gobiernos provinciales que se encuentran realizando los Ordenamientos Territoriales de sus Bosques Nativos, puesto que el 30% de esos fondos van dirigidos a mejorar los mecanismos de control y asistir técnicamente a campesinos e indígenas; y también hacia los titulares de bosques nativos que deben cobrar el 70% restante como compensación por conservarlos. Entendemos que, sin una correcta conformación y distribución de



Consideramos que la implementación en nuestro país de propuestas REDD resulta riesgosa y delicada ya que lo más importante y primordial a nivel ecológico para detener la deforestación en nuestro país es aplicación de la Ley de Bosques como fue concebida y la conformación y distribución de los fondos contemplados en la misma. En tal sentido el Ordenamiento Territorial está pendiente en varias provincias y al día de hoy el presupuesto destinado para la Ley ha sido ejecutado parcialmente.

los fondos de la Ley de Bosques, la aplicación de fondos REDD podría no resultar efectiva para reducir la deforestación en tanto que haría aún más compleja la plena aplicación de la norma. En ese sentido es fundamental que la Secretaría de Ambiente se comprometa a trabajar en pos de que el Congreso Nacional incorpore en la próxima Ley de Presupuestos la partida correspondiente a esos fondos en forma completa, y que el Consejo Federal de Medio Ambiente reglamente en forma urgente la distribución de los mismos.



Posicionamientos de AT Argentina. Como mencionáramos anteriormente hubo temas y puntos de los borradores en los cuales no hubo acuerdo con las demás organizaciones con las cuales trabajamos conjuntamente. A continuación transcribimos la posición de AT Argentina sobre algunos apartados del Borrador:

La no inclusión de plantaciones forestales en mecanismos REDD. El documento borrador no especifica si las plantaciones forestales serán o no consideradas dentro de los mecanismos REDD. Sabido es que actualmente el Protocolo de Kyoto considera a las plantaciones industriales de árboles como bosques. Consideramos que esto es un error grave. Las plantaciones no son bosques; no son ecosistemas diversos sino vacíos de biodiversidad. Esta definición pone en peligro a pueblos indígenas, a las personas dependientes de los bosques, a los campesinos, a los pequeños productores y a la biodiversidad, además de exacerbar el cambio climático. Las plantaciones industriales de árboles afectan el clima, además de que bosques y prados tropicales almacenan apreciablemente más carbón³⁶. En todos los casos, la masiva conversión de bosques en plantaciones de árboles no sería considerada como deforestación porque —de acuerdo con la definición— el área aún estaría cubierta por (un tipo distinto de) “bosque”.

Que la propuesta REDD no funcione como un mecanismo de mercado. La financiación de REDD a través del comercio de carbono podría aumentar las emisiones de las fuentes de combustible fósil y los créditos REDD podrían inundar los mercados de carbono existentes con las graves consecuencias que eso implica. Al mismo tiempo, los mercados de carbono son complejos y susceptibles a las presiones de las corporaciones. Resulta inadmisibles que los proyectos REDD queden sujetos a la volatilidad de los mercados, con la posible consecuencia de la pérdida de soberanía nacional sobre los recursos naturales.

³⁶ Tomado de la declaración de la Coalición Mundial por los Bosques, La Sociedad del Medio Ambiente Silvestre, El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, Proyecto por la Justicia Ecológica Mundial, y La Vía Campesina, sobre la definición de Bosques.

Existen otras fuentes posibles de financiamiento que no dependen de las contribuciones voluntarias del Norte ni de los mercados de carbono. Éstas incluyen, por ejemplo, el impuesto al consumo de combustibles fósiles y /o los dineros que se liberan en los países desarrollados al eliminar los subsidios a la energía de los combustibles fósiles. Éstas serían opciones que realmente implicarían ganancias, ya que también significan en sí mismas una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero³⁷.

Participación de la Sociedad Civil. Desde AT Argentina creemos que la metodología de convocatoria propuesta no es casual sino que es parte de la estrategia de concentrar y acotar la consulta a un escaso número de participantes, movimientos y organizaciones de manera tal que la estrategia se desarrolle sin sobresaltos u oposiciones. Entendemos que fueron pocos encuentros, con grupos acotados y sin periodicidad ya que ante nuestro pedido de informes sobre la realización de los talleres nos respondieron que de eso se había encargado la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales y hasta el presente no pudimos acceder esa información.

Conclusión. Consideramos que la implementación en nuestro país de propuestas REDD resulta riesgosa y delicada ya que lo más importante y primordial a nivel ecológico para detener la deforestación en nuestro país es aplicación de la Ley de Bosques como fue concebida y la conformación y distribución de los fondos contemplados en la misma. En tal sentido el Ordenamiento Territorial está pendiente en varias provincias y al día de hoy el presupuesto destinado para la Ley ha sido ejecutado parcialmente. Antes de recibir los fondos REDD resulta fundamental que el Congreso de la Nación complete la partida correspondiente a los fondos de la Ley de Bosques y que el Consejo Federal de Medio Ambiente reglamente el mecanismo de distribución de los mismos. Queremos destacar que no son precisas cuáles serían las posibles actividades financiadas con un fondo proveniente de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección del Bosque Nativo (Ley 26.331) y por otro cuáles por medio de potenciales sumas destinadas a un Mecanismo REDD por lo que la aplicación de fondos REDD haría aún más compleja la plena aplicación de la Ley y no sería efectiva para reducir la deforestación.

AT Argentina creemos que la metodología de convocatoria propuesta no es casual sino que es parte de la estrategia de concentrar y acotar la consulta a un escaso número de participantes, movimientos y organizaciones de manera tal que la estrategia se desarrolle sin sobresaltos u oposiciones.

75

³⁷ Tomado de "Mitos en torno a REDD: una evaluación crítica de los mecanismos propuestos para reducir las emisiones generadas por la deforestación y la degradación en los países en desarrollo", documento elaborado por Amigos de la Tierra Internacional.



Foto: Jerónimo Palomares

REDD no BRASIL y el Carbono Falsificado

Lucia Ortiz y Clarissa Trois Abreu

Amigos da Terra Brasil

Contexto Nacional: articulação da sociedade civil frente a mercantilização da natureza nas Políticas de Clima e Florestas no Brasil. Até 2009, não havia surgindo ainda um movimento que se opusesse ao REDD no Brasil como sujeito político. Entretanto no final de 2009 surge a iniciativa da Carta de Belém congregando diversos movimentos brasileiros críticos aos instrumentos de mercados como REDD. Nessa época, a posição histórica do Brasil na convenção do clima era contrária a inclusão de florestas nos mecanismos de compensação (*offsets*) e mercados de carbono. Entretanto, essa questão estava em disputa, sendo enfraquecida pelos lobby dos governos dos estados da Amazônia Legal.

76



Foto: Jerônimo Palomares

A partir de então, com vistas à consolidação das vias de mercado como gestor da vida num novo acordo e consenso global sobre Economia Verde, que se pretende impor na Conferencia Mundial Rio+20, em junho de 2012 no Rio de Janeiro, o Brasil tem acelerado a construção e implementação de políticas públicas voltadas a assegurar os direitos do mercado sobre a natureza.

Organizações articuladoras e apoiadoras da iniciativa da Carta de Belém se dirigiram mais uma vez ao governo brasileiro e ao âmbito das negociações do clima em junho de 2011 em Bonn com a Carta do Grupo de Belém para expressar seu rechaço às diversas possibilidades de expansão dos mercados de carbono no Acordo de Cancun, inclusive no mecanismo de REDD. Foram ouvidas também em quatro audiências públicas no Senado Federal organizadas pela Comissão Mis-

ta sobre Rio+20, onde os chamados “instrumentos da economia verde”, como REDD, MDL e PSA e sua relação com o Código Florestal estavam em debate[3].

Atualmente, uma série de iniciativas governamentais, nacionais e estaduais, como as leis, medidas provisórias e projetos de leis listados a seguir, têm avançado na intenção de oferecer o ajuste estrutural necessário ao arcabouço das políticas ambientais para assegurar mercados de compensação da poluição atmosférica ou da degradação das florestas e territórios, seja pelos países mais poluidores e historicamente responsáveis pela desestabilização do clima, como por corporações, grandes proprietários e estados nacionais responsáveis pelo desmatamento ou degradação ambiental:

- * Lei Nº 12.187, de 29/12/2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima e instituiu Mercado Brasileiro de Redução de Emissões – MBRE, a ser operacionalizado em bolsas de mercadorias e futuros, bolsas de valores e entidades de balcão organizado, autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários-CVM, onde se dará a negociação de títulos mobiliários representativos de emissões de gases de efeito estufa evitadas certificadas;
- * MP da “Bolsa Verde”, de 14/09/2011, que institui o Programa de Apoio à Conservação Ambiental, com pagamento trimestral no valor de R\$ 300,00, pelo prazo de até dois anos, para as famílias em situação de extrema pobreza que realizarem atividades de preservação da natureza no meio rural;
- * PL 195/2011 de REDD, que institui o sistema nacional de redução de emissões por desmatamento e degradação, conservação, manejo florestal sustentável, manutenção e aumento dos estoques de carbono florestal (REDD+);
- * PL 792/2007 sobre Pagamentos por Serviços Ambientais
- * as propostas de alteração do Código Florestal (Lei Federal n: 4.771/65) aprovadas no Senado Federal e aguardando sanção ou veto presidencial para entrada em vigor.
- * Planos Nacionais e estaduais sobre mudanças climáticas e PSA, como a Lei 3.135 de 05/06/2007 que instituiu a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas e a Lei No 2.308, de 22 /10/ 2010 que cria o Sistema Estadual de Incentivos a Serviços Ambientais —SISA, o Programa de Incentivos por Serviços Ambientais— ISA Carbono e demais Programas de Serviços Ambientais e Produtos Ecosistêmicos do Estado do Acre;
- * Assinatura em 20/10/2011 de acordo governamental entre os Ministérios do Meio Ambiente e Planejamento para viabilizar projetos de PPPs (Parcerias Público Privadas) em Unidades de Conservação Nacionais[5]

O PL 195 nacional de REDD já foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, foi dispensado do trâmite na Comissão de Relações Exteriores e de discussão em Plenário, e tramita agora, por influência da ação articulada do Grupo de Belém, na Comissão de Agricultura, que prevê audiências públicas e um maior espaço e tempo hábil para discussão com a sociedade.

Mas tanto o PL de REDD com os de PSA tem como base fundamental as alterações propostas pelo setor ruralista para o Código Florestal que, além de reduzir drasticamente as áreas obrigatórias para proteção florestal (como Áreas de Proteção Permanente —APPs e Reserva Legal— RL) e liberarem territórios para os mercados de carbono ou para o pagamento por serviços ambientais, também dão precedente a criação de Certificados de Cota de Reserva Ambiental (CRAs), ou títulos de compensação de áreas degradadas e são recuperadas em outras regiões, inclusive outros biomas ou bacias hidrográficas (Capítulo 11).

Na mesma lógica de criação de papéis para o mercado de compensações das emissões ou degradação florestal, as florestas e os territórios passam a ser “o

Ao contrário dos pagamentos por serviços ambientais, e da estruturação de um novo mercado “verde” através de mais privatização de bens comuns, apontamos como alternativas reais o fortalecimento e empoderamento dos povos, comunidades e populações indígenas, agroextrativistas, camponesas e de agricultores familiares na gestão e manejo de seus territórios e de suas tecnologias sociais em construção que, pragmaticamente, é o que vem garantindo não apenas a sobrevivência de seu modo de vida, como a conservação e a recuperação dos ecossistemas e a soberania alimentar dos povos.

lastro”, ou seja, a garantia que autoriza a emissão de novos títulos de propriedade, os chamados “títulos verdes”. Estes podem representar tanto a propriedade sobre o gás carbônico evitado, ou CREDD —Certidão de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação, previsto no PL de REDD, ou sobre a imobilização de 1 ha de floresta nativa, através da CCRA, prevista no novo Código Florestal como passível de compra por quem desmatou, ou ainda de uma série de produtos e componentes da biodiversidade, inclusive a água e o serviços de polinização e beleza cênica, previstos nos PLs de PSA.

A compra e venda destes títulos passará a ser realizada na Bolsa de Valores por agentes privados, que pagam pelos chamados “serviços” ambientais para os detentores das florestas nos territórios: os (as) agricultores (as), povos indígenas e comunidades tradicionais, em troca da emissão do título em seu nome e de obrigações contratuais que dizem respeito a alterações na forma vida e manejo dos territórios.

Esta engenharia legal faz com que os povos, comunidades tradicionais e os camponeses, passem a ser identificados tão somente como “fornecedores de serviços ambientais. A assinatura de contratos de PSA, do modo como vem sendo tratado no Congresso Nacional, faz com que o “fornecedor do serviço” ceda seus direitos de uso sobre a área contratada, autorizando o LIVRE ACESSO ao comprador-pagador por no mínimo 15 anos (servidão ambiental). Em troca do pagamento é autorizada a emissão de um título ao comprador-pagador do “serviço ambiental”, para ser negociado na bolsa de valores. Assim, é dada a largada para a inserção do ar e das florestas no mercado financeiro, bem como, a apropriação dos territórios para as mãos do agronegócio e dos agentes de mercado.

Em contra ponto, as organizações reunidas na articulação do Grupo de Belém, apontam como alternativas o fortalecimento e a implementação de políticas públicas estruturantes que incentivem os modos de vida e de produção dos setores que historicamente tem sido responsáveis pela conservação, produção e uso sustentável dos bens comuns, as quais devem passar:

- § Por políticas públicas que promovam uma Reforma Agrária Sustentável, associada à política agrícola;
- § Pelo reconhecimento que a produção de alimentos saudáveis e sem agrotóxicos vem de um modo de produção específico, dos territórios da agricultura familiar e camponesa, devendo a política conferir valor real aos produtos oriundos da agricultura familiar e do extrativismo, como já é feito, embora que ainda modestamente, através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Para além da aquisição de alimentos e sementes, é necessário apoio efetivo à produção e comercialização da produção dos territórios.
- § Pela estruturação de pesquisa participativa e assistência técnica qualificada para recuperar e melhorar as técnicas, a qualidade e a quantidade da produção e do extrativismo; que reconhecem a agroecologia praticada pela agricultura familiar e camponesa não como um nicho de produção e de mercado, mas como caminho de futuro para a agricultura e alimentação;
- § Por políticas que considerem os territórios como um sistema integrado, um modo de produção de vida, que reconheçam a posse definitiva das comunidades e povos sobre seus territórios; que garantam o acesso aos serviços essenciais de educação, saúde, moradia, cultura e serviços públicos.

Ao contrário dos pagamentos por serviços ambientais, e da estruturação de um novo mercado “verde” através de mais privatização de bens comuns, apontamos como alternativas reais o fortalecimento e empoderamento dos povos, comunidades e populações indígenas, agroextrativistas, camponesas e de agricultores fa-



miliares na gestão e manejo de seus territórios e de suas tecnologias sociais em construção que, pragmaticamente, é o que vem garantindo não apenas a sobrevivência de seu modo de vida, como a conservação e a recuperação dos ecossistemas e a soberania alimentar dos povos.

Estratégia de resistência e mobilização dos Amigos da Terra Brasil. A atuação dos Amigos da Terra Brasil na influência das políticas públicas nacionais, bem como nas posições brasileiras aos processos internacionais, se dá através da atuação estratégica na coordenação de redes nacionais da sociedade civil como a Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais (RB) e a Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA), no fortalecimento das alianças estratégicas com a Via Campesina e a Marcha Mundial de Mulheres desde o nível local até o nacional e internacional, e no trabalho coletivo com organizações parceiras, como a FASE e a Terra de Direitos.

A partir de uma estratégia comum com estas organizações parceiras, em 2009 estabeleceu-se com a articulação do Grupo da Carta de Belém, um processo de construção de capacidades, reflexão política e resistência à mudança de rumo das políticas domésticas para o meio ambiente e as posições internacionais do Brasil com relação às convenções de clima e biodiversidade.

Este coletivo, ampliado a organizações e movimentos aliados na América Latina, tem sido o espaço para a articulação de um campo crítico à Economia Verde e ao processo da Conferência Rio+20 e tem prevista uma série de atividades e intervenções tendo como gancho o contexto internacional da COP17 do clima em Durban, a Rio+20 no Rio de Janeiro e a COP10 da CDB na Índia.

O Brasil tem peso fundamental na formulação e implementação das políticas multilaterais e nacionais para o clima e florestas. A captura corporativa, tanto na ONU como nos governos nacionais tem pavimentado o caminho para um ajuste estrutural neoliberal das políticas ambientais para a mercantilização e financeirização da natureza, em detrimento do fortalecimento das políticas baseadas em direitos conquistados e na construção de novos direitos como os da Natureza para a proteção e compartilhamento dos bens comuns.

Seguimento das ações do grupo CARTA DE BELÉM 2011/2012. As mais de 30 organizações e movimentos sociais do Brasil, reunidas no Grupo Carta de Belém, lançaram no dia 19 de março de 2012 o documento “Quem ganha e quem perde com o Redd e Pagamento por Serviços Ambientais?” (http://terradedireitos.org.br/wp-content/uploads/2012/03/encarte_publicação-final-1.pdf). Abordando os mecanismos que estão sendo regulamentados no país que podem gerar a mercantilização generalizada da natureza e tornar os agricultores familiares, povos indígenas e de comunidades tradicionais meros “fornecedores ou prestadores de serviços ambientais” para as grandes empresas poluidoras e agentes do desmatamento, como o agronegócio. A iniciativa é resultado do seminário “REDD+ e

As mais de 30 organizações e movimentos sociais do Brasil, reunidas no Grupo Carta de Belém, lançaram no dia 19 de março de 2012 o documento “Quem ganha e quem perde com o Redd e Pagamento por Serviços Ambientais?”. Abordando os mecanismos que estão sendo regulamentados no país que podem gerar a mercantilização generalizada da natureza e tornar os agricultores familiares, povos indígenas e de comunidades tradicionais meros “fornecedores ou prestadores de serviços ambientais” para as grandes empresas poluidoras e agentes do desmatamento, como o agronegócio.



Em setembro de 2011, os líderes da população Mundurucu assinaram um contrato com uma empresa irlandesa, transferindo os direitos aos créditos de carbono da reserva por 120 milhões de dólares. Pelo documento, a empresa ganharia acesso restrito às suas terras e os índios ficariam impedidos de dispor de seu uso sem a autorização prévia da compradora. O contrato entre a Organização do Povo Mundurucu e a Celestial Green foi assinado sem a presença de representante da Funai responsável por defender os direitos dos índios e, portanto, por acompanhar negociações comerciais que possam colocá-los em risco.

Pagamento por Serviços Ambientais x Bens Comuns”, realizado em novembro de 2011.

Segundo o estudo, há um processo de reformas legais e políticas que tramita em ritmo acelerado com a intenção de adequar ou legalizar o avanço do capital sobre terras e recursos no Brasil. Exemplo prático desse movimento, de acordo com a publicação, é o novo Código Florestal e a Política Nacional sobre Mudança Climática. “Aquele que compra o “título verde” não só fica autorizado a continuar produzindo degradação e poluição, como lucra com a especulação destes novos ativos florestais no mercado financeiro”, afirma um trecho do documento.

O Carbono Brasileiro Falsificado. As leis brasileiras ainda não foram modificadas, mas o carbono já é negociado, quando se descobriu que empresas estavam negociando diretamente com tribos indígenas, sem que o órgão responsável pela gestão dos territórios e assuntos indígenas no Brasil a FUNAI (Fundação Nacional do Índio) tomasse conhecimento.

Em setembro de 2011, os líderes da população Mundurucu assinaram um contrato com uma empresa irlandesa, transferindo os direitos aos créditos de carbono da reserva por 120 milhões de dólares. Pelo documento, a empresa ganharia acesso restrito às suas terras e os índios ficariam impedidos de dispor de seu uso sem a autorização prévia da compradora. O contrato entre a Organização do Povo Mundurucu e a Celestial Green foi assinado sem a presença de representante da Funai responsável por defender os direitos dos índios e, portanto, por acompanhar negociações comerciais que possam colocá-los em risco.

A Funai, no entanto, tomou conhecimento da transação no início de 2012, quando encaminhou o contrato à apreciação da Advocacia Geral da União (AGU). Em seu parecer, a AGU, considera o contrato ilegal. Tese que vale para todos os contratos de crédito de carbono em terra indígena no Brasil. O parecer, ainda não conclusivo, deixa em aberto a possibilidade de que outros órgãos da União encontrem meios de regularizar futuros contratos com os indígenas. O presidente da Funai, Márcio Meira, é contra as negociações atuais, como a que envolveu os Mundurucu. Mas defende que o comércio de crédito carbono funcione como meio de remunerar os indígenas pela preservação das florestas depois que o mercado for regulamentado no país (<http://apublica.org/2012/03/terra-e-dos-indios-carbono-e-de-quem/3/>). Afirma-se que a Celestial Green ofereceu 4 milhões de dólares por ano, ao longo de 30 anos, pelos créditos de carbono dos 2,3 milhões de hectares da terra indígena – num total máximo de US\$120 milhões. Em troca, teria todos os direitos sobre os créditos de carbono e mais “outros certificados e benefícios” a serem obtidos “com a biodiversidade”.

Vários contratos semelhantes já surgiram, cerca de 30 contratos, e o que preocupa é que têm base jurídica. A Celestial Green é a empresa que mais fez contratos com indígenas no Brasil, são mais de dez. Entretanto, os contratos com indígenas no Brasil não têm validade jurídica. No Brasil as terras indígenas são propriedade do Estado Brasileiro, e assim os indígenas têm usufruto exclusivo. A Celestial Green é praticamente desconhecida no Brasil, tem sua sede em Dublin, na Irlanda e se declara proprietária dos direitos aos créditos de carbono de 20 milhões de hectares na Amazônia Brasileira – o que equivale aos territórios da Suíça e da Áustria somados. Juntos, os 17 projetos da empresa na região teriam potencial para gerar mais de 6 bilhões de toneladas de créditos de carbono, segundo a própria empresa (<http://apublica.org/2012/03/terra-e-dos-indios-carbono-e-de-quem/3/>). Apesar da pressa em modificar a legislação do país, o comércio de créditos de carbono florestal ainda não está regulamentado pela legislação brasileira e não é possível ser feito em terras indígenas. Por conta disso, os créditos

de carbono referentes a florestas podem apenas ser negociados em um mercado voluntário, e são comprados por empresas como a Landrover, o HSBC, a Google e a Dupont. Ao que tudo indica na corrida aos nos títulos ambientais, veremos uma enxurrada de falsos créditos de carbono, falsos contratos e promessas de recursos que nunca virão, incentivando a corrupção e a prática de negociações ilícitas. Quando se trata de emissão de carbono, ou melhor, de emissão de carbono evitada, verifica-se que é praticamente impossível controlar esse mecanismo, uma vez que trata de matéria invisível, presente e inerente a todas as ações humanas.

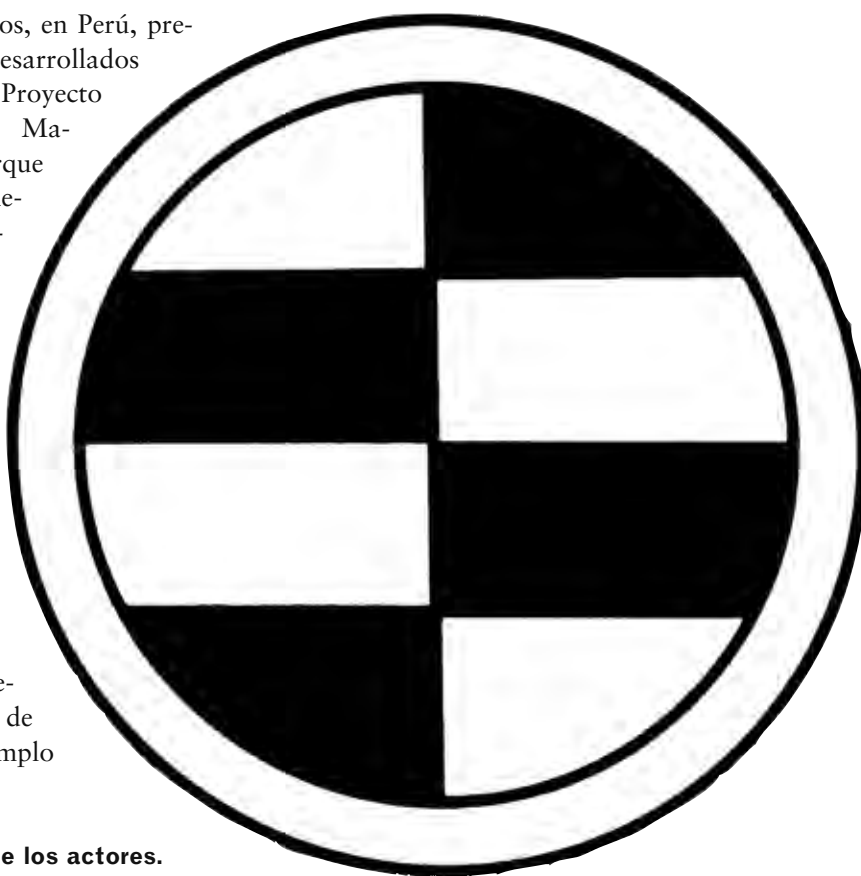
Proyecto REDD en Madre de Dios, Perú

Sebastian Valdomir

REDES-Amigos de la Tierra Uruguay

81

La región amazónica de Madre de Dios, en Perú, presenta varios proyectos de REDD desarrollados en los últimos años. Particularmente el Proyecto “Madre de Dios Amazon REDD Project Maderacre —Maderya”, es llamativo porque muestra desde su concepción y plan de negocios algunas características que son intrínsecas a la perspectiva de REDD como un mecanismo de mercantilización de la naturaleza. Esta iniciativa de negocios se presenta como un proyecto de freno a la deforestación basada en la comercialización de certificados de reducción de emisiones generados a partir de dos concesiones forestales otorgadas por el gobierno peruano a empresas madereras. Las transacciones de los bonos de carbono las realiza un agente de venta que se presenta a sí mismo como una ONG emplazada en Montevideo, registrada en diversas plataformas de compra y venta de carbono, como por ejemplo la Chicago Climate Exchange.



Ubicación del proyecto y descripción de los actores.

“Madre de Dios Amazon REDD Project” funciona en dos concesiones forestales denominadas “Maderacre” de la empresa Maderera Río Acre y “Maderya” de la empresa Maderera Río Yaverija. Están emplazadas en el distrito de Iñapari, provincia Tahuamanu, del departamento Madre de Dios, en la Amazonía peruana, próximo a las fronteras con Brasil y Bolivia.

Las empresas Maderera Río Acre SAC³⁸ y Maderera Río Yaverija SAC recibieron las concesiones forestales para aprovechamiento forestal por parte del estado peruano a través del Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) el 31 de mayo del año 2002 y tienen una duración de 40 años renovables. Maderacre tiene 49 mil 736 hectáreas y Maderya tiene 49 mil 556 hectáreas. El contrato de cada concesión es idéntico.

En el 2008, las empresas formaron un consorcio y de hecho son gerenciadas por la misma persona. Según la información institucional disponible en su sitio de internet, el Grupo Maderacre “está compuesto por 19 socios, todos pobladores

³⁸ www.maderacre.com

de Iñapari, dedicados históricamente a actividades relacionadas con el bosque y su entorno”³⁹. Por su parte, la información sobre Maderya en el documento general del proyecto “Madre de Dios Amazon REDD” indica que es propiedad de un grupo inversor chino⁴⁰.

El límite máximo que dispone la Ley Forestal 27308 en Perú para las concesiones forestales a actores privados es de 50 mil hectáreas. Es decir entonces que el mismo consorcio empresarial controla y explota 99 mil 292 hectáreas, que son íntegramente las que corresponden con el proyecto “Madre de Dios Amazon REDD”. En lo que refiere a los productos forestales, uno de sus clientes principales es la empresa NGRS del Reino Unido, que es comercializadora de tablillas de caoba⁴¹.

La cartografía disponible en el sitio de internet de la Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluyentes (Fenamad⁴²), principal organización de las comunidades indígenas de la región, indica que todas las regiones donde están emplazadas las concesiones forestales Maderacre y Maderya corresponden a comunidades indígenas que no están reconocidas ni tituladas. La única comunidad titulada con derechos de propiedad sobre las tierras reconocidas formalmente por el Estado peruano es la comunidad nativa “Bélgica” que tiene límites con Maderacre.

En el último “Informe de Evaluación para la Certificación de Manejo Forestal” de Maderacre, realizado en diciembre de 2006 por Smartwood para el Forest Stewardship Council (FSC) indica que “el territorio de la única comunidad nativa adyacente a la concesión de la empresa es La Bélgica. El territorio de esta comunidad es extenso (mas de 50 mil hectáreas) y está plenamente delimitado y consolidado. La comunidad nativa no necesita entrar a la concesión de la empresa por recursos”⁴³. Ambas concesiones recibieron la certificación FSC en enero de 2007.

La otra institución directamente involucrada con el proyecto “Madre de Dios Amazon REDD” es una ONG, Greenoxx⁴⁴, basada en Uruguay. Además, en el sitio institucional de Maderacre se menciona que otra ONG peruana, AIDER (Asociación para la investigación y Desarrollo Integral), asesoró a las empresas forestales para concretar la elaboración del proyecto REDD⁴⁵.

La empresa Greenoxx Global Environmental Program se presenta como “un programa especialmente diseñado para compañías, industrias, instituciones, organizaciones no gubernamentales y gobiernos, con intenciones de mitigar los efectos del Cambio Climático, por medio de Proyectos Forestales y de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD)”. Este “programa” se compone a su vez por Greenoxx ONG y Greenoxx Consulting siendo la primera la encargada de presentar y manejar los proyectos de inversiones forestales y de deforestación evitada, y la segunda la que explora nuevos mecanismos de comercialización para el desarrollo de proyectos en “áreas de proyectos como bioenergía, energías renovables, captura de metano, cambios en el uso del suelo, etcétera. dentro del Protocolo de Kyoto y los mercados voluntarios de reducción de emisiones”⁴⁶. Es importante mencionar que esta entidad no tiene gran visibilidad en Uruguay pero sí posee experiencia en otra iniciativa de comercialización de Bonos de Carbono a partir de proyectos de plantaciones forestales en Uruguay. En este país no existe hasta el momento ningún tipo de avance en su legislación nacional referida a REDD o REDD+. En ese sentido, parece ser una firma instalada en este país aprovechando determinadas características como puede ser el régimen de secreto bancario y otras facilidades que ofrece Uruguay para la circulación de montos de dinero como los que se realizan a partir de la comercialización de Certificados de Reducción de Emisiones a partir de proyectos del tipo de Madre de Dios.

Por su parte, AIDER se presenta como una ONG que trabaja en áreas como “manejo forestal, manejo de áreas naturales protegidas, diagnósticos biológicos,

³⁹ <http://www.maderacre.com/?c=p&m=s&i=nosotros>

⁴⁰ “Documento general del proyecto. Madre de Dios Amazon REDD Project” Greenoxx, p. 16 Disponible en: <http://www.climate-standards.org/projects/index.html>

⁴¹ Ver información en: http://www.redcet.us/jagwood/sac/public/mostrar_plugin.php?symbolic_name=LST_BOLETIN_SECUNDARIOS&id_plugin=25&id_secundarios=1&obfuscate=main_list&lang=es

⁴² www.fenamad.org.pe

⁴³ Disponible en internet: <http://www.cfperu.com/documentos.php> Última consulta en línea 16/08/2010, p.10

⁴⁴ www.greenoxx.com

⁴⁵ http://www.maderacre.com/?c=p&m=s&i=servicios_ambientales

⁴⁶ <http://www.greenoxx.com/es/greenoxx.asp> -En inglés: <http://www.greenoxx.com/en/greenoxx.asp>

forestales y socio-ambientales, recuperación de áreas degradadas, forestación y reforestación, secuestro de carbono y REDD, certificación forestal voluntaria, fortalecimiento organizacional, agroforestería y planificación, monitoreo y evaluación de proyectos”⁴⁷.

Finalmente, otro actor que está indirectamente vinculado con el proyecto es la WWF, que tiene un Acuerdo de Cooperación firmado en abril de 2005 con las dos concesiones forestales para que éstas puedan obtener las certificaciones del FSC. Además, WWF tiene la función de “mapear, evaluar, consultar y censar”⁴⁸ a las poblaciones de las comunidades próximas al proyecto.

Objetivos del proyecto. Básicamente toda la información disponible acerca del proyecto “Madre de Dios”, se encuentra en el *Project Design Document* (PDD), que contiene las características generales del mismo, fechado en junio de 2009 y accesible en internet⁴⁹.

De acuerdo a la información contenida en el PDD, la fecha de inicio formal del proyecto REDD fue el 31 de mayo de 2006. Los objetivos del proyecto son: “contribuir al desarrollo sustentable de los productores rurales que habitan en la zona de amortiguamiento del proyecto, y reducir la vulnerabilidad del área del proyecto por factores externos de deforestación y degradación”⁵⁰.

⁴⁷ <http://www.aider.com.pe/acerca.html>

⁴⁸ PDD, p. 27

⁴⁹ Project Design Document “Madre de Dios Amazon REDD Project” Disponible en: <http://www.climate-standards.org/projects/index.html> También disponible en: http://www.maderacre.com/?c=p&m=s&i=?c=p&m=s&i=servicios_ambientales

⁵⁰ PDD, p.. 67



Foto: Prometeo Lucero

Según el PDD, dentro de las concesiones forestales donde se desarrolla el proyecto “*no viven personas actualmente*”, pero se podría generar inmigración hacia la región por los trabajos requeridos en la construcción de la carretera interoceánica que atraviesa la región proveniente de Brasil hacia el océano Pacífico. “Ésta es la principal razón por la cual las finanzas del carbono son tan necesarias para las concesiones forestales, en el sentido de llevar adelante las tareas de monitoreo

necesarias para mantener la situación bajo control y planificar los procesos de llegada de nuevos inmigrantes sin que amenacen las concesiones forestales”⁵¹.

Aspectos financieros. En el sitio de internet de Greenoxx, se encuentran algunas noticias sobre las ventas de los certificados de reducción de emisiones, y generalidades de la entidad. La función principal de Greenoxx en el proyecto es la comercialización de los certificados de reducción de emisiones, en los mercados voluntarios de carbono. Greenoxx es miembro participante y *Offset Aggregator* del Chicago Climate Exchange (CCX)⁵² desde noviembre de 2006, e integra el Comité Forestal y el Comité de Asesoramiento Técnico para Proyectos de Deforestación Evitada de CCX⁵³.



Foto: Jerónimo Palomares

⁵¹ PDD, p. 66

⁵² <http://www.chicagoclimateexchange.com/content.jsf?id=64>

⁵³ <http://www.greenoxx.com/es/ong.asp>
En inglés: <http://www.greenoxx.com/en/ngo.asp>

⁵⁴ Comunicado de Prensa ccx-Greenoxx, 28 de noviembre de 2006; Disponible en: <http://www.chicagoclimateexchange.com/newsAndPressReleaseList.jsf>

⁵⁵ http://www.greenoxx.com/es/noticias.asp#noti_094 En inglés: http://www.greenoxx.com/en/news.asp#noti_094 También en: <http://thewrongkindofgreen.wordpress.com/2010/05/14/greenoxx-ngo-sells-first-tons-of-redd-project/>

CCX comenzó a funcionar en octubre de 2003, y es una bolsa privada autorregulada por sus miembros (empresas), que opera en Chicago bajo la normativa estadounidense, y donde se registran y comercializan los certificados de reducción de emisiones provenientes de los proyectos MDL, REDD. “Como Offset Aggregator, Greenoxx ONG tiene la capacidad de presentar proyectos a CCX y al mismo tiempo, comercializar sus offsets o créditos en la Plataforma Comercial de CCX. De esta forma, Greenoxx ONG tendrá la capacidad de promover proyectos forestales en toda América Latina y por tanto fomentar el desarrollo de bosques que secuestren dióxido de carbono de la atmósfera, contribuyendo así a mitigar los efectos del cambio climático”⁵⁴.

En mayo de 2010, Greenoxx vendió los primeros certificados de reducción de emisiones de 40 mil toneladas de CO₂ del Madre de Dios Amazon REDD Project, generados entre 2006 y 2009, “a un precio de USD 7 la tonelada”⁵⁵.

De esa forma, queda establecida una “división de tareas” relacionada a los diferentes usos económicos que genera el proyecto: Maderacre y Maderyja hacen el aprovechamiento forestal (venta de madera) y Greenoxx vende los bonos de carbono en el mercado voluntario de la CCX. Además, Greenoxx se encarga de registrar el proyecto en iniciativas voluntarias de certificación ambiental, con el objetivo de aumentar el precio de los bonos de carbono que ofrece.

Algo que es muy llamativo en la justificación de adicionalidad del proyecto es que, según Greenoxx, las concesiones forestales no serían rentables si solamente se dedicaran a la venta de madera y que sería imposible realizar las tareas de monitoreo y vigilancia de una zona de casi 100 mil hectáreas para evitar tala ilegal, agricultura migratoria, derrames o incendios —por la proximidad de las obras de la carretera interoceánica— sin tener un plan de negocios paralelo⁵⁶. Además, la empresa argumenta que las dos concesiones forestales —Maderacre y Maderyja— no tienen un control permanente del área total de las concesiones, sino que se limitan a una fracción de aprovechamiento anual, que puede ser de entre mil 200 y 2 mil 500 hectáreas (de un total de 49 mil 736 y 49 mil 556 hectáreas respectivamente).

Según el PDD del proyecto, la cantidad de carbono equivalente en las concesiones son, 40 millones 558 mil 816 toneladas de CO₂ equivalente en Maderyja y 42 millones 392 mil 150 toneladas de CO₂ equivalente en Maderacre⁵⁷. Tomando en cuenta que las primeras 40 mil toneladas de CO₂ fueron vendidas a 7 dólares la tonelada, el monto total aproximado del negocio de venta de los certificados de reducción de emisiones (cada uno equivalente a una tonelada de CO₂) de todo el proyecto REDD (es decir, las dos concesiones) asciende a 580 millones 656 mil 762 dólares estadounidenses.

Generación de empleo y situación socio-económica de la zona. En la concesión de Maderacre, según la información disponible en el sitio de la empresa en internet sobre sus primeros cinco años de operativa, se generó un puesto de trabajo por cada 10 hectáreas en producción, lo cual resulta en un máximo de 250 trabajadores por año como máximo en la fase de producción forestal, pero no de forma estable. Por otra parte, siempre según los datos de la propia empresa, los costos que afrontó por hectárea en producción son de 40 dólares estadounidenses. Esto deja un salario aproximado de hasta 400 dólares por trabajador. Otros costos que afrontó la empresa en ese periodo fueron: 10 dólares por metro cúbico de madera en rollo (con un rendimiento de 4.2 metros cúbicos de madera en rollo por hectárea), mas un 25% de costo extra por certificaciones forestales. Finalmente, en la proyección que Maderacre realizó luego de los primeros 5 años de operaciones, estimó un valor anual global de su producción de madera aserrada (pisos y decks) de 4 millones 700 mil dólares.

La situación socioeconómica de la región es extremadamente precaria. Según consta en el documento público de auditoría de la certificación forestal de Smartwood que realizó de la concesión “Iñapari es un distrito eminentemente rural y con una baja densidad poblacional (0.05 hab./Km²) (INEI, 2005), lo que sitúa a la concesión lejos de asentamientos humanos. Según el Informe de Desarrollo Humano Perú (PNUD, 2006), el ingreso familiar per cápita en Iñapari es el más bajo de Tahuamanu (85 dólares mensuales), el cual está relacionado a la predominancia de agricultura de autoconsumo, al incipiente desarrollo del potencial turístico y a la falta de procesos de valor agregado a actividades como la extracción maderera”⁵⁸.

Finalmente, otro elemento interesante radica en que al menos hasta inicios de 2005, ninguna planificación estratégica del consorcio Maderyja-Maderacre consideraba la posibilidad de ingresar al negocio de los bonos de carbono. La posibilidad de instalar una nueva área de negocios basada en la comercialización de bonos de carbono se agregó a una estrategia comercial pre-existente estrictamente basada en la producción forestal.

En septiembre de 2010, se divulgó que Scotia Bank Peru “compró” 16 mil toneladas de CO₂ del proyecto Madre de Dios Amazon REDD Project, como parte de su iniciativa corporativa de convertirse en un banco “carbono neutral”⁶⁰. Otro actor corporativo que ha adquirido Certificados de Reducción de Emisiones generadas por el Proyecto Madre de Dios es el Rally Dakar, considerada la carrera de vehículos más importante del mundo.

⁵⁶ PDD p.. 72

⁵⁷ PDD p.. 89

⁵⁸ Informe Smartwood. Maderacre, p.19,



Foto: Jerónimo Palomares

En esto radica quizás el elemento mas claro de cómo funciona este proyecto REDD. En primer lugar, el consorcio explota madera (tala) en las concesiones otorgadas por el Estado peruano, y por la venta de madera aserrada y madera en rollo, obtiene un vector de ganancias. Y además, como no tala en toda el área de las concesiones, conserva áreas dentro de las mismas que se mantienen sin explotar. Este hecho, más el argumento de la existencia de riesgos (incendios, tala ilegal, impactos diversos, agricultura migratoria) en toda el área de las concesiones por la cercanía de las obras de la carretera interoceánica, le proporciona al consorcio el fundamento para el proyecto REDD, que le genera otro vector de ganancias por la “protección” por la venta de carbono de esas otras áreas de las concesiones que no son explotadas. En conclusión, “gana” por talar y “gana” por no talar.

Situación legal de REDD en Perú. En Perú se está actualmente desarrollando un trabajo multisectorial con diferentes organizaciones de conservación ambiental y dependencias del gobierno, para elaborar un marco general para la implementación de proyectos REDD. Este proceso está indicando que el gobierno peruano está siguiendo en este tema una estrategia que se basa en permitir algunos proyectos

en el país, sin tener un marco normativo específico, y luego de que todo esto ya esté en funcionamiento, aprobar un marco general.

El gobierno de Perú creó una Comisión sobre Cambio Climático, coordinada por el Ministerio de Medio Ambiente, y uno de los subgrupos específicos enfoca REDD, y prepara su futuro marco regulatorio e institucional pues hasta el momento no existe una “Ley sobre REDD” en Perú. Si existen y están vigentes la Ley Forestal y la Ley de Áreas Naturales Protegidas, entre otras. Por otra parte, es evidente que ya existen proyectos en funcionamiento, y no se cuenta con una legislación específica sobre mecanismos de mitigación o adaptación al cambio climático, ni tampoco sobre el Pago por Servicios Ambientales o similares.

Más específicamente en la región de Madre de Dios, funciona una “Mesa de Servicios Ambientales y REDD”, integrada por el gobierno regional, empresas, organizaciones locales y organizaciones no gubernamentales. Según la información institucional “La MSAR es un espacio de interlocución entre las diferentes organizaciones públicas y privadas interesadas en promover temas de servicios ambientales y de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación del bosque (REDD) en la región Madre de Dios, basado en la libre participación, buena fe y compromiso de sus integrantes”⁵⁹. Entre las ONG que integran la Mesa, se encuentra a WWF, AIDER y Fenamad.

Aire a la venta. En septiembre de 2010, se divulgó que Scotia Bank Peru “compró” 16 mil toneladas de CO₂ del proyecto Madre de Dios Amazon REDD Project, como parte de su iniciativa corporativa de convertirse en un banco “carbono neutral”⁶⁰. Otro actor corporativo que ha adquirido Certificados de Reducción de Emisiones generados por el Proyecto Madre de Dios es el Rally Dakar, considerada la carrera de vehículos más importante del mundo. Como parte de su estrategia corporativa en la edición 2011 de la carrera que recorrió Argentina, Chile y Perú, compró 15 mil 500 tons de CO₂ del proyecto Madre de Dios Amazon REDD Project⁶¹. Mediante esta operación, la carrera afirma estar “compensando” el total de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el rally. El Rally Dakar destinó 200 mil dólares para “acompañamiento” del Proyecto REDD, y un monto adicional de 30 mil euros como contribución proveniente de los equipos inscriptos a la carrera.

Observaciones finales

La muestra sobre la realidad de REDD en los siete países analizados de América Latina muestra una tendencia común:

- * No existe ningún proceso participativo. A pesar de que la propaganda oficial, gobiernos e instituciones multilaterales dicen lo contrario la realidad demuestra que son solamente unos pocos sectores sociales los que han participado. Se ha dejado de lado a Pueblos Indígenas y comunidades locales y cuando se les participa, no se hace siguiendo lo establecido en convenios internacionales vigentes en América Latina. Es decir, no cuentan con información previa y los tiempos necesarios para poder comprender y discutir para llegar con una posición fundamentada a dichas reuniones.
- * La imposición de REDD se da en ausencia de transparencia: no existe información previa que diga a qué se quiere llegar y por qué. Solamente se utiliza el argumento de que hay que luchar contra el cambio climático y que para proteger nuestros bosques, es necesario contar con mayores recursos económicos que se obtendrán a través de REDD. De esta forma, los gobiernos y las instituciones involucradas en la implementación de REDD juegan también con las condiciones de hambre y pobreza en las cuales se ven sumidas numerosos pueblos indígenas y comunidades locales que han resguardado el bosque durante siglos.

La imposición de REDD se da en ausencia de transparencia: no existe información previa que diga a qué se quiere llegar y por qué. Solamente se utiliza el argumento de que hay que luchar contra el cambio climático y que para proteger nuestros bosques, es necesario contar con mayores recursos económicos que se obtendrán a través de REDD. De esta forma, los gobiernos y las instituciones involucradas en la implementación de REDD juegan también con las condiciones de hambre y pobreza en las cuales se ven sumidas numerosos pueblos indígenas y comunidades locales que han resguardado el bosque durante siglos.

⁵⁹ <http://www.redd-madrededios.org/home/presentacion>

⁶⁰ http://www.greenox.com/es/noticias.asp#noti_091

⁶¹ <http://www.dakar.com/dakar/2012/es/medio-ambiente.html>



Foto: Jerónimo Palomares

REDD forma parte de una visión de mundo que hoy se cobija bajo la economía verde. Este mecanismo es uno más de muchos otros que intenta privatizar la Naturaleza y todos sus bienes en beneficio de quienes han venido destruyendo y contaminando nuestro planeta.

- * Existe actores comunes en la imposición de REDD: el Banco Mundial, WWF, The Nature Conservancy, Conservation International, Naciones Unidas son algunas de ellas. Curiosamente, muchas de ellas las encontramos también con jugosos contratos de consultoría, verificación de proyectos REDD entre otros. Estos actores son quienes se benefician de REDD.
- * REDD no viene a atacar las causas que provocan ni la deforestación ni la degradación de los bosques. REDD es un mecanismo de mercado que viene a agregar ganancias económicas a quienes ya las tienen a través de actividades contaminantes y destructoras.
- * REDD se vincula con actividades altamente impactantes como lo son la palma africana, los agrocombustibles y los monocultivos de árboles.
- * En la implementación de REDD se pone en práctica una serie de herramientas que permiten inventariar los territorios donde habitan los pueblos indígenas y las comunidades locales de forma tal, que estos territorios se vulnerabilizan nuevamente.
- * Los aspectos culturales y espirituales de pueblos indígenas y comunidades locales no son objeto de preocupación alguna para quienes quieren implementar REDD.
- * Los proyectos REDD que están en marcha tienen como característica común el imponer una visión de mundo a las comunidades afectadas. Además, estas no han sido consultadas y nunca ven los prometidos beneficios económicos.
- * REDD forma parte de una visión de mundo que hoy se cobija bajo la economía verde. Este mecanismo es uno más de muchos otros que intenta privatizar la Naturaleza y todos sus bienes en beneficio de quienes han venido destruyendo y contaminando nuestro planeta.

REDD debe ser rechazado así como la economía verde y todos sus instrumentos.

La economía verde y los mosquitos transgénicos

Elizabeth Bravo

89

En junio de este año, en la Cumbre “Río + 20”, concluiría el proceso —que se inició hace 20 años— que propone la “economía verde” como camino para alcanzar el desarrollo sustentable. El proceso tuvo tres momentos.

Un primer momento fue en la Cumbre de la Tierra o Río 92, cuando se logró que se institucionalizara el tema ambiental. Un resultado de esta cumbre fue la creación de muchos ministerios del ambiente y la promulgación de leyes ambientales; se impusieron procedimientos como los estudios de impacto ambiental, las evaluaciones de riesgo, como instrumento de toma de decisiones cuando existiera la sospecha de que una obra o política pudiera producir impactos en el ambiente. Entonces también se aprobaron tres convenios internacionales ambientales: de biodiversidad, de cambio climático y de lucha contra la desertificación, que al cabo de estas dos décadas, se han transformado en convenios comerciales.

Diez años más tarde, en la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica, se volvieron a congregarse los gobiernos del mundo, esta vez en el marco de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable. El principal resultado de aquella cumbre fue que se oficializaron las llamadas Asociaciones Público-Privadas. El mecanismo consistía en que los países del Norte, que debían destinar un porcentaje de su PIB a la ayuda al desarrollo, lo hacían a través de sus empresas. Los objetivos del desarrollo sustentable, como el acceso al agua, a la salud, a la electrificación, especialmente en los países más pobres del mundo, se alcanzarían gracias a la ayuda que daba un país del norte a otro del sur, a través de sus empresas. Esto abrió un inmenso mercado a las empresas europeas y norteamericanas: el mercado de los pobres.

Desde entonces ha pasado una década, y hay un nuevo escenario mundial, pues el capitalismo enfrenta un nuevo ciclo de crisis; y en él, la economía verde surge como una tabla de salvación. La propuesta es que los objetivos planteados hace veinte años podrían conseguirse sólo si las empresas se comprometen con la sustentabilidad, y eso se alcanzaría si éstas adoptan los instrumentos de la economía verde, incluyendo la adopción de ciertas normas voluntarias y de nuevas tecnologías.

Aquí nos centraremos en la aplicación de una nueva tecnología aplicada al campo de la salud, tecnología de la empresa británica Oxitec que se dedica al desarrollo de insectos transgénicos para el control de enfermedades transmitidas por vectores. Ésta es una tecnología que encaja con los planes del gobierno británico en su estrategia económica de invertir en patentes y la “economía biotecnológica”. El gobierno británico se ha comprometido a facilitar el acceso a la

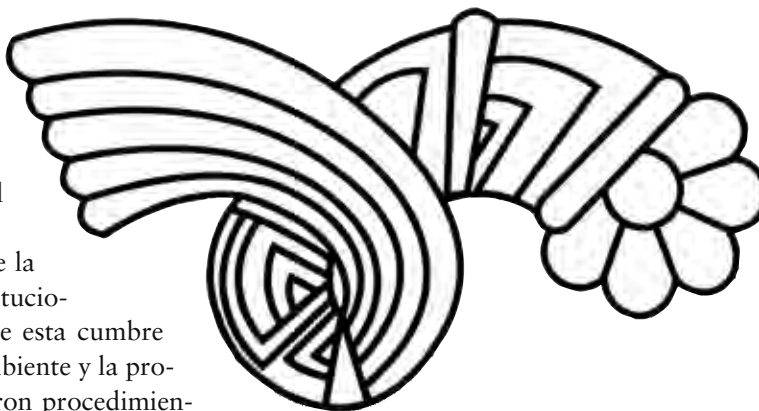




Foto: Jerónimo Palomares

financiación, a la inversión interna y al acceso a los mercados mundiales, para lo que usa una amplia gama de políticas financieras y no financieras (UK Department of Health, 2010).

Oxitec plantea enfrentar la epidemia del dengue (y otras enfermedades transmitidas por vectores) con la introducción masiva de mosquitos transgénicos en las zonas de incidencia de estas enfermedades. Ésta es una tecnología que está patentada por Oxitec. Su director es el portador de varias patentes de insectos transgénicos, y es considerada como una tecnología verde porque se promueven con el argumento de que, a través de ella, se evita la aplicación de insecticidas en las campañas de control de estas epidemias, y por lo mismo se producirán menos impactos en la salud y el ambiente.

Tal abordaje ignora que el dengue es una enfermedad socialmente producida, como lo señala Marcos Cueto en un análisis sobre las epidemias del cólera y el dengue en el Perú:

En el caso del dengue la enfermedad se debía al incremento de la miseria y también a los pésimos sistemas de agua de uso doméstico que obligaba a los moradores urbanos a conservarla en reservorios domésticos precarios y contaminados. A ello se sumaban las precarias condiciones de vivienda en lugares como Comas con dormitorios y ventanas sin la protección de telas metálicas ni mosquiteros y en las que predominaban los pisos de tierra. Por otra parte, el incremento de la migración hacia Lima de campesinos y pobladores de áreas contaminadas por el dengue, recalaba generalmente en Comas y otros distritos de la zona norte, con débiles redes familiares que los apoyen en caso de enfermedad. Estos campesinos llegaban del norte del país a una estación limeña de bus, llamada Fiori, donde no existe ningún control sanitario.

Y añade que los largos años de políticas neoliberales en el campo de la salud hizo que no existieran servicios de salud adecuados, lo que facilita la dispersión de una enfermedad como el dengue. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue culpabilizar a los víctimas, argumentando que ellos tenían prácticas insalubres. Él sostiene que las epidemias en Perú no fueron resueltas con el uso de soluciones tecnológicas fáciles, y que al contrario, se usó la emergencia de estas epidemias para instrumentalizar el neoliberalismo en el campo de la salud.



Foto: Jerónimo Palomares

En qué consiste la tecnología. La estrategia de control de la epidemia del dengue desarrollada por Oxitec consiste en liberar en las zonas de intervención, millones de mosquitos machos transgénicos para que éstos se crucen con mosquitos hembras normales (que son las que pican y por lo tanto transmiten la enfermedad). Dado que el mosquitos están genéticamente modificados para que su descendencia no pueda sobrevivir (una especie de mosquito terminator), si los machos transgénicos se cruzaran con hembras silvestres, la mayoría de la descendencia morirá en estado larval y consecuentemente se reduciría la incidencia de la enfermedad.

Ésta es una tecnología, que a pesar de ser promocionada como segura ambientalmente, puede conducir a una serie de impactos negativos a distintos niveles. Por ejemplo, los mosquitos transgénicos van a interactuar con otras especies de mosquito, con predadores y presas; con los humanos que son picados, con diversos virus distintos, lo que puede desencadenar consecuencias poco predecibles y posiblemente negativas. ¿Podría el virus del dengue evolucionar para volverse más virulento por efecto de la transgénesis?

Por otro lado, las mosquitos hembra transgénicas, que viven sólo en el laboratorio, pueden escapar del confinamiento y picar a animales o seres humanos. En el laboratorio tienen que producirse tanto machos como hembras transgénicas (los machos no pueden aparecer de la nada, se necesita siempre las hembras). Luego

Los mosquitos transgénicos contienen un interruptor genético que es activado en presencia del antibiótico tetraciclina. Si el ambiente está contaminado con tetraciclina, las larvas de los mosquitos transgénicos (machos y hembras) sobrevivirán, alcanzarán la madurez y podrán reproducirse libremente. Las hembras sobrevivientes tendrán la capacidad de picar a humanos. Recordemos que la tetraciclina es un antibiótico usado ampliamente en planteles avícolas y porcícolas, los mismos que aumentan de manera creciente en todo el mundo.

los machos transgénicos tienen que ser separados de las hembras y esto se hace en la fase de pupa, cuando los machos son generalmente más pequeños que las hembras, pero siempre hay hembras más grandes o machos más pequeños, por lo que en una población de un millón de insectos, es muy probable que se infiltren hembras, capaces de transmitir el dengue y los genes letales. Se cree que entre el 5 al 15% de las hembras pueden “infiltrarse” y ser liberadas al ambiente.

Los mosquitos transgénicos contienen un interruptor genético que es activado en presencia del antibiótico tetraciclina. Si el ambiente está contaminado con tetraciclina, las larvas de los mosquitos transgénicos (machos y hembras) sobrevivirán, alcanzarán la madurez y podrán reproducirse libremente. Las hembras sobrevivientes tendrán la capacidad de picar a humanos. Recordemos que la tetraciclina es un antibiótico usado ampliamente en planteles avícolas y porcícolas, los mismos que aumentan de manera creciente en todo el mundo.

Ésta es una tecnología con la que ya se está experimentando. La primera liberación de mosquitos transgénicos se llevó a cabo en las Islas Caimán, una colonia británica bajo condiciones muy cuestionadas en términos de transparencia. Ahí se lanzaron al ambiente tres millones de “machos estériles”. Las siguientes liberaciones se hicieron en Malasia y Brasil.

En Brasil el “Proyecto Aedes Transgénico” (PAT), se hizo en colaboración con la Universidad de Sao Paulo, y la Moscamed Oxitec, y fue apoyado por el gobierno del Estado de Bahía a través de la Secretaría de Salud, y el Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los ensayos se llevan a cabo en el área de Juazeiro, en el Estado de Bahía. Ahí, el proyecto se encuentra en su tercera fase, y se calcula que desde el comienzo de las pruebas se han puestos en libertad casi medio millón de mosquitos transgénicos. Algunos expertos, creen que la medida implica muchos gastos y difícilmente puede llegar a una solución.

Se cree que desde Brasil la empresa espera expandirse a otros países de América del Sur. Por otro lado, ha empezado una colaboración con el instituto Gorgas de Panamá para llevar a cabo programas similares en ese país centroamericano, desde donde se irradiaría a otros países de la región.

Una estrategia que usa la empresa es trabajar siempre en asociación con institutos públicos en los países que opera.

Algunos intereses ocultos. Oxitec tiene estrechos vínculos con varias empresas, entre las que se incluye a la gigante suiza Syngenta, con quien está desarrollando insectos transgénicos que son plagas agrícolas y que han desarrollado resistencia a los cultivos Bt. Es decir quieren solucionar los problemas tecnológicos ocasionados por el uso continuo de un mismo método de control de plagas (en este caso, los cultivos Bt), con más tecnología.

De hecho, una de las patentes de Oxitec incluye una llamada “Dilución de las características” (EP1624749) y cubre el uso de insectos GM para prevenir la expansión de resistencia a insecticida (incluyendo resistencia a genes Bt). En la aplicación se listan 75 especies que estaría cubiertas por la patente.

Syngenta parece tener interés en este método para poder desarrollar una gran variedad de insectos transgénicos, que no sólo incluiría plagas agrícolas sino tal vez algunos insectos benéficos como las abejas. Hay que notar que Syngenta Bio-line vende actualmente insectos (no-transgénicos) para control biológico en agricultura, y muchos de los funcionarios de Oxitec trabajaron en algún momento para Syngenta.

Otro de los financiadores de Oxitec es la Fundación Gates, quien hizo una subvención de casi 20 millones dólares para un trabajo conjunto de la empresa con la Universidad de California en Irvine, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de México. El

proyecto cuenta además con financiamiento del gobierno mexicano. La cepa transgénica será evaluada en el estado de Chiapas.

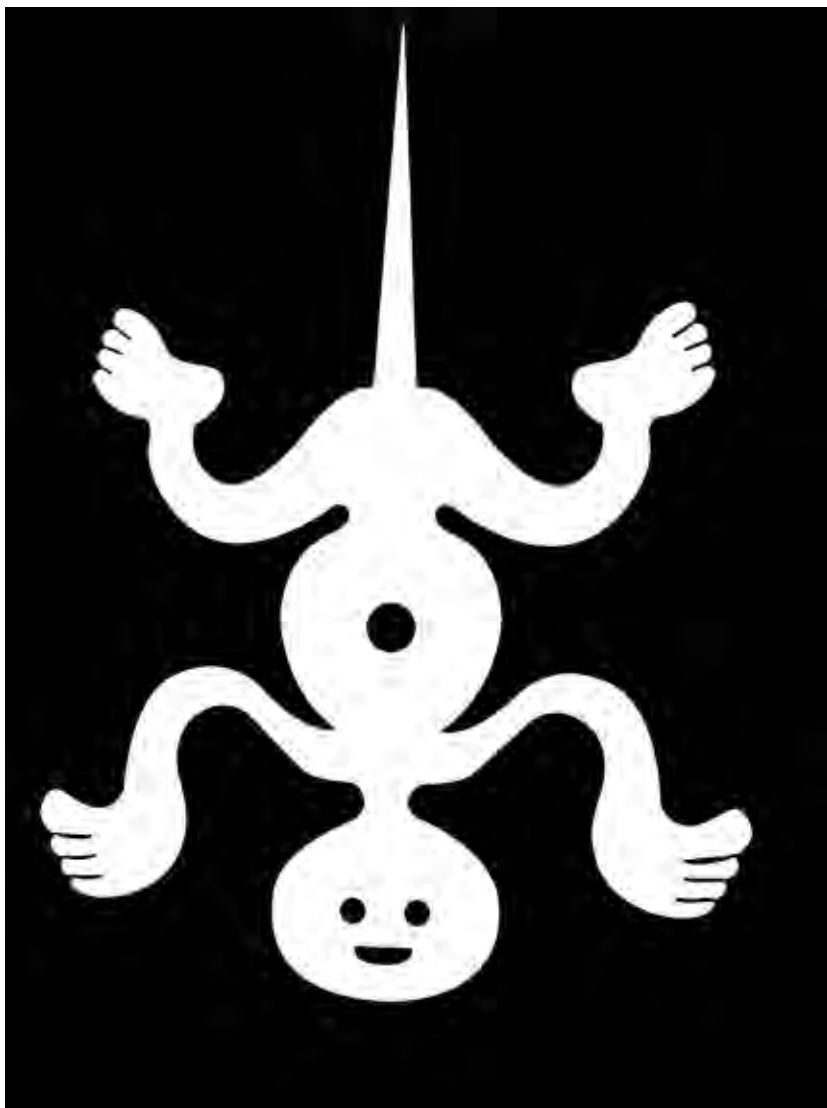
¿Es ésta la estrategia correcta?

Esta forma de abordar el control de las enfermedades transmitidas por vectores, distrae la atención de las causas estructurales por las cuales prolifera esta enfermedad, como son los espacios urbanos en los barrios empobrecidos y hacinados, la crisis de los servicios sanitarios, la no disponibilidad de agua corriente que obliga a la gente tener precarios recipientes abiertos con agua de reserva, la ausencia de sistemas de disposición de elementos sólidos que al ser expuestos se convierten en criaderos larvarios, los procesos de migración del campo a los barrios depauperados urbanos, el crecimiento de formas de vivienda precarias y el desmantelamiento de los programas de prevención de las enfermedades transmitidas por vectores.

Por otro lado, estas propuestas responden a un modelo biomédico, que se centra en la enfermedad y no en la salud, que miran la enfermedad como un conjunto de fenómenos aislados sin mirar el conjunto, y que convierten a la terapia en una mercancía, con fuertes conexiones con la industria farmacéutica (en este caso con la empresa biotecnológica Oxitec), sin indagar los procesos determinantes de la enfermedad.

El epidemiólogo Jaime Breilh, considera que este modelo asume que hay ciertos elementos que causan la enfermedad, como son los huéspedes, vector/agente y nicho o hábitat ecosistémico, como si estuvieran despojados de una determinación social. Mira los “factores de riesgo” como variables que pueden ser evaluadas y modificadas (por ejemplo a través del manejo del riesgo), sin contemplar la necesidad de que es necesario hacer transformaciones en los modos productivos y de vida malsanos y no sustentables.

Oxitec está usando la tecnología de control de epidemias como una lámpara con bonita cara para luego aplicar esta misma tecnología en plagas agrícolas, donde tendría un campo inmenso de expansión. Se cree que, así como se usó al arroz dorado, para demostrar que los cultivos transgénicos ayudan a las poblaciones pobres del mundo que sufrían de deficiencia de Vitamina A, pero que hasta el momento no ha salido al mercado, de igual manera ahora se pretendería hacer uso de esta tecnología para desarrollar plagas agrícolas transgénicas, poniendo como pantalla el uso filantrópico de los mosquitos transgénicos para el control de enfermedades que cobran muchas vidas cada año incidiendo en los países tropicales y pobres del mundo.



Fuentes

- Jaime Breilh. “¿Cuál es el sentido, del paradigma crítico de la salud?”, Teleconferencia para Universidades de México, 2011.
- Jaime Breilh e Ylonka Tillería. “Aceleración global y despojo en Ecuador”. Universidad Andina Simón Bolívar, 2010
- Marcos Cueto. *Cólera y dengue en Lima al final del siglo XX y comienzos del XXI: salud y la cultura de la sobrevivencia*. Colección FLACSO 50 años, 2009
- UK Department of Health. *Life Sciences in the UK —Economic analysis and evidence for ‘Life Sciences 2010: Delivering the Blueprint’*. 2010.
- Helen Wallace. Boletín de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos, en base a las notas de su presentación en la Universidad de Panamá en marzo 2012.

La agricultura en la economía verde, ¿el futuro que queremos?

Soledad Vogliano-RALLT

94

Veinte años han sido suficientes para demostrar sobradamente la contradicción entre la sustentabilidad y el propio concepto de desarrollo en la economía capitalista. Poco se ha logrado en el marco de la agenda del milenio por proteger los medios de vida de las comunidades indígenas, campesinas, pescadoras, pastoras y recolectoras, ni la biodiversidad que sostiene la soberanía alimentaria de más de la mitad del planeta.



Nace una estrella. A inicios de 2012, el periódico británico *The Guardian* publicaba en su sección “Global Development” la noticia “El co-coordinador de Río+20 busca colocar a la agricultura en el centro de la escena”¹ que recoge las declaraciones del ejecutivo de Naciones Unidas, Brice Lalaonde, donde sostiene que la agricultura como meta englobante para Río+20 permitirá concentrar esfuerzos e impulsar el progreso de otros objetivos de desarrollo. Por ejemplo en África, “donde la mayor parte del campesinado son mujeres, cualquier progreso en la agricultura automáticamente mejoraría el status de las mujeres”, dijo Lalonde. Proponía entonces una revolución agrícola que incorpore los avances tecnológicos, como la estrategia más efectiva a seguir en Río+20.

Con esto, las cartas estaban lanzadas (y publicitadas): la agricultura se ubica de esta forma en el centro de los debates hacia Río, para protagonizar la estrategia global que enfrente el fracaso de veinte años de esfuerzos para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio... y de mitigar la crisis climática y ambiental, buscando nuevas vías hacia la sustentabilidad.

¿En cuál escenario? La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable denominada Río+20, pone en debate la necesidad de generar políticas globales para superar los desafíos ambientales y sociales que enfrenta el planeta, a cuarenta años de la conferencia de Nairobi y veinte de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, como ha ocurrido cada diez años en el último medio siglo, con muchas promesas y pocos resultados.

La Cumbre de la Tierra en 1992, dio vida entre otras promesas, al concepto de “desarrollo sustentable” como nuevo paradigma, al Convenio Naciones Uni-

¹ <http://www.guardian.co.uk/global-development/2011/sep/02/rio-20-summit-agriculture>

das sobre Diversidad Biológica (CDB) y al Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que se redactaron como instrumentos multilaterales para la construcción de políticas globales que encuadren el proceso de implementación del “desarrollo” planteado como objetivo, en el marco de la sustentabilidad.

Veinte años han sido suficientes para demostrar sobradamente la contradicción entre la sustentabilidad y el propio concepto de desarrollo en la economía capitalista². Poco se ha logrado en el marco de la agenda del milenio por proteger los medios de vida de las comunidades indígenas, campesinas, pescadoras, pastoras y recolectoras, ni la biodiversidad que sostiene la soberanía alimentaria de más de la mitad del planeta. Por el contrario, cada vez con mayor intensidad los convenios se concentran en generar instrumentos de mercado en lugar de decisiones políticas, en un proceso sostenido de mercantilización de la Naturaleza. No casualmente las organizaciones sociales levantaron en los últimos años la consigna “System Change, Not Climate Change” (cambiamos el sistema, no el clima).

Sin embargo, el enfoque hegemónico expresado en la agenda de Naciones Unidas, sí recogió el guante en la demanda de una respuesta sistémica para transformar el modelo económico. Se planteó *reverdecerlo*.

La agenda para Río+20 propuesta por el Secretario General de Naciones Unidas coloca como tema principal “la economía verde en el contexto del desarrollo sustentable y la erradicación de la pobreza, y el marco institucional para el desarrollo sustentable [...] y la confrontación de desafíos nuevos y emergentes.”³ La tesis sería entonces que el desarrollo sustentable y la erradicación de la pobreza serían posibles transformando la economía, en una economía verde.

² Los pueblos del AbyaYala han planteado claramente esta crítica alrededor del concepto de Buen Vivir como paradigma distinto.

³ <http://www.pnuma.org/forodeministros/17-panama/FORO%20DE%20MINISTROS%202010%20VERSIONES%20FINALES/MINISTROS/de%20trabajo%20ESPAnOL/UNEP-LAC-IG-XVII-4%20ECONOMIA%20VERDE.pdf>



Foto: Jerónimo Palomares



Foto: Prometeo Lucero

El camino a Río de Janeiro, con la agricultura en primer lugar.⁴ La Coalición Farming First⁵ define la “agricultura en una economía verde” como un enfoque para el desarrollo agrario basado en el conocimiento, cuya clave sería centrarse en responder a las dificultades en la implementación de conocimientos, la asesoría, y los servicios de capacitación; asegurarse que las políticas agrícolas se basen en la ciencia; apoyar la productividad a través de la innovación y las buenas prácticas. Es decir, que la economía verde demanda un desarrollo agrario basado en la ciencia y la innovación. En la misma línea que el coordinador de Río+20, asevera que:

La agricultura es esencial para la economía verde. Con la predicción de 9 mil millones de personas para 2050, la producción agrícola deberá incrementarse para suplir la demanda de alimentos, piensos, combustibles y fibras. Y no sólo debe suplir esta demanda, sino que debe hacerlo minimizando la huella ambiental y generando medios de vida sustentables para los productores [...] el mundo no puede ignorar el potencial de la agricultura para alcanzar la triple victoria de lograr un suministro seguro de alimentos, reducir la pobreza mejorando los medios de vida rurales, y la sustentabilidad ambiental a través de la reducción de la huella de la producción, y de la adaptación al cambio climático.⁶

⁴ Slogan de Farming First

⁵ www.farmingfirst.org

⁶ <http://rapidlibrary.com/source.php?file=ulzemwrmmiyi89on&sec=aff87be9> <http://rapidlibrary.com>

Según este planteamiento, una política adecuada para la agricultura estaría en condiciones de generar respuestas para un desarrollo sustentable y para la

erradicación de la pobreza, con el plus de proveer los medios para la seguridad alimentaria. Éste es básicamente el mismo planteamiento que ha construido la Vía Campesina alrededor de la potencialidad de la agricultura campesina para alimentar al mundo y combatir el cambio climático, en el marco de los planteamientos contenidos en la propuesta política de la Soberanía Alimentaria como alternativa al libre comercio, al monocultivo y al agronegocio.

Farming First plantea además que, en la economía verde, la agricultura (campesina) debe estar en primer lugar: que es necesario destinar mayores presupuestos públicos, mejorar los ensilajes locales y comunitarios, construir vías de acceso e infraestructura de comunicación, suministrar espacios para mercados locales, etcétera.

¿Cómo explicar entonces que entre los miembros de Farming First encontremos a los mayores jugadores del agronegocio trasnacional, como Croplife, una fundación conformada por Monsanto, Syngenta, DuPont y otras gigantes de la biotecnología; a la Asociación Internacional de Semilleros, a la Asociación Internacional de la Industria de Fertilizantes e incluso al Consorcio Pan Africano de Agronegocios y Agroindustria?

Última parada en Durban. Triple victoria para la agricultura climáticamente inteligente. La COP17 del Convenio Marco de Cambio Climático, ocurrida a fines de 2011 en Durban, presentó en sociedad el concepto de “climate smart agriculture” (agricultura climáticamente inteligente), que suele describirse como “intensificación sustentable”. Esta idea fue descrita por un fondo de inversión agrícola como el “aumento del rendimientos basado en la introducción de técnicas modernas de cultivo y tecnologías, agrupando a las granjas para aumentar su eficiencia y generar economías de escala”⁷.

En esta perspectiva, la FAO plantea que ya existen modelos de “agricultura climáticamente inteligente” que pueden ser implementados en los países en desarrollo, para responder a los desafíos de la seguridad alimentaria y el cambio climático; lo cual requiere una inversión considerable en investigación y desarrollo tecnológico, así como para la conservación y la producción de variedades adecuadas de semillas y especies⁸.

Esto permitirá, según el Banco Mundial, “una victoria ‘triple’: intervenciones que aumenten los rendimientos (reducción de la pobreza y seguridad alimentaria), rendimientos más resistentes frente a las sequías y el calor (la adaptación), y fincas que aporten a la solución al problema del cambio climático en lugar de ser parte del problema (mitigación).”⁹

Según este enfoque, la agricultura campesina debe transformarse radicalmente, incorporando tecnología para aumentar la productividad, adaptarse a las nuevas condiciones climáticas y disminuir su huella ecológica, para llegar a ser “climáticamente inteligente”. Los organismos de Naciones Unidas y el Banco Mundial llaman a realizar extensas inversiones en investigación científica con éste objetivo.

¿Qué implica incorporar ciencia y tecnología para adaptarse al clima? ¿Transgénicos *climate ready*? Esta pregunta nos puede ayudar a comprender el interés de la industria biotecnológica por la economía verde. Si revisamos los discursos que los Estados y las empresas han utilizado los últimos cincuenta años, las demandas por la “ciencia” en el ámbito de la agricultura han estado históricamente vinculadas a la idea de que ciencia equivale a biotecnología, paquetes tecnológicos y transgénicos, despreciando los saberes agrarios locales como “no científicos”. Considerando que aún son campesinos y campesinas, muchos de los cuales conservan sus semillas y saberes locales, los que globalmente proveen el 70% de los alimentos en el mundo, estamos frente a un enorme mercado no colonizado por la industria biotecnológica.

¿Cómo explicar entonces que entre los miembros de Farming First encontremos a los mayores jugadores del agronegocio trasnacional, como Croplife, una fundación conformada por Monsanto, Syngenta, DuPont y otras gigantes de la biotecnología; a la Asociación Internacional de Semilleros, a la Asociación Internacional de la Industria de Fertilizantes e incluso al Consorcio Pan Africano de Agronegocios y Agroindustria?

⁷ The African Agricultural Land Fund <https://www.emergentasset.com/?func=PageAfricanLandFund>

⁸ “Climate-Smart” Agriculture. Policies, Practices and Financing for Food Security, Adaptation and Mitigation. FAO

⁹ “Climate Smart Growth”, Banco Mundial.

*Si revisamos los discursos
que los Estados y las
empresas han utilizado
los últimos cincuenta
años, las demandas por
la “ciencia” en el ámbito
de la agricultura han
estado históricamente
vinculadas a la idea de
que ciencia equivale a
biotecnología, paquetes
tecnológicos y
transgénicos,
despreciando los saberes
agrarios locales como
“no científicos”.*

Campesinos vs. Cowboys del carbono. Como parte de este escenario, la FAO ha planteado también la necesidad de vincular REDD+ a la agricultura, dado su rol como vehículo de la deforestación, y construir un “enfoque de paisaje integrado”. Según Econexus, la FAO y el Banco Mundial “buscan utilizar este ‘enfoque de paisaje’ como principio guía para diferentes fondos en el mercado de carbono, MDL [y] el nuevo Fondo Verde del Clima”¹⁰.

Utilizar la “agricultura verde” como fuente potencial de bonos de carbono es un estímulo para el precario mercado de carbono, al mismo tiempo que intensifica las preocupaciones respecto del acaparamiento de tierras. Al igual que los mecanismos REDD, la creación de derechos de carbono genera conflictos alrededor de los derechos sobre la tenencia de la tierra, en un escenario donde pequeños propietarios o pueblos indígenas se verán confrontados con grandes mercaderes de carbono en caso de que los proyectos no funcionen como se espera y éstos busquen garantizar sus inversiones exigiendo las tierras como contrapartida. Serán afectados además en su control y decisión sobre la tierra, la tecnología y el tipo de producción que realizan.

Todos los ojos sobre África. En los meses previos a Durban, la Unión Africana y el gobierno de Sudáfrica llevaron adelante una agresiva campaña promoviendo la necesidad de un programa sobre agricultura en el marco del CMNUCC, presentando un documento llamado “Oportunidades y Desafíos para una Agricultura Climáticamente Inteligente en África” producido por la FAO y el Banco Mundial, junto al PNUMA y el PMA.

Cuatro meses después de la COP17 el mismo periódico *The Guardian*, promocionó la aparición del Reporte del Panel Montpellier llamado *Creciendo con resiliencia: oportunidades para la agricultura en África*. El informe propone formas de desarrollar la “intensificación sostenible” de los rendimientos de los cultivos y productos agrícolas, lo que sus redactores identifican como uno de los mayores desafíos que enfrenta África, y recomienda que los gobiernos africanos trabajen con el sector privado para lograr la resiliencia y la sostenibilidad mediante la construcción de la agricultura inteligente climáticamente.

El presidente del Panel Montpellier plantea: “Lo que estamos hablando es, básicamente, conseguir más por menos. [...] La modificación genética no es una bala mágica pero, sin duda, jugará un papel, en parte como una manera de lidiar con las plagas y problemas de enfermedades que arriesgan aniquilar la producción de alimentos en el África subsahariana”.¹¹

En abril, un mes después, se hizo pública la iniciativa conjunta de la Comisión Europea y la FAO para promover la agricultura climáticamente inteligente en África¹², recogiendo las orientaciones del Reporte 2010 del mismo Panel Montpellier: “África y Europa: Alianzas para el Desarrollo Rural”, donde promovían un enfoque de “Agriculture 4 Impact” (agricultura de impacto), primer ensayo del concepto de “Climate Smart”.

Lobby transgénico. El Panel Montpellier está integrado no sólo por científicos y representantes de la Comisión Europea, sino también por representantes de la Alianza por una Revolución Verde en África (AGRA), una coalición que desde hace más de una década agencia con fondos privados y de la cooperación internacional, una política de implementación de la revolución verde “como instrumento de lucha contra el hambre y la pobreza”.

Uno de los principales actores en AGRA es la Fundación Bill & Melinda Gates, que lleva adelante un intenso lobby con los gobiernos africanos para crear —con su apoyo— una institucionalidad en el ámbito agrario que implemente desde lo público las políticas de la revolución verde, así como la investigación aplicada en biotecnología agraria para los agricultores¹³. Además financia un sinnúmero de proyectos que viabilizan la masificación de los transgénicos en

¹⁰ Paul, Helena. “Why we should continue to oppose the inclusion of agriculture in the climate negotiations”. Econexus, Febrero 2012.

¹¹ <http://www.guardian.co.uk/global-development/2012/mar/21/expert-report-agricultural-resilience-africa>

¹² <http://www.worldwatch.org/un-fao-and-european-commission-promote-%E2%80%99Climate-smart%E2%80%99D-agriculture>

¹³ <http://www.twinside.org.sg/title2/par/Unmasking.the.green.revolution.pdf>

África, como la iniciativa WEMA (Water Efficient Maize for Africa) a través de la cual se están ensayando maíces transgénicos con resistencia a la sequía en Kenia, que poseen genes patentados y donados por Monsanto, y que serán distribuidos a los agricultores en el continente.

Cabe remarcar a esta altura, que la sección de “Global Development” del periódico *The Guardian*, que ha funcionado como cartelera de muchas de estas iniciativas, es también financiado por la Fundación Bill & Melinda Gates.

Revolución verde + economía verde.

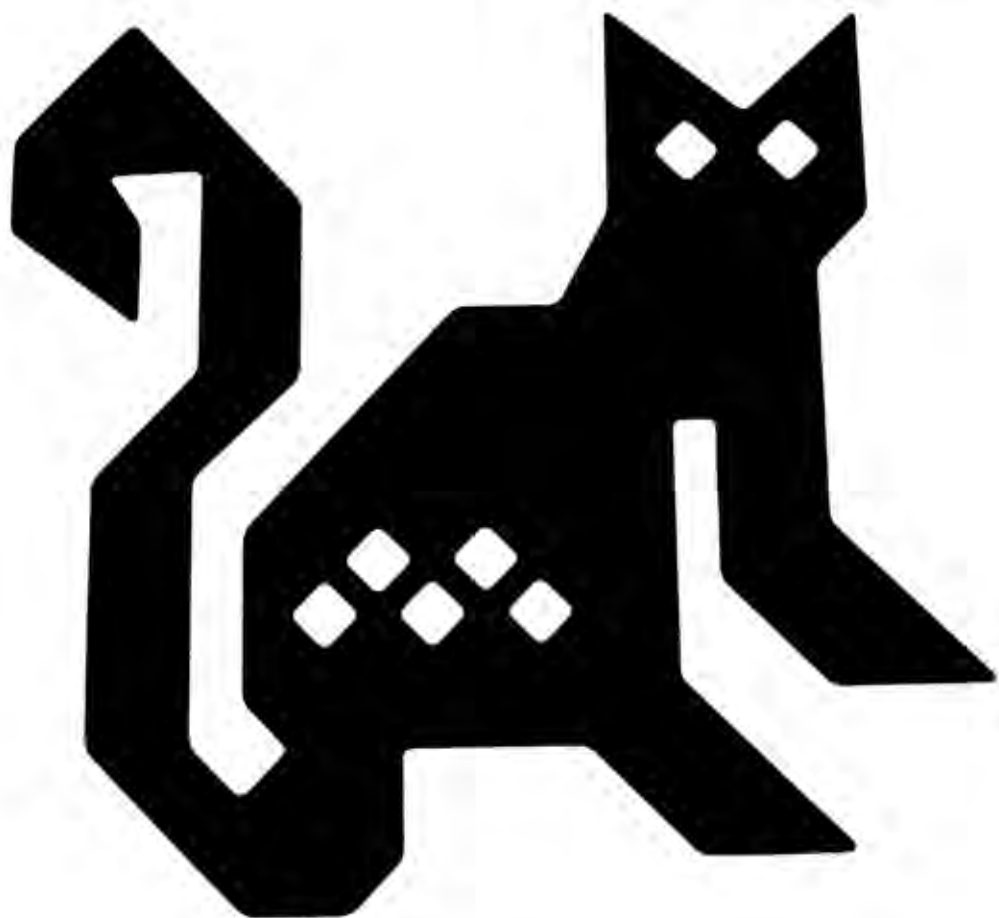
El Grupo de Expertos sobre el Uso de la Agricultura Verde para el Estímulo del Crecimiento Económico y la Erradicación de la Pobreza, fue convocado en octubre de 2011 por el Secretariado de Río+20 y el gobierno de Israel, para contribuir a la preparación de la Cumbre. En esta reunión Hans R. Herren, presidente del Instituto Millenium¹⁴, planteó con mucha claridad el diagnóstico: la Revolución Verde es una gran parte del problema del cambio climático y de la pobreza: alto consumo de agua, erosión de la agrobiodiversidad y los suelos, concentración de la producción y enormes desperdicios. Y propuso una vía verde para la agricultura como instrumento fundamental del cambio de paradigma: agricultura orgánica, agroecológica, resiliente y sustentable... ¿donde la biotecnología moderna, juegue un rol fundamental!

¿Éste es el horizonte de la agricultura en la economía verde? No es sorprendente entonces encontrarnos que en el discurso del Consejo Mundial de Negocios Sustentables (partero de las Mesas Redondas Sustentables, los negocios inclusivos, etcétera), se proclame como “visionario” el intento de hacer confluir la agricultura orgánica con la ingeniería genética¹⁵.

La concepción de la agricultura en la economía verde, de la agricultura “inteligente”, parece tratarse justamente de ello, la capacidad de incorporar la biotecnología moderna a las formas de producción campesinas, incluso la agroecológica y orgánica. A nuestros ojos, la *Revolución Verde*². ¡La Revolución Verde potenciada!

Río+ 20, cambios en el discurso y nuevos desafíos para los movimientos sociales.

La incorporación que hace el capital de los conceptos vinculados a la producción campesina como sustento de la soberanía alimentaria y como eje de lucha contra el cambio climático, contruidos por los movimientos sociales, no es sino un proceso de expropiación de la forma del discurso y vaciamiento de su contenido político. De este modo, la industria biotecnológica se desmarca de la polarización ya problematizada en la conciencia de la gente entre el agronegocio y la soberanía alimentaria, entre el monocultivo y la agrobiodiversidad, constru-



La concepción de la agricultura en la economía verde, de la agricultura “inteligente”, parece tratarse justamente de ello, la capacidad de incorporar la biotecnología moderna a las formas de producción campesinas, incluso la agroecológica y orgánica. A nuestros ojos, la Revolución Verde². ¡La Revolución Verde potenciada!

¹⁴ <http://www.millennium-institute.org/>

¹⁵ <http://www.wbcsd.org/Pages/eNews/eNewsDetails.aspx?ID=11468&NoSearchContextKey=true>

yendo una estrategia política que le permite presentar su proyecto tecnológico para la agricultura como *instrumento para* una vía campesina y la soberanía alimentaria. Lo que podríamos llamar la iniciativa de “greenwash” más ambiciosa hasta ahora vista.

Esto además construye un escenario donde asumir las premisas de la economía verde permite a los Estados incorporar la *revolución verde*² como política pública sin confrontar con los sujetos campesinos e indígenas que históricamente se han resistido a asumir la vía biotecnológica y han frenado el avance del agronegocio, pues la forma de su discurso no tiene contradicciones evidentes. Todo lo contrario: se coloca a la agricultura campesina en el centro de las políticas globales de mitigación y adaptación al cambio climático y para alimentar al mundo; se exige mayor inversión de infraestructura, investigación y mercados al servicio de la agricultura campesina; se prometen políticas efectivas para apoyar a las agriculturas campesinas afectadas por las condiciones climáticas extremas. Todas demandas incluidas en el programa campesino.



Foto: María Rivasés

Está planteado el desafío para los movimientos sociales de leer adecuadamente el escenario. Si bien el Documento Cero¹⁶ coloca como eje prioritario a la agricultura sustentable, y que se han logrado avances importantes en el posicionamiento de la FAO sobre soberanía alimentaria, es fundamental poner estos elementos a contraluz de la estrategia política de la industria, para poder construir las propias de manera efectiva.

Tenemos que comprender también que la complejización de la disputa política es producto del avance de las luchas de campesinos y campesinas en todo el mundo. Por ello, hoy más que nunca, es preciso radicalizar las propuestas indígenas y campesinas, y desenmascarar al capital.

¹⁶ Documento base de los acuerdos que se alcanzarán en la Cumbre Rio+20

Agricultura climáticamente inteligente: ¿qué hay detrás?

Maureen Santos
FASE – Núcleo Justicia Ambiental y Derechos



IOI

Foto: Jerónimo Palomares

En las discusiones internacionales sobre cambio climático, y más recientemente en las negociaciones en el ámbito de la UNFCCC (siglas en inglés de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático), uno de los grandes temas del momento es la agricultura como una de las formas de mitigación de los gases con efecto de invernadero (GEI).

La temática agrícola surgió primeramente en las negociaciones relacionadas con la adaptación a los impactos del cambio climático en los sistemas agroalimentarios mundiales y, en especial, ante la necesidad de buscar una transición en los sistemas agrícolas para adaptarlos a los cambios por venir. En una de las Conferencias de las Partes (COP), fueron aprobadas decisiones como la creación del Programa de Trabajo de Nairobi sobre impactos, vulnerabilidad y adaptación, que incluye a la agricultura como una de las áreas del mismo.

Desde que se iniciaron las negociaciones climáticas, la adaptación siempre recibió poca atención y fue puesta en segundo o tercer plano, no como preocupación fundamental entre las cuestiones relativas a la crisis climática y sus impactos, especialmente en países donde existen pre-condicionantes socio-ambientales muy

graves. Con la creación del Programa de Trabajo de Nairobi y con sus resultados, en el 2007 en la COP 13, apareció el tema con más fuerza al ser incluido en el Plan de Acción de Bali, en los documentos de las negociaciones del Grupo de Trabajo de Cooperación de Largo Plazo (AWG-LCA).

Una explicación obvia de la ausencia de foco para la adaptación (al revés de su “prima” la mitigación) es que para que los países del Sur se adapten a los cambios provocados por el calentamiento global, los países del Norte deberían financiar los programas relativos reconociendo las “responsabilidades comunes pero diferenciadas”. O sea, gastar plata en adaptación vez de crear oportunidades de lucro con las soluciones propuestas para combatir el problema climático, en su mayoría vinculadas a la mitigación.

102



Foto: Antonio Herrera

La receta presentada ahora es la de juntar *inteligentemente* la mitigación, que es donde entra la plata, con la adaptación y vulnerabilidad, que es donde se debe gastar plata. Buscan unir estos conceptos a otros como la resiliencia y la prevención. En principio no hay ningún problema con la unión de los conceptos, al contrario. Una mirada holística sobre la cuestión, entendiendo la mitigación, la resiliencia y la prevención como parte de la adaptación es importante para no percibir el cambio climático como un hecho consumado donde no hay otra salida que adaptarse. Pero también deberían mirarse las causas y posibles consecuencias del problema para evitar que ocurra, y en caso de que ocurra, tener tiempo suficiente para actuar buscando una transición hacia un nuevo modelo de desarrollo socialmente más justo y ecológicamente equitativo, y a partir de allí adaptarse.

Además, mitigar, o sea reducir las emisiones de gases con efecto de invern-

dero, es fundamental para llegar a cumplir los objetivos de mantener el calentamiento global en niveles seguros antes de llegar a un punto donde no habrá más retorno. En eso, la agricultura tiene un rol muy importante ya que contribuye directamente con un 11 a 15% de las emisiones globales de GEI debido al uso de fertilizantes, de maquinaria pesada basada en la utilización de los combustibles fósiles y por las emisiones de la ganadería, además de su contribución en los cambios en el uso del suelo y deforestación que contabilizaría un 15 a 18% más de las emisiones globales.¹

Es en la instrumentación de las propuestas mencionadas donde se encuentran los peligros. Si pensamos que la mayoría de las soluciones propuestas en el marco de UNFCCC siguen teniendo la primacía mercadológica, ¿de qué forma piensan un modo de financiar una adaptación para la agricultura, como parte de mecanismos financieros que prevea la compensación? ¿Cómo incluir la agricultura en las negociaciones como un tema importante? Su propuesta es la llamada “Agricultura climáticamente inteligente” (*climate smart agriculture*, en inglés).

La FAO, con apoyo del Banco Mundial, publicó a fines del 2010 un informe² sobre el tema. A pesar de que no queda clara una definición formal del término en el citado informe, la propuesta que hacen es una agricultura resistente al cambio climático con vistas a garantizar la seguridad alimentaria, promoviendo que los suelos y los cultivos sean menos vulnerables a las sequías, lluvias y al aumento general de la temperatura. Plantean también que la agricultura puede ser utilizada para absorber el CO₂ de la atmósfera, por su potencial de compensar carbono. Ofrecen a los productores locales financiamiento para hacer que sus suelos puedan ser más resistentes y productivos y al mismo tiempo puedan utilizar los mismos para capturar carbono y transformar esto en créditos para vender a las empresas contaminantes —no solamente de la agricultura industrial, sino también de otros sectores, como ya ocurre con los créditos vendidos a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) para compensar las emisiones de los países desarrollados.

Vale la pena preguntarse: si la agricultura es uno de los sectores que más emiten GEI, antes de pensar en cualquier posibilidad de capturar carbono de otros sectores ¿no deberían profundizarse medidas para reducir las emisiones del sector y cambiar los sistemas de producción agrícola para incrementar la seguridad alimentaria? Pese mostrar muchos ejemplos de buenas iniciativas y prácticas como la agroecología y la agroforestería, parece que la idea central no es ésa, sino una vez más converger todo en la “carbonización de la discusión climática” o peor, utilizar los sistemas alternativos de la agricultura familiar y campesina e incluir en ellos los cálculos de carbono y su esfera de mercado global.

Un ejemplo de esto es la utilización de la agroecología y la agroforestería en relación con abonos verdes, la utilización más eficiente del agua y los cuidados del suelo como parte de la llamada intensificación sustentable, uno de los ejemplos de *climate-smart agriculture*.

La cosa se complica aún más al adentrarnos en los mecanismos financieros propuestos. En este caso se propone de todo, desde las ya conocidas asociaciones público-privadas, fuentes innovadoras de financiamiento como la tasación del carbono, una emisión de bonos, permisos de emisiones en los esquemas de *cap-and-trade* y subsidios públicos. Se plantea también la posibilidad de un mercado global de créditos de carbono provenientes de la mitigación agrícola y de la creación de seguros y reaseguros agrícolas que combinarían acciones de riesgo sobre las potenciales pérdidas debidas a catástrofes climáticas.

El Mecanismo de Desarrollo Limpio no incluye el secuestro de carbono del suelo, que es la principal propuesta de la iniciativa del *climate-smart*, ni tampoco la agricultura como tal, pero sí existen proyectos de agrocombustibles basados en

Desde que se iniciaron las negociaciones climáticas, la adaptación siempre recibió poca atención y fue puesta en segundo o tercer plano, no como preocupación fundamental entre las cuestiones relativas a la crisis climática y sus impactos, especialmente en países donde existen pre-condicionantes socio-ambientales muy graves.

103

¹ GRAIN. Food and climate change: the forgotten link.

² FAO. Climate Smart Agriculture. Policies, Practices and Financing for Food Security, Adaptation and Mitigation. Rome, 2010.



Foto: Jerónimo Palomares

el uso de residuos agrícolas para producción de agroenergía, como los relacionados a la ganadería. A pesar de que la propuesta de agricultura climáticamente inteligente parece responder a problemas sobre la base de los actuales mecanismos existentes, sería especialmente inadecuado para la agricultura entrar como parte del MDL, porque el mecanismo no es efectivo para una transformación de la economía de los países en desarrollo y tiene altos costos de transacción. “Por otro lado, insisten en que el financiamiento agrícola podría aumentar hasta cinco veces su valor si estuviese vinculado al mercado de carbono además del secuestro de carbono. Algunas de las salidas propuestas serían el pago por servicios ambientales; además, el secuestro de carbono es visto como una nueva revolución verde dentro del paquete de la economía verde (que ya está presente dentro del Fondo de Biocarbono del Banco Mundial).

Es muy necesario que plantear con profundidad estas discusiones en la agenda de las organizaciones y movimientos sociales, que la agricultura entre con más fuerza en las negociaciones de clima y que se discuta la agricultura “climáticamente inteligente”. Río+20 será el palco en que muchas de estas experiencias sobre el rol de la agricultura inteligente serán presentadas y difundidas, promoviendo que la agricultura sea uno de los pilares de la economía verde.

Resistir a que la agricultura sirva como nuevo oro verde para las falsas soluciones a la crisis climática es primordial para que no se promuevan nuevos mecanismos que tendrán fuerte impacto en el modo de vida de los agricultores/as familiares y campesinos/as y sus territorios. Además sus verdaderas soluciones no deben ser usurpadas y transformadas en nuevos mercados de carbono que fortalezcan las especulaciones y el libre juego del mercado financiero ni pretendan “compensar” la suciedad global de los grandes contaminadores del mundo.

Las corporaciones asaltan la Naturaleza y a los pueblos (nuevamente)

Grupo ETC

105

Al contrario de lo que pretende sugerir su nombre, la “economía verde” no es una nueva economía más “ecológica”. Es otra fase del mismo proceso de acumulación capitalista. Nada en la “economía verde” cuestiona o sustituye la economía basada en el extractivismo y los combustibles fósiles, ni sus patrones de consumo y producción industrial, sino que extiende la economía explotadora de la gente y el ambiente a nuevos ámbitos, alimentando el mito de que es posible un crecimiento económico infinito.

Quienes se favorecen son las mismas empresas transnacionales que han provocado y lucrado con las crisis ambientales, alimentarias, climáticas, financieras. Se trata de una “súper entidad global” que ejerce un dominio enorme sobre mercados, producción y políticas nacionales e internacionales.

Únicamente 147 empresas, todas interconectadas, controlan el 40 por ciento del volumen total de ventas de todas las transnacionales del globo. La inmensa mayoría son bancos e intermediarios financieros, que a su vez tienen un importante porcentaje de acciones en las mayores empresas de capital productivo.¹ De 43 mil empresas ubicadas en 116 países, 737 concentran el 80 por ciento de las ventas de todas las transnacionales. Pero a nivel de conexiones hay un núcleo de mil 318 empresas que tienen dos o más interconexiones, con un promedio de 20 vínculos entre sí. Estas mil 318, con sede en 26 países, mayoritariamente anglosajones, controlan el 60 por ciento de los ingresos globales, a través de acciones en empresas globales de manufactura, energía y otros rubros básicos. Ésta es información clave para entender las políticas “públicas” que se promueven frente a las crisis financiera, alimentaria, climática, ambiental.

Sin tocar ni la especulación financiera que causó la crisis, ni los nocivos modelos de consumo y de producción contaminantes (bases de la civilización petrolera y de la devastación ambiental y climática), esta súper entidad corporativa promueve nuevas fórmulas para aumentar y legalizar los mercados financieros con la naturaleza (mercados de carbono, de servicios ambientales, de biodiversidad, etcétera) y más explotación de naturaleza y recursos a través de nuevas tecnologías para procesar la biomasa. Irónicamente, a estos paquetes de subsidio a corporaciones abriendo nuevas fuentes de mercantilización de la naturaleza (y sus funciones para aumentar las ganancias con supuestos remedios a las crisis que ellas mismas provocaron), le llaman “economía verde”. O como dijo Obama, se trata de un “nuevo acuerdo verde”, donde todos ganaremos. Claro que las ganancias están siempre referidas a los mismos: a esa red corporativa que tiene entre sus tentáculos al planeta y a la gente.

Mitos y falsas promesas: de la biotecnología a la biología sintética. Durante la década de los setenta las compañías petroquímicas y farmacéuticas (de la veterinaria a la salud humana)² tomaron control de miles de pequeñas empresas fami-

Únicamente 147 empresas, todas interconectadas, controlan el 40 por ciento del volumen total de ventas de todas las transnacionales del globo. La inmensa mayoría son bancos e intermediarios financieros, que a su vez tienen un importante porcentaje de acciones en las mayores empresas de capital productivo. De 43 mil empresas ubicadas en 116 países, 737 concentran el 80 por ciento de las ventas de todas las transnacionales.

¹ Ver *The Network of Global Corporate Control* de Stefania Vitali, James B. Glattfelder y Stefano Battiston, del Instituto Federal de Tecnología de Suiza (publicado en la revista científica *PLoS ONE* el 26/10/11). El estudio analiza las redes corporativas globales y las relaciones entre ellas, para lo cual se basan en la interpretación de información de la base de datos Orbis al 2007, que registra más de 30 millones de actores económicos en el mundo.

² Por ejemplo Royal Dutch/Shell, Occidental Petroleum, Ciba-Geigy, Union Carbide, Upjohn Pharmaceutical

La concentración corporativa en el sector de semillas comerciales representó una dramática pérdida de diversidad genética a medida que las compañías sólo ofrecían para la venta las líneas genéticas de las semillas más rentables, al tiempo que desechaban el resto.

liares de semillas. Para los años ochenta había emergido ya una autodenominada “industria de la vida” —semillas, agroquímicos, fármacos— que se entretrejió cada vez más con el desarrollo y la comercialización de biotecnologías patentadas (la ingeniería genética). La concentración corporativa en el sector de semillas comerciales representó una dramática pérdida de diversidad genética a medida que las compañías sólo ofrecían para la venta las líneas genéticas de las semillas más rentables, al tiempo que desechaban el resto. Los regímenes de propiedad intelectual —patentes y derechos de los obtentores— rápidamente se expandieron a todos los productos y procesos biológicos, a la vez que recompensaban la uniformidad. Con la privatización de la industria de semillas, comenzaron a desaparecer los programas públicos de producción semillera, reforzando la consolidación corporativa en ese ramo y en el de agroquímicos. Durante los noventa, la industria de la vida fue marcada por un impresionante número de fusiones y adquisiciones.

Hacer el seguimiento continuo de las fusiones y adquisiciones corporativas arroja mucha luz sobre el poder de las corporaciones. Este tipo de operaciones significan grandes cantidades de dinero cambiando de manos, pero las implicaciones derivadas de estos movimientos de capital no se entienden si se miran aisladamente. La motivación por expandir los mercados no funciona por sí sola, se necesitan tecnologías específicas para hacer realidad la convergencia de sectores y ganancias.



Foto: Jerónimo Palomares

Hoy día bien podemos estar en la cúspide del emprendimiento corporativo y tecnológico más descarado y ambicioso hasta la fecha, paradójicamente bajo el nombre de “economía verde”.

El término *biomasa* hace referencia al material biológico no fosilizado que puede servir como materia prima para la manufactura de productos de base biológica. Implica un modo particular de pensar a la naturaleza: todo lo viviente es una mercancía aún antes de que ingrese al mercado.

Actualmente, muchos gobiernos, corporaciones, capitalistas de riesgo y algunas organizaciones no gubernamentales promueven las tecnologías, especialmente la biología sintética, que harán posible convertir la biomasa en productos comerciales. Alegan que, en la actualidad, menos de una cuarta parte de la biomasa terrestre que se reproduce anualmente llega al mercado, dejando atrás las otras tres cuartas partes, principalmente en el Sur global, ya suficientemente maduras para convertirse en mercancía verde y listas para ser cosechadas. La tierra cultivable, las materias primas a granel, los minerales metálicos y no metálicos extraídos del subsuelo y, ahora también, el material vegetal genérico en calidad de reserva de biomasa, son el ingrediente principal en las apuestas de fusiones y adquisiciones corporativas en la era de la economía verde. Esos mismos promotores de la bioeconomía también buscan establecer nuevos mecanismos para permitir la cuantificación y la mercantilización de los procesos naturales de la Tierra, rebautizados ahora como “servicios ambientales”: los ciclos del carbón, de los nutrientes del suelo y del agua. Es la expansión de la industria sobre todos los ciclos vitales.

A medida que se desarrolló el siglo veinte, las sustancias petroquímicas y sus tecnologías asociadas desplazaron a la agricultura como base de la economía, pero en el siglo veintiuno podríamos presenciar el retorno de la preeminencia de la agricultura. No obstante, la visión actual es la de una agricultura “transformadora”, en la que tanto los insumos (materias primas) como los productos, son prediseñados para usos industriales específicos. Según esta visión, en el futuro los cultivos comerciales serán productos patentados y diseñados a la medida para cubrir las necesidades de los procesadores industriales de la biomasa, sea para alimentos, energía, materiales o fármacos.

En las décadas de los setenta y ochenta, se esperaba que el cultivo de tejidos y la biofermentación “fabricaran” las partes comercialmente valiosas de las plantas (frutos, nueces o granos) o los compuestos químicos únicos asociados a ellas (sabores, aromas, etcétera). Las empresas de la biotecnología estaban entusiasmadas con la perspectiva de eliminar a los agricultores y las tierras de cultivo y borrar el clima y la geografía como factores de la producción. El café, el té, el cacao, la vainilla, las hierbas medicinales y, tal vez algún día, hasta los granos y los vegetales, serían cosechados en las fábricas de Chicago o Hamburgo. La comida sería fabricada por demanda y en el lugar, con un gasto mínimo de energía, dado que sólo los las partes destinadas al consumo final de las plantas serían producidas.

El entusiasmo estaba respaldado por un “sólido conocimiento científico” basado en el hecho de que cultivos de las “células madre” de las plantas mostraban que ello era técnicamente posible. Las publicaciones de la industria abundaban en fotografías a todo color de frijoles y bebidas de probeta. Pero no funcionó. La vida demostró ser más compleja. Para el momento en que se efectuó la Cumbre de la Tierra en 1992, este tipo de biotecnología estaba siendo archivado y las empresas estaban de vuelta en los campos de cultivo y en los laboratorios realizando el trabajo comparativamente más monótono de desarrollar cultivos de diseño por ingeniería genética tolerantes a herbicidas que incrementarían las ventas de sus agroquímicos patentados.³

En los últimos años hemos visto el surgimiento de la biología sintética, que comenzó como una ciencia periférica o marginal —un híbrido de la ingeniería y la programación computacional, más bien separada de la biología— y es hoy un sector de gran interés para la industria y que atrae grandes inversiones. Señales de su consolidación y del crecimiento de su mercado son las inversiones estratégicas

En el siglo veintiuno podríamos presenciar el retorno de la preeminencia de la agricultura. No obstante, la visión actual es la de una agricultura “transformadora”, en la que tanto los insumos (materias primas) como los productos, son prediseñados para usos industriales específicos. Según esta visión, en el futuro los cultivos comerciales serán productos patentados y diseñados a la medida para cubrir las necesidades de los procesadores industriales de la biomasa, sea para alimentos, energía, materiales o fármacos.

107

³ Consúltense los archivos del Grupo ETC para descargar los informes (*RAFI Communiqué*) sobre las tecnologías y las empresas: <http://www.etcgroup.org/en/archives>.

y las asociaciones entre compañías ya establecidas de energía, químicas y farmacéuticas con empresas especializadas en biología sintética. La biología sintética no es sino una serie de herramientas que se integra a muchos sectores industriales. Por ello, no es sencillo comprender su ámbito. La consultora BCC Research predijo una tasa de crecimiento anual del mercado de la biología sintética de casi 60%, para alcanzar un valor aproximado de 2 mil 400 millones de dólares hacia 2013.⁴



Así como ocurrió con la biofermentación hace un cuarto de siglo, ¿pasará mañana con la biología sintética, pilar de la nueva bioeconomía? El campo de la biología sintética ha eclipsado rápidamente al de los transgénicos. Con miles de millones de dólares de inversión pública y privada en los últimos años, la biología sintética promete convertir la biodiversidad natural en insumo para sus bichos patentados: algas y microbios “a la medida”, que se comporten como “fábricas biológicas”; organismos de diseño que serán utilizados para transformar la celulosa de las plantas en combustibles, sustancias químicas, plásticos, fibras, fármacos e incluso alimentos —dependiendo de la demanda del mercado al momento de la cosecha. Para los nuevos “magnates de la biomasa” la biología sintética es la ruta a una nueva fuente de ingresos, un complemento “verde” a la producción basada en el consumo de petróleo, o bien, su posible remplazo en un futuro incierto. Todo lo que los gobiernos y la sociedad deben hacer es dejarles adquirir derechos de propiedad (patentes) sobre múltiples genomas, y dejarles acaparar las tierras y la biomasa y poner su futuro en manos de una industria que ya fracasó anteriormente. ¿Acaso la vida volverá a demostrar que es un poco más compleja?

La crisis del clima es un factor de ganancias. El “chantaje” sobre la urgencia de revertir el cambio climático es importante para justificar la bioeconomía. Indudablemente es necesario revertir el cambio climático, pero cambiando sus causas, no usando más de las mismas tecnologías y patrones de producción contaminante. El chantaje consiste ahora en anunciar que solamente las corporaciones, con su poderío tecnológico y su ejército de científicos e instalaciones de vanguardia pueden enfrentar tal desafío.

Un ejemplo clásico de las falsas promesas de una economía pintada de verde son los combustibles agroindustriales, que se inventaron bajo el pretexto de sustituir los combustibles fósiles y así reducir las emisiones de gases contaminantes

⁴ BCC Research, resumen de “Synthetic Biology: Emerging Global Markets”, junio de 2009. Disponible en Internet: <http://www.bccresearch.com/report/BIO066A.html>

resultado de la combustión de hidrocarburos, y así, combatir el calentamiento global. Ya en 2006, 14 millones de hectáreas (1%) de toda la tierra arable estaba usándose para la producción de combustibles agroindustriales,⁵ que resuelven solamente el 0.5 por ciento de la energía para necesidades primarias a nivel global.⁶ A la vuelta de muy pocos años, hemos visto que la combustión de biomasa puede liberar cantidades de dióxido de carbono aún mayores que la combustión de recursos fósiles, porque el material vegetal tiene una densidad menor de energía. Los nuevos gases no se absorberán con la rapidez necesaria para impedir un aumento de las temperaturas globales, y, tal vez lo más crucial, la competencia por tierras y agua para cultivar biomasa para combustible ya agudizó la crisis de producción de alimentos como vimos durante el auge del etanol de maíz en 2008. Urge la transferencia de la tierra ocupada en producción de biocombustibles a los 4 millones 600 mil campesinos sin tierra o campesinos empobrecidos que podrían duplicar potencialmente la producción agrícola (el tamaño de la parcela promedio en África y Asia es ahora de 1.6 hectáreas)⁷.

Otra promesa en ciernes es el desarrollo de cultivos resistentes a las desventajas del clima. En 2008 presenciamos el furor de las empresas agroindustriales por monopolizar los rasgos de diseño genético y adaptación climática en los cultivos, rasgos que supuestamente hacen que los cultivos puedan soportar el estrés ambiental asociado con el calentamiento global, como las sequías, el calor, el frío, las inundaciones, la mayor salinidad de los suelos, etcétera. Entre junio de 2008 y junio de 2010, los gigantes genéticos y sus socios biotecnológicos presentaron al menos 261 “invenciones” relacionadas con los cultivos climáticos en las oficinas de patentes de todo el mundo, en busca de protección a su monopolio.⁸ El resultado, muy predecible según las posiciones de las compañías más poderosas del mundo en los sectores agropecuarios, es que tan sólo seis empresas (DuPont, BASF, Monsanto, Syngenta, Bayer y Dow) y sus socios biotecnológicos controlan el 77% de las 261 familias de patentes relacionadas con modificaciones genéticas para enfrentar el cambio climático.⁹

La tolerancia al estrés ambiental y los rasgos dirigidos a la elevación en el rendimiento en la producción de biomasa son el foco de atención principal de las actividades de investigación y desarrollo biotecnológico. El área con mayor actividad de solicitud de patentes es la de la tolerancia al estrés abiótico. Este oligopolio de seis empresas obstaculiza la innovación con fines sociales, fomenta el desperdicio de energía y promueve el uso de sus contaminantes químicos.

¿Planeta infinito? Las enormes concentraciones corporativas, la creación de la súper entidad de poder económico desde la cual se promueven como política pública los remiendos tecnológicos y los maquillajes verdes para continuar con la misma devastación del planeta, no puede avanzar si no es mediante el acaparamiento de las tierras y el agua. La producción de alimentos, forrajes y otras formas de biomasa vegetal —así como de otros recursos estratégicos como los minerales y la madera— constituye el principal impulso para el acaparamiento global de tierras. El control de los recursos hídricos es otro factor principal. Aunque los estudios no son exhaustivos, se estima que entre 50 y 80 millones de hectáreas de tierras en el Sur global han sido adquiridas por inversionistas internacionales, de las cuales dos terceras partes de las compras de tierras se han realizado en el África Subsahariana. Como mencionamos antes, para 2006, 14 millones de hectáreas —cerca del 1% del total de la tierra cultivable del mundo— era utilizada para la producción de combustibles agroindustriales. Un estudio calcula que, para el año 2030, entre 35 y 54 millones de hectáreas (esto es, entre 2.5 y 3.8% de toda la tierra cultivable) será empleada en su producción. Hay reconocimiento internacional creciente de que el acaparamiento de tierras, ya sea doméstico público o privado transfronterizo es destructivo del ambiente y de la seguridad alimentaria.

⁵ Comité sobre seguridad alimentaria mundial, (FAO), Roma: julio de 2011, p. 20: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE-Land-tenure-and-international-investments-in-agriculture-2011.pdf

⁶ British Petroleum, *BP Global Statistical Review of World Energy*, British Petroleum, junio de 2011.

⁷ Department of Economic and Social Affairs, *World Economic and Social Survey 2011: The Great Green Technological Transformation*, Nueva York: Naciones Unidas, 2011. En castellano, ver: <http://www.cinu.mx/minisio/wess/>

⁸ Grupo ETC, “Gigantes genéticos acumulan patentes sobre cultivos para enfrentar la crisis del clima” *Comunicado*, no. 106, octubre de 2010. En Internet: <http://www.etcgroup.org/es/node/5252> <http://www.etcgroup.org/en/node/5221>.

⁹ Ibidem.



Foto: Jerónimo Palomares

Los aproximadamente 80 millones de hectáreas de tierra involucrada en esas transacciones deben ser accesibles a los campesinos y podrían convertirse en 26 millones 700 mil parcelas de aproximadamente tres hectáreas cada una.

¹⁰ C. Nellemann, M. MacDevette, T. Manders, B. Eickhout, B. Svihus, A.G. Prins, B.P. Kaltenborn, editores, *The Environmental Food Crisis – The Environment's role in averting future food crises – A UNEP rapid response assessment*, United Nations Environment Programme (GRID-Arendal), febrero de 2009: www.grida.no.

¹¹ Rattan Lal, "Soil erosion impact on agronomic productivity and environment quality," *Critical Reviews in Plant Sciences*, vol. 17, núm. 4, 4 de Julio de 1998, pp. 319-464, en castellano: <http://www.cinu.mx/minisitio/wess/>

¹² Group ETC, "¿De quién es la naturaleza? El poder corporativo y la frontera final en la mercantilización de la vida" *Comunicado #100* del Grupo ETC, noviembre de 2008: <http://www.etcgroup.org/en/node/709>

¹³ Len Berry, Jennifer Olson y David Campbell, "Assessing the extent, cost and impact of land degradation at the national level: findings and lessons learned from seven pilot case studies," en Department of Economic and Social Affairs, *Op Cit*.

¹⁴ Grupo ETC, *¿Quién controlará la economía verde?* <http://www.etcgroup.org/es/node/5298>, 2011.

Una economía verde desde los pueblos. En realidad, se requieren políticas sólidas, no promesas de ciencia ficción, para enfrentar las necesidades de la humanidad. El "arreglo tecnológico" es una idea seductora, pero peligrosa, porque animará una mayor convergencia del poder corporativo y desatará una serie de tecnologías de eficacia no probada pero, eso sí, patentadas, en los territorios de las comunidades locales que no han sido consultadas sobre —ni están preparadas para— enfrentar sus impactos.

Las composturas tecnológicas no son capaces de afrontar los problemas sistémicos de las crisis de pobreza, del hambre o la ambiental. Es imprescindible frenar el acaparamiento de tierras. Luchar contra la ficción de los combustibles agroindustriales. Promover una seguridad alimentaria real y factible: hoy, los cereales que se utilizan para alimentación animal podrían satisfacer las necesidades de más de 3 mil quinientos millones de personas.¹⁰ La cadena alimentaria industrial ocasiona una pérdida anual de cobertura vegetal de unos 75 mil millones de toneladas y le cuesta al mundo 400 mil millones de dólares.¹¹ Una oligarquía de 10 compañías globales de insumos agrícolas frena los buenos manejos de los suelos. Los sistemas campesinos de conservación de los suelos utilizan los microorganismos naturales para la fijación de entre 140 y 170 millones de toneladas de nitrógeno, equivalente a los fertilizantes químicos que se comprarían con 90 mil millones de dólares.¹² La utilización de técnicas campesinas podría incrementar el PIB agrícola entre un tres y un siete por ciento.¹³

Las diversificaciones en los mercados, si sólo fueran para el caso de las semillas, podrían reducir los precios en al menos un 30%, ahorrándoles a los campesinos

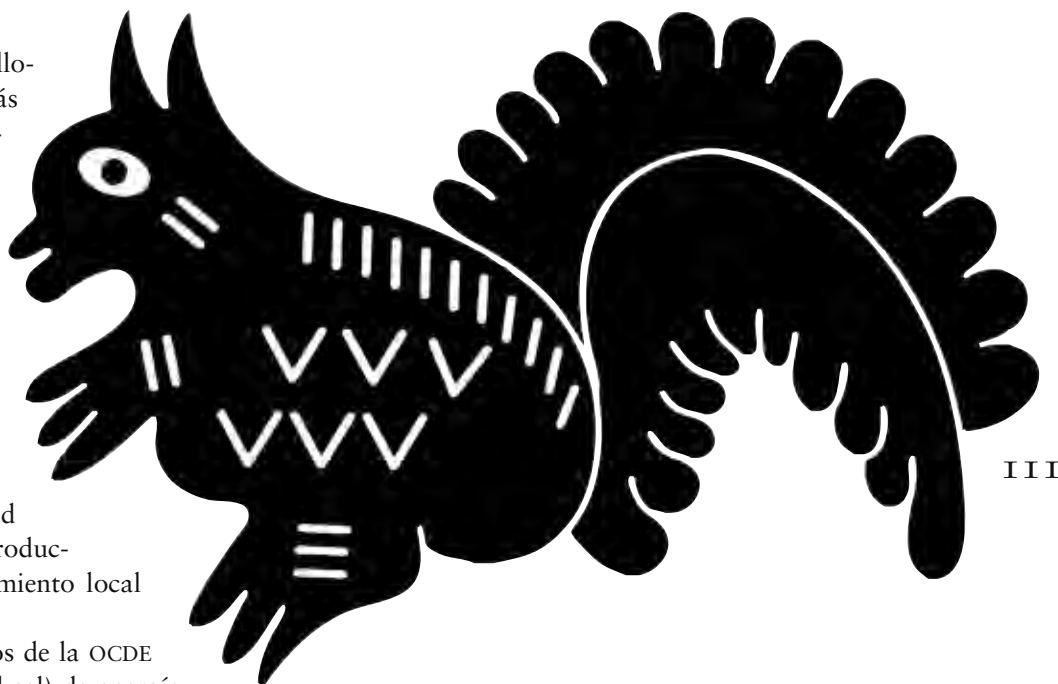
nos del mundo más de 9 mil millones de dólares por año.¹⁴ Los más grandes oligopolios de los supermercados controlan entre el 40 y el 50 por ciento del mercado de alimentos en América Latina, 10% en China, 30% en Sudáfrica y 50% en Indonesia.¹⁵ Los sistemas campesinos alimentan al 70% de la humanidad, incluyendo a los más vulnerables.¹⁶ Es imprescindible eliminar las prácticas oligopólicas, reducir la necesidad de procesamiento y apoyar la producción y distribución y almacenamiento local de los alimentos.

Hoy, en promedio, los estados de la OCDE usan hasta cuatro kilocalorías (kcal) de energía para producir una kcal de comida. Equiparar el consumo de energía de la cadena industrial alimentaria para que se equipare con la producción campesina promovería un ahorro masivo de combustibles fósiles y emisiones de gases con efecto de invernadero.¹⁷

Cinco corporaciones globales de alimentos y bebidas —Nestlé, Danone, Unilever, Anheuser-Bush y Coca-Cola— consumen suficiente agua para satisfacer los requerimientos domésticos diarios de agua de cada persona en el planeta.¹⁸ El agua necesaria para producir 65 millones de kilos de carne de res —la cantidad de carne que se retiró del mercado y tuvo que destruirse en Estados Unidos en 2008, debido a las violaciones a los lineamientos sanitarios— fue equivalente al agua necesaria para irrigar 100 mil hectáreas de tierras secas por un año.¹⁹ Los modelos de producción campesina que privilegian el consumo local desperdician poca o nada de agua.

Con una agricultura diversificada, con la ruptura de los monopolios, y un análisis y cuestionamiento real del uso energético de las distintas formas de agriculturas, las promesas de la economía “verde” se desmoronan. Por el contrario, existen ya muchas alternativas reales. La importancia de la agricultura y, especialmente, el papel de los campesinos y agricultores familiares, debe estar en el centro de cualquier discusión. Los agricultores en pequeña escala no sólo generan el 70% de la producción agropecuaria global, sino que sus acciones colectivas representan nuestra mayor esperanza para adaptarnos y mitigar la crisis climática. Es necesario cerrar la brecha entre la seguridad alimentaria, la agricultura y la política climática, mediante el apoyo a la soberanía alimentaria como marco general para enfrentar estos problemas, en contraste con el actual sistema agroindustrial, que propicia que los regímenes comerciales y las fuerzas del mercado dicten las políticas alimentaria y agrícola: la nueva economía verde.

El escenario parece abrumador, pero no olvidemos que el sistema que sostiene a estas redes de poder está en una profunda crisis y que por todas partes en el planeta aparecen movimientos que los denuncian y no están dispuestos a resignarse a seguir siendo víctimas. Son movimientos diversos y contradictorios, pero van convergiendo con las alternativas locales, campesinas, indígenas, que son las que sostienen, cuidan y dan de comer a la mayoría del planeta, mientras las corporaciones se empeñan en seguirlo explotando. El emperador sigue reinando, pero está sin ropas a la vista de todos, y tenemos que seguirlo denunciando, por más que ahora diga que está vestido de verde.



¹⁵ Department of Economic and Social Affairs, *World Economic and Social Survey 2011: The Great Green Technological Transformation*, (La gran transformación tecnológica basada en tecnologías verdes) United Nations, 2011, <http://www.cinu.mx/minisitio/wess/>

¹⁶ Grupo ETC *¿Quién nos alimentará?* 2009, p.1.

¹⁷ Pimental, David, "Energy Inputs in Food Crop Production in Developing and Developed Nations," *Energies*, 2(1), 2009, pp. 1-24: <http://www.mdpi.com/1996-1073/2/1>.

¹⁸ Steven Solomon, *Water - The Epic, Struggle for Wealth, Power, and Civilization*, HarperCollins, 2010.

¹⁹ Jan Lundqvist et al., "Saving Water from Field to Fork: Curbing Losses and Wastage in the Food Stream," *Draft for csd*, Stockholm International Water Institute, mayo de 2008.

Por la unidad y la movilización de los pueblos en defensa de la vida y los bienes comunes, la justicia social y ambiental, contra la mercantilización de la naturaleza y la “economía verde”

112

A un mes de la conferencia de Naciones Unidas Río+20, los pueblos del mundo no vemos resultados positivos del proceso de negociación que se está realizando en la conferencia oficial. Allí no se está discutiendo un balance del cumplimiento de los acuerdos tomados en Río 92 ni cómo cambiar las causas de las crisis. El foco de la discusión es un paquete de propuestas llamado engañosamente “economía verde” y la instauración de un nuevo sistema de gobierno ambiental internacional que lo facilite.

La verdadera causa estructural de las múltiples crisis es el capitalismo, con sus formas clásicas y renovadas de dominación, que concentra la riqueza y produce desigualdades sociales, desempleo, violencia contra los pueblos, criminalización de los que lo denuncian. El sistema de producción y consumo actual —representado por las grandes corporaciones, los mercados financieros y los gobiernos que garantizan

su mantenimiento— produce y profundiza el calentamiento global y la crisis climática, el hambre y la desnutrición, la pérdida de los bosques y la diversidad biológica y sociocultural, la contaminación química, la escasez de agua potable, el aumento de la desertificación de los suelos, la acidificación de los mares, el acaparamiento de tierras y la mercantilización de todos los aspectos de la vida en las ciudades y en el campo.

La “economía verde”, al contrario de lo que pretende sugerir su nombre, es otra fase del proceso de acumulación capitalista. Nada en la “economía verde” cuestiona o sustituye la economía basada en el extractivismo y los combustibles

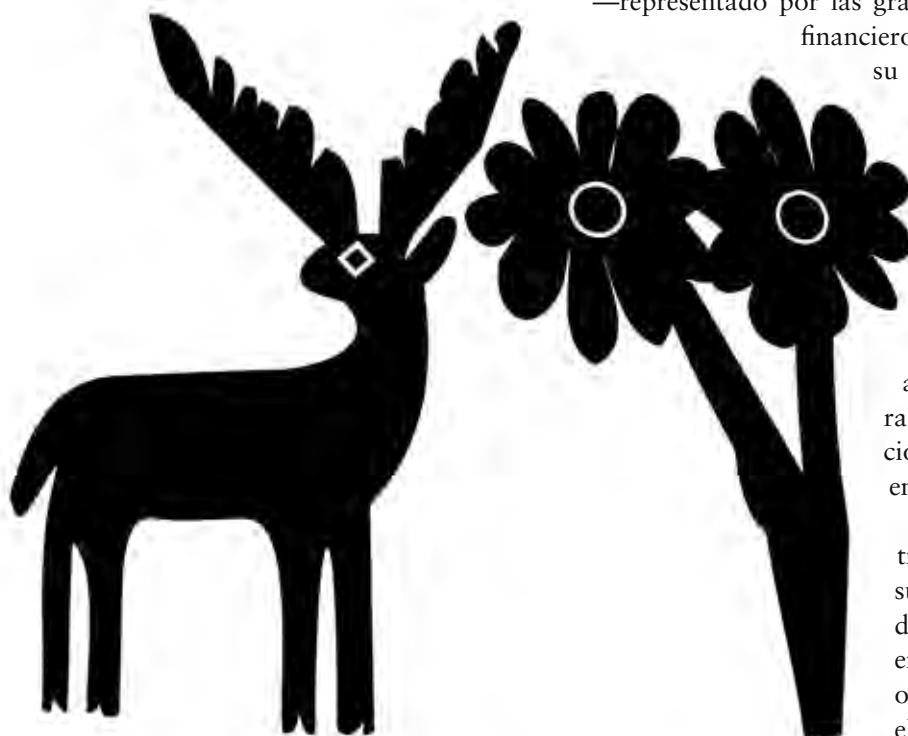




Foto: Antonio Herrera

fósiles, ni sus patrones de consumo y producción industrial, sino que extiende la economía explotadora de la gente y el ambiente a nuevos ámbitos, alimentando el mito de que es posible un crecimiento económico infinito.

El fallido modelo económico, ahora disfrazado de verde, pretende someter todos los ciclos vitales de la naturaleza a las reglas del mercado y al dominio de la tecnología, la privatización y mercantilización de la naturaleza y sus funciones, así como de los conocimientos tradicionales, aumentando los mercados financieros especulativos a través de mercados de carbono, de servicios ambientales, de compensaciones por biodiversidad y el mecanismo REDD+ (Reducción de emisiones por deforestación evitada y degradación de bosques).

Los transgénicos, los agrotóxicos, la tecnología *Terminator*, los agrocombustibles, la nanotecnología, la biología sintética, la vida artificial, la geoingeniería y la energía nuclear, entre otras, son presentadas como “soluciones tecnológicas” a los límites naturales del planeta y a las múltiples crisis, sin encarar las verdaderas causas que las provocan.

Además se promueve la ampliación del sistema alimentario agroindustrial, que es uno de los mayores factores causantes de las crisis climáticas, ambientales, económicas y sociales, profundizando la especulación con los alimentos, y favoreciendo los intereses de las corporaciones del agronegocio en desmedro de la producción local, campesina, familiar, de los pueblos indígenas y poblaciones tradicionales y afectando la salud de toda las poblaciones.

Como una estrategia de negociación en la conferencia Río+20, algunos gobiernos de países ricos están planteando un retroceso de los principios de Río 92, como el principio de responsabilidades comunes y diferenciadas, el principio de precaución, el derecho a la información y la participación, así como amenazando derechos ya consolidados, como los de los pueblos indígenas y poblaciones tradi-

Planteamos la afirmación y construcción colectiva de nuevos paradigmas basados en la soberanía alimentaria, la agroecología y la economía solidaria, la defensa de la vida y los bienes comunes, la afirmación de todos los derechos amenazados, el derecho a la tierra y territorio, el derecho a la ciudad, los derechos de la naturaleza y de las futuras generaciones, la eliminación de toda forma de colonialismo e imperialismo.

El fallido modelo económico, ahora disfrazado de verde, pretende someter todos los ciclos vitales de la naturaleza a las reglas del mercado y al dominio de la tecnología, la privatización y mercantilización de la naturaleza y sus funciones, así como de los conocimientos tradicionales, aumentando los mercados financieros especulativos a través de mercados de carbono, de servicios ambientales, de compensaciones por biodiversidad y el mecanismo REDD+ (Reducción de emisiones por deforestación evitada y degradación de bosques).

cionales, campesinos y campesinas, el derecho humano al agua, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de los migrantes, el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la ciudad, derechos de la juventud y de las mujeres, el derecho a la salud sexual y reproductiva, a la educación y derechos culturales.

Se intenta instalar unos llamados Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) que serán utilizados para promover la “economía verde”, debilitando aún más los ya insuficientes Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

El proceso oficial propone instaurar formas de gobierno ambiental mundial que sirvan como administradores y facilitadores de esa “economía verde”, dando protagonismo al Banco Mundial y otras instituciones financieras públicas o privadas, internacionales y nacionales, lo cual incentivará un nuevo ciclo de endeudamiento y de ajustes estructurales disfrazados de verde. No puede haber una gobernanza global democrática sin terminar con la actual captura corporativa de las Naciones Unidas.

Repudiamos este proceso y llamamos a fortalecer las movilizaciones y construcción de alternativas en todo el mundo.

Luchamos por un profundo proceso de cambio frente al actual modelo de producción y consumo, concretizando nuestro derecho a desarrollarnos con modelos alternativos, basados en las múltiples realidades y experiencias de los pueblos, auténticamente democráticos, respetando los derechos humanos y colectivos, en armonía con la naturaleza y con justicia social y ambiental.

Planteamos la afirmación y construcción colectiva de nuevos paradigmas basados en la soberanía alimentaria, la agroecología y la economía solidaria, la defensa de la vida y los bienes comunes, la afirmación de todos los derechos amenazados, el derecho a la tierra y territorio, el derecho a la ciudad, los derechos de la naturaleza y de las futuras generaciones, la eliminación de toda forma de colonialismo e imperialismo.

Llamamos a los pueblos del mundo a apoyar la lucha del pueblo brasileiro contra la destrucción de uno de los principales marcos legales de protección de los bosques (el Código Forestal) lo que abre caminos para una mayor deforestación, a favor de los intereses del agronegocio y de la ampliación de sus monocultivos; y contra la implementación del megaproyecto hidráulico Belo Monte, que está afectando la sobrevivencia y las formas de vida de los pueblos de la selva y la biodiversidad amazónica.

Reiteramos la convocatoria a participar en la Cumbre de los Pueblos que se realizará del 15 al 23 de junio en Río de Janeiro, que será un punto importante en la trayectoria de las luchas globales por justicia social y ambiental que estamos construyendo desde Río-92, particularmente a partir de Seattle, FSM, Cochabamba, donde se han catapultado las luchas contra la OMC y el ALCA, por la justicia climática y contra el G-20. Recogemos también las movilizaciones masivas como Occupy, indignados, la lucha de los estudiantes en Chile y otros países y la primavera árabe.

Convocamos a la movilización global el 5 de junio (día mundial del medio ambiente), el 18 de junio contra el G20 (que en esta oportunidad se centrará en el “crecimiento verde”) y a la marcha de la Cumbre de los Pueblos el 20 de junio, en Río de Janeiro y en el mundo, por la justicia social y ambiental, contra la “economía verde”, la mercantilización de la vida y la naturaleza y por la defensa de los bienes comunes y los derechos de los pueblos.

**Grupo de Articulación Internacional de la Cumbre de los Pueblos
por Justicia Social y Ambiental**

Río de Janeiro, 12 de mayo 2012



La revista Biodiversidad, sustento y culturas en versión digital se encuentra en:

<http://www.grain.org/article/categories/91-biodiversidad>

La Alianza Biodiversidad también produce Biodiversidad en América Latina:

<http://www.biodiversidadla.org>

Los sitios Web de las organizaciones de la Alianza:

GRAIN *<http://www.grain.org>*

REDES - Amigos de la Tierra *<http://www.redes.org.uy>*

ETC Group *<http://www.etcgroup.org>*

Grupo Semillas *<http://www.semillas.org.co>*

Acción Ecológica- Ecuador *<http://www.accionecologica.org>*

Campaña Mundial de la Semilla de Vía Campesina *<http://www.viacampesina.org>*

Acción por la Biodiversidad *<http://www.biodiversidadla.org>*

Red de Coordinación en Biodiversidad *<http://redbiodiversidadcr.info/>*

Sobrevivencia *<http://www.sobrevivencia.org.py>*

Centro Ecológico Ipé, Brasil *<http://www.centroecologico.org>*

MST *<http://www.mst.org.br>*

Sitios temáticos:

<http://www.farmlandgrab.org/> y <http://www.bilaterals.org/>

Biodiversidad, sustento y culturas es una revista trimestral (cuatro números por año). Se distribuye la versión electrónica gratuitamente para todas las organizaciones populares, ONGs, instituciones y personas interesadas.

Para recibirla deben enviar un mail con su solicitud a:

Acción por la Biodiversidad

sitiobiodla@gmail.com

Asunto: suscripción revista

Por favor envíen los siguientes datos

Correo electrónico, Organización, Actividad principal de la organización, Nombre y apellido, Teléfono, País, Dirección postal: código postal, ciudad, provincia (municipio), departamento (estado o entidad)



Acción Ecológica



red de coordinación en
biodiversidad

SOBREVIVENCIA
Apoyo Integral a Comunidades Nativas y Ecosistemas



**Amigos
de la
Tierra**



Esta publicación es una colaboración con
el Movimiento Mundial por los Bosques
Tropicales (WRM), Amigos de la Tierra
América Latina y El Caribe (ATALC)

